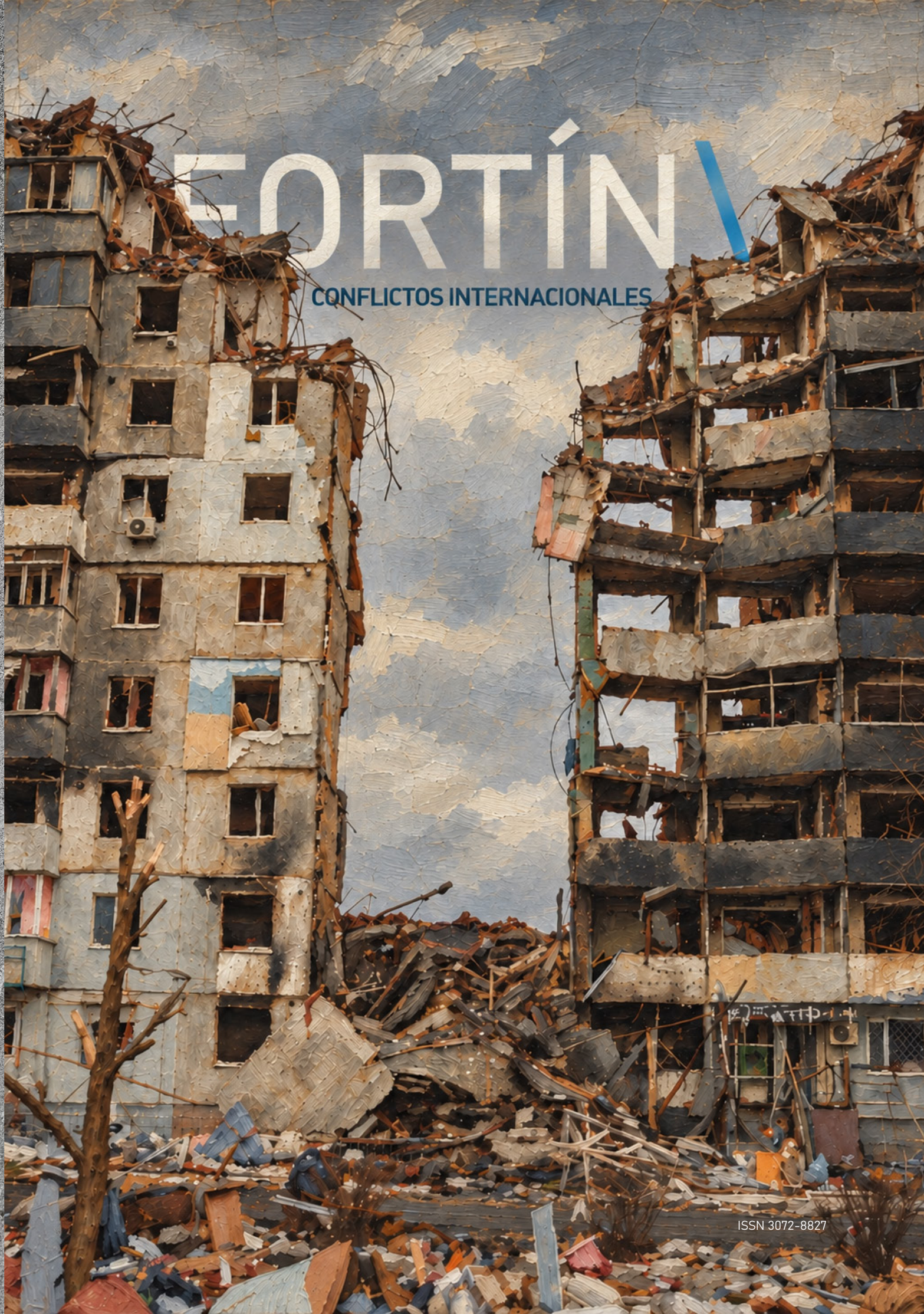


FORTÍN

CONFLICTOS INTERNACIONALES

ISSN 3072-8827



EL RETORNO DE **LA GEOPOLÍTICA**

EDITORIAL NÚMERO 6 AÑO 2026

Los conflictos internacionales vuelven a ocupar un lugar central en la configuración del orden mundial. La persistencia de las guerras convencionales, la emergencia de nuevas formas de confrontación y la creciente competencia entre las potencias expresan una transformación de las relaciones de poder que excede el ámbito militar. No se trata solamente de cambios en la naturaleza de los conflictos, sino de una modificación de las condiciones políticas, económicas, tecnológicas y estratégicas en las que los Estados ejercen su soberanía y procuran preservar su capacidad de decisión.

Durante décadas, la expansión de las relaciones económicas, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales fueron considerados factores capaces de reducir progresivamente el recurso a la fuerza. Los acontecimientos recientes obligan a revisar aquella expectativa. La cooperación internacional conserva su importancia, pero convive con una competencia estratégica en la que los intereses nacionales, las asimetrías de poder y la disputa por el control de recursos y capacidades adquieren una gravitación decisiva. El orden internacional no constituye un ámbito neutral en el que los Estados despliegan sus políticas: es también el resultado de relaciones de poder que condicionan sus posibilidades de acción.

Esta realidad impone una responsabilidad particular a los Estados. La defensa nacional no puede concebirse como una actividad circunscripta a la preparación de las Fuerzas Armadas ni como una respuesta que se activa únicamente frente a una amenaza inmediata. Constituye una dimensión esencial de la existencia estatal, vinculada con la preservación de la soberanía, la integridad territorial y la protección de los intereses nacionales. Su desarrollo requiere capacidades militares, pero también instituciones sólidas, recursos, conocimiento, desarrollo científico y tecnológico, formación profesional y una comprensión permanente de las transformaciones del entorno internacional. La capacidad de defenderse supone, en definitiva, la posibilidad de sostener en el tiempo las condiciones materiales y políticas que hacen efectivo el ejercicio de la soberanía.

Para la Argentina, esta reflexión adquiere una dimensión concreta. La cuestión Malvinas, la situación del Atlántico Sur, los espacios marítimos, los recursos naturales y la proyección argentina sobre la Antártida forman parte de una misma realidad estratégica. No pueden comprenderse de manera aislada ni al margen de las transformaciones geopolíticas que atraviesan el sistema internacional. Su abordaje exige una perspectiva que articule la historia, la geografía, la economía, la diplomacia y las capacidades de defensa, y que permita reconocer la continuidad de los intereses nacionales más allá de las circunstancias coyunturales.

La autonomía de una Nación no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos ni de la posesión de determinadas capacidades materiales. Depende, también, de su aptitud para comprender las relaciones de poder en las que se inscribe, reconocer los intereses que comprometen su destino y formular, sobre la base de ese conocimiento, decisiones propias. La capacidad de interpretar el orden internacional no es, por tanto, un atributo accesorio de la política de defensa: constituye una de las condiciones intelectuales de la soberanía. La investigación, la formación de profesionales y la producción de pensamiento estratégico son componentes sustantivos de esa capacidad.

La Universidad de la Defensa Nacional tiene una responsabilidad específica en esta tarea. Su misión no se agota en la formación de quienes integran el sistema de defensa. Comprende también la producción de conocimientos, el estudio de los problemas nacionales desde distintas disciplinas y la generación de ámbitos en los que la experiencia profesional dialogue con la investigación académica. La Universidad contribuye así a la formación de una inteligencia estratégica capaz de interpretar los problemas del país, examinar sus intereses permanentes y aportar elementos para la toma de decisiones del Estado. Pensar la defensa es, en este sentido, pensar las condiciones históricas, políticas, institucionales y materiales que hacen posible la existencia soberana de la Nación.

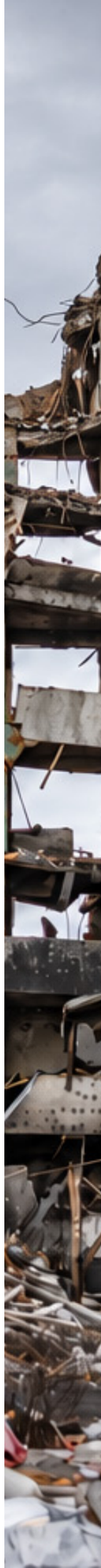
Este nuevo número de FORTÍN propone contribuir a esa tarea. Los artículos reunidos abordan conflictos armados, transformaciones tecnológicas, disputas de poder, problemas jurídicos y experiencias de cooperación internacional. A través de perspectivas y campos disciplinares diversos, examinan procesos que inciden sobre la configuración del orden mundial y sus implicancias para la Argentina. La pluralidad de enfoques no diluye la preocupación que los reúne: comprender las transformaciones del presente para ampliar la capacidad nacional de interpretar sus consecuencias y actuar sobre ellas.

La soberanía no se agota en el reconocimiento jurídico de los derechos de una Nación. Requiere la capacidad efectiva de ejercerlos, proteger sus recursos y determinar sus propias decisiones. Esa capacidad no se improvisa cuando las circunstancias la ponen a prueba. Se construye mediante instituciones, conocimiento, recursos y decisiones políticas sostenidas en el tiempo. En esa construcción, la defensa nacional y la formación de pensamiento estratégico ocupan un lugar insustituible.

Ese es, en definitiva, el desafío que nos convoca.

Universidad de la Defensa Nacional

F\



SAAVEDRA LAMAS
Y LA PAZ COMO PREMIO

MESA EDITORIAL **FORTÍN**\

En plena Guerra del Chaco, Carlos Saavedra Lamas convirtió la diplomacia en una forma concreta de detener la muerte. Su legado no se reduce al Nobel, sino a una idea más exigente: la paz como responsabilidad política efectiva.

En junio de 1935, mientras Bolivia y Paraguay todavía combatían en el Chaco, Buenos Aires fue sede de las negociaciones que permitieron detener la guerra. Al frente de la mediación argentina estaba Carlos Saavedra Lamas. El acuerdo llevaba las firmas de varios hombres y el esfuerzo de varios países. Para él, sería el hecho decisivo de una larga vida pública y la razón principal del reconocimiento que recibiría un año después.

Había nacido en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1878, en una familia estrechamente ligada a la historia argentina. Bisnieto de Cornelio Saavedra, se formó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. La docencia, el estudio del derecho y la política fueron actividades que sostuvo a lo largo de su trayectoria. Fue diputado nacional y ministro de Justicia e Instrucción Pública antes de asumir, en 1932, la conducción de la Cancillería durante la presidencia de Agustín P. Justo.

Llegó al cargo en un mundo que comenzaba a perder la confianza en los acuerdos construidos después de la Primera Guerra Mundial. En Sudamérica, la disputa entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal se convirtió en una guerra devastadora. Encontrar una salida requería atender reclamos territoriales, intereses económicos y decisiones militares, con gobiernos que debían responder ante sus propias sociedades por el costo de cada concesión.

Saavedra Lamas impulsó en 1933 el Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación, conocido por su apellido. El pacto condenaba las guerras de agresión y rechazaba el reconocimiento de adquisiciones territoriales obtenidas por la fuerza. Proponía encauzar las controversias mediante procedimientos pacíficos. Era una herramienta jurídica para sostener la negociación cuando la ocupación de un territorio amenazaba con convertirse, por sí misma, en fundamento de un derecho.

Esa tarea tuvo su prueba más exigente en el Chaco. Junto con representantes de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, participó de la mediación que permitió firmar el Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935. Dos días después cesaron los combates. Quedaba por resolver el litigio territorial: el tratado definitivo llegaría en 1938. La distancia entre ambas fechas permite comprender cuánto trabajo exigió transformar el cese del fuego en un acuerdo duradero.

En 1936 recibió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en el primer latinoamericano distinguido con un Nobel. Ese mismo año presidió la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Su actuación otorgó a la diplomacia argentina una importante proyección internacional y mostró la capacidad de los países de la región para intervenir en la resolución de sus conflictos. El reconocimiento reunía así dos dimensiones de su labor: la elaboración de normas internacionales y la búsqueda de acuerdos entre los países enfrentados.

Tras dejar la Cancillería en 1938, continuó su actividad académica. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1941 y 1943. Murió en su ciudad natal el 5 de mayo de 1959, a los ochenta años.

Su nombre quedó asociado a una medalla, aunque el alcance de aquella gestión se aprecia mejor al volver a junio de 1935. Había ejércitos enfrentados, una frontera en disputa y familias que esperaban noticias. Conseguir que las armas callaran abrió la posibilidad de regresar, reconstruir y discutir los desacuerdos sin seguir sumando muertos. Allí puede encontrarse el sentido más profundo de su legado: en la paz como resultado concreto de una responsabilidad política. Ese fue el verdadero premio.





REVISTA FORTÍN\

SUMARIO NÚMERO 6, AÑO 2026

SUMARIO

RETOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS
Y **OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA** \6
Marcos P. **Moloeznik.**

UNA GUERRA MUNDIAL NO DECLARADA
DOS TEATROS, DOS BLOQUES Y UN TERCER FRENTE POTENCIAL \15
Diego **Usatinsky.**

EL FIN DE LAS CERTEZAS. **LOS CONFLICTOS MODERNOS**
COMO LABORATORIO DE LO QUE VIENE \25
Maia **Bornsztein.**

DE LA BAJA **AL DATO** \33
Gonzalo **Restrepo Zanier.**

DEL IMPERIO A LA SUPERVIVENCIA.
LA ENCRUCIJADA GEOPOLÍTICA DEL CÁUCASO SUR \44
Diego **Álvarez Rivera.**

EL FANTASMA DE UNA GUERRA **EN DOS FRENTES PARA PAKISTÁN** \49
Adolfo **Koutoudjian.**

LA PACIENCIA DEL DÉBIL. GEOPOLÍTICA DEL DESGASTE
Y LA ENCRUCIJADA ASIMÉTRICA ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN \54
Adolfo **Rossi.**

LA GUERRA DE DESGASTE ENTRE RUSIA Y UCRANIA.
FRENTES ESTÁTICOS Y BATALLAS POR LA LOGÍSTICA \59
Guillermo **Spinelli.**

LA AMENAZA SILENCIOSA. **NIGERIA, EL GIGANTE DE ÁFRICA OCCIDENTAL**
Y EL CONFLICTO QUE AVANZA SIGILOSAMENTE DESDE EL SAHEL \66
John **Chinedum Igwenagum.**

LA GUERRA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO QUE POCOS VEN Y MUCHOS SUFREN.
LO QUE LA MONUSCO ENSEÑA A LA DEFENSA SUDAMERICANA \73
Carlos A. **Da Silva Néto.**

LA GEOMETRÍA DE LA DESCONFIANZA.
MEMORIAS DE UN CASCO AZUL EN LA FRONTERA PERSA \82
Daniel **Esteban.**

RUANDA FUE NACER COMO PERSONA.
DOS AÑOS EN EL CONTEXTO POST GENOCIDIO EN MUHORORO \88
Mesa Editorial **Fortín.**

POR DEBAJO DEL UMBRAL. CONFLICTOS SILENCIOSOS QUE EROSIONAN
POR GOTEO LA LIBERTAD DE ACCIÓN DEL ESTADO \103
Pablo A. **Farías.**

Algunas de las imágenes incluidas en esta edición han sido generadas o intervenidas técnica y artísticamente, de forma parcial o total, mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). Este recurso se ha utilizado con el fin de ilustrar contenidos históricos o conceptuales, manteniendo siempre el respeto por la temática abordada. Dada su naturaleza de recreación digital, estas piezas se proponen como una interpretación estética para acompañar el relato, pudiendo diferir de la precisión documental en pos de su valor narrativo.



Aeropittura futurista
Tullio Crali

RETOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS Y **OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA**

MARCOS P. **MOLOEZNIK.** PROFESOR DE LA UDEG Y PROFESOR HONORARIO DE LA UGR

Mientras la atención mundial se concentra en otros conflictos, en el este del Congo las milicias armadas disputan territorios, recursos y rutas estratégicas. La experiencia de la MONUSCO revela desafíos operacionales que Argentina y Brasil no deberían considerar ajenos.

A Winston Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña durante la segunda conflagración mundial (1939-1945), se le atribuye la frase: "La historia de la humanidad es la historia de la guerra"; porque prácticamente a lo largo del devenir histórico del hombre no se presentan periodos caracterizados por la paz e, incluso, los cortos interregnos de ausencia de conflictos armados servían para prepararse para la siguiente guerra, acuñándose el término "paz armada".

En otras palabras, **la guerra es una constante histórica que demuestra que es la realpolitik la que domina el escenario internacional**, por lo que conviene dar cuenta de los retos que traen aparejados los conflictos armados contemporáneos a partir de la identificación de sus notas esenciales que los separan de los que los precedieron.

Se trata de lo que se denominan conflictos armados de la postguerra fría, conflictos armados de cuarta generación o guerras híbridas, término acuñado por James N. Mattis y Frank G. Hoffman, oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos (USMC) en 2005, cuya emergencia coincide con la implosión de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991.

En tanto que los organismos de monitoreo internacional y jurídico registran en el año en curso entre 110 y 130 conflictos armados activos en todo el mundo, con una afectación de cerca de 60 países; siendo la mayoría de estos de carácter no internacional.

Y es que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reconoce solo dos tipos de conflictos armados: los conflictos armados internacionales (CAI), tradicionales e interestatales, en los que se enfrentan fuerzas armadas de dos o más Estados-nación, y los conflictos armados no internacionales (CANI), intrasociales e internos, en los que se enfrentan instrumentos coercitivos del Estado contra grupos armados organizados o estos últimos entre sí en el seno de un Estado.



Para que exista un CANI, a partir de la jurisprudencia del extinto Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (TPIY), la comunidad internacional acepta que se deben cumplir dos condiciones:

En primer lugar, **la intensidad de la violencia** que debe superar a los actos aislados y esporádicos; siendo necesario que el enfrentamiento alcance un umbral de intensidad de la violencia que no pueda controlarse mediante la actividad policial habitual en tiempo de paz, es decir, que imponga la intervención de las fuerzas armadas. Mientras que entre los elementos indicativos para evaluar el nivel de dicha intensidad se contemplan: el número de enfrentamientos y la duración e intensidad de cada uno de los mismos; el tipo de medios (armas y equipamiento militar utilizado); el número y el calibre de las municiones utilizadas; el número de combatientes y los tipos de fuerzas que participan en los enfrentamientos; el número de víctimas; la extensión de la destrucción material y el número de civiles expulsados de las zonas de combate. También, en algunos casos se suele tomar en cuenta la eventual intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y,

En segundo lugar, **la organización colectiva de las partes en conflicto**, que le permitan llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas de combate. Para el entonces TPIY, en la evaluación de los grupos armados no estatales debe estar presente una serie de factores indicativos que incluyen elementos tales como: la existencia de una cadena de mando y de normas y mecanismos disciplinarios dentro del grupo; contar con un cuartel general; ejercer cierto control territorial; tener capacidad para aprovisionarse de armamento y de otro equipamiento; estar en condiciones de reclutar personal y de desarrollar entrenamiento militar; poder planificar, coordinar y ejecutar operaciones militares, incluyendo movimientos de tropas y logística; definir una estrategia militar unificada y emplear tácticas militares; contar con un vocero oficial; y tener la capacidad para negociar y celebrar acuerdos de paz o de cese al fuego, entre otros.

Tratándose de un CANI, se aplica el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949: considerado un "convenio en miniatura", tiende un manto de protección legal sobre las personas que no participan directamente o que dejan de participar activamente en las hostilidades, prohíbe (en cualquier tiempo y lugar) el homicidio en todas sus modalidades, la mutilación, la tortura y los suplicios, los tratos crueles e inhumanos, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los humillantes y degradantes, así como las condenas dictadas sin que se observen todas las "garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados", al tiempo que obliga a recoger y asistir a los heridos y enfermos. En síntesis, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra constituye una "vara mínima vinculante", cuya observancia es obligatoria para cada una de las partes en conflicto, independientemente de ser actores estatales o no estatales.

En este marco, conviene señalar que a partir del estallido de hostilidades, ya sea un CAI o un CANI, el derecho aplicable es el Derecho Internacional de los Conflictos Armados. (DICA), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho de la Guerra (Jus in Bello), rama del Derecho Internacional Público que, como derecho de excepción, tiene por finalidad proteger a las víctimas de los conflictos y regular la conducción de las hostilidades. En otras palabras, el DIH regula las situaciones de conflicto armado una vez que surgen e independientemente de la parte que le dio inicio, es decir, se aplica solo en casos de conflicto armado y ha sido específicamente formulado para dichas situaciones, con el objeto de brindar protección sobre aquellos que no participan en las hostilidades (población civil o no combatientes) o que dejan de participar directamente en las mismas, tales como los prisioneros de guerra, los heridos en combate, los enfermos y los náufragos, en caso de la guerra naval. Adicionalmente, persigue limitar los efectos de las hostilidades sobre los combatientes propiamente dichos, al establecer límites a los métodos (estrategias operacionales y tácticas) y medios (sistemas de armas) de hacer la guerra.

La idea-fuerza que subyace en el DIH es que mientras en el amor todo se vale, en la guerra hay límites establecidos por las normas consuetudinarias (costumbre, que se erige en la principal fuente del Derecho Internacional) y el derecho convencional o de los tratados (convenios e instrumentos jurídicos internacionales). Todo quebrantamiento o infracción grave a dichos límites importa un crimen de guerra que, por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible.



La idea-fuerza que subyace en el DIH es que mientras en el amor todo se vale, en la guerra hay límites establecidos



Retos de los conflictos armados contemporáneos

Ahora bien, siguiendo al filósofo de la guerra de Occidente, Karl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, es la política misma que sustituye a la pluma por la espada, es por ende la política con derramamiento de sangre; para este pensador militar prusiano de la primera mitad del siglo XIX la guerra es un "verdadero camaleón, por el hecho de que en cada caso concreto cambia de carácter"; metamorfosis que presenta retos de la mano de la evolución de la ciencia y la tecnología, cuyo impacto es puesto de relieve por primera vez en el libro Anti-Dühring, de Friedrich Engels, a quien le tocó cubrir la guerra de secesión norteamericana (1861-1865) como corresponsal de diarios londinenses.

El siglo XXI no escapa a este dinamismo, presentando así sus propias notas esenciales que caracterizan a las guerras de cuarta generación. En primer lugar, se destaca la prolongación temporal de las hostilidades. El profesor Martin Van Creveld demuestra que el promedio de las guerras se ha extendido de 6 meses a 7 años, convirtiéndose en guerras de desgaste material y psicológico que afectan fundamentalmente a la población civil y en un obstáculo para cualquier proyecto viable de nación. Lo que se encuentra agravado porque se suelen utilizar medios simétricos y asimétricos coordinados en tiempo, espacio y propósito para alcanzar una finalidad deseada, asociando los niveles de conducción táctico, operacional y estratégico, en lo que se ha dado en denominar "guerras híbridas".

Por otra parte, se evidencia la complejidad para su categorización. Como ya se puso de relieve, para el CICR solo existen dos tipos de conflictos armados: los internacionales (CAI) y los no internacionales (CANI), y su categorización es clave para el establecimiento de las normas jurídicas aplicables. Lo que suele ocurrir es que en muchos casos no queda clara la separación entre guerra y actos criminales acompañados por una intensidad de la violencia que cumple con las condiciones de un conflicto armado.

La complejidad viene, asimismo, dada por actos descriptos como "híbridos" que incluyen el accionar tanto militar como no militar, así como operaciones que son abiertas o encubiertas, cinéticas o no cinéticas (por ejemplo, la desinformación o las ciber operaciones), letales o no letales. Además, muchos gobernantes se niegan a reconocer la existencia de un CANI. De ahí que suela recurrirse al término "zona gris", que sugiere que la línea entre guerra y paz es difusa, o que el derecho vigente no es claro o no existe en ciertas situaciones.

No obstante, mientras algunas de estas modalidades son viejas y otras nuevas, el Derecho Internacional es aplicable a todas las situaciones y, a los fines de la aplicación o no del DIH, es cuestión de determinar si una situación específica constituye conflicto armado; para el CICR se debe revisar caso por caso para determinar la existencia de un CA.

En este marco, se observa en primer lugar la privatización y la consecuente pérdida del monopolio estatal de la guerra, en la que el Estado renuncia a la prerrogativa establecida desde el fin de la Guerra de los Treinta Años en Europa, tanto por su debilidad como por el peso y presencia de ejércitos privados o empresas militares que desempeñan funciones reservadas a las fuerzas armadas o, lo que es lo mismo, la subcontratación de funciones militares tradicionales a empresas privadas.



Se trata de una regresión a la época de los condottieri o lansquenetes, de mercenarios o perros de la guerra que se venden al mejor postor y que actualmente por ejemplo combaten en el conflicto armado Rusia-Ucrania en ambos bandos (del lado ruso destaca el grupo paramilitar Wagner); antítesis de los ejércitos ciudadanos. Así, en muchas regiones del orbe, como el África subsahariana, se constata un proceso de socialización de los costos de la guerra, que descansa en las espaldas de la población, y de privatización de las ganancias o utilidades obtenidas al calor de las hostilidades.

Por otra parte, se evidencia la elevada tasa de defunción de civiles por ser, mayoritariamente, conflictos armados de carácter no internacional (CANI), que dan al traste con el principio de distinción entre combatientes y no combatientes y que afectan sobre todo a la población civil; actualmente casi el 100 por ciento de las defunciones, mutilaciones y heridos de las guerras son no combatientes, cuya consolidación reside en el proceso de urbanización de los conflictos armados.

De este modo, los combates se desarrollan en zonas urbanas y muchas veces densamente pobladas, como por ejemplo la Franja de Gaza: uno de los riesgos más graves para la vida y los medios de sustento es el deterioro de servicios esenciales tales como la generación y distribución de energía eléctrica, el acceso al sistema de salud, el tratamiento del agua y de las aguas residuales, la recolección y eliminación de residuos sólidos, los sistemas de mercado que proporcionan alimentos y otros artículos básicos para los hogares, las telecomunicaciones, los sistemas financieros, la movilidad y transporte de personas y mercancías, la educación y, en general, todos los sistemas interconectados que las personas necesitan para vivir en entornos poblados.

Dicho en otras palabras, las guerras ya no se libran en el campo de batalla con el fin de alcanzar un objetivo político a través de una batalla decisiva; la violencia la ejercen diversos y complejos grupos de actores armados no estatales que luchan en medio de la población y que suelen utilizar a los civiles como escudos humanos, por lo que resulta difícil distinguir lo político de lo económico, lo público de lo privado, lo militar de lo civil. En este marco, se advierte una clara tendencia hacia la desmilitarización, fenómeno que encuentra sus raíces en dos vertientes principales: por un lado, la integración de instrumentos coercitivos por milicianos rápidamente reclutados por señores de la guerra o caudillos (warlords), lo que incluye a aproximadamente 300.000 niños combatientes, muy lejos de recibir una instrucción militar básica que los prepare para participar activamente en las hostilidades; por otro lado, el hecho de que los sistemas de armas (medios para el DIH) suelen ser livianos (de hecho, el fusil de asalto Kalashnikov AK-47 se erige como el símbolo de las guerras actuales), mientras que los escasos medios de uso militar convencional pesado, como la artillería y los tanques, constituyen rezagos de la Guerra Fría o era bipolar.





Por otra parte, las asimetrías entre los beligerantes reflejan diferencias abismales de capacidad tecnológica y militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel, por ejemplo, ejercen superioridad aérea y marítima sobre la Franja de Gaza frente a los grupos armados que combaten. Esta desigualdad condiciona la conducción de las hostilidades y las respuestas de quienes disponen de menores recursos. La disparidad no sólo se manifiesta en el equipamiento, sino también en vigilancia, precisión y proyección operacional.

Ante tales desventajas, algunos actores recurren a tácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario (DIH), vulnerando el principio de distinción o la prohibición de la perfidia. Grupos como Hamás en Gaza y Hezbollah en el sur del Líbano operan en entornos urbanos densamente poblados, donde la proximidad entre combatientes y civiles incrementa el riesgo de daños incidentales. La participación directa de civiles en hostilidades puede suspender temporalmente su protección contra ataques directos, sin eliminar las demás obligaciones jurídicas de las partes.

Siguiendo al jurista Nils Melzer, uno de los grandes retos de los conflictos asimétricos radica en la falta de reciprocidad material entre beligerantes, que agrava sus efectos humanitarios y tensiona el respeto por las normas aplicables. Las desventajas también pueden buscar compensarse mediante el lawfare, entendido, según el Cambridge English Dictionary, como el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente». En este sentido, leyes, fiscalías y tribunales pasan a integrar una estrategia de desgaste que desplaza parte de la confrontación al terreno jurídico.

El impacto de las nuevas tecnologías en los métodos y medios de hacer la guerra.

La tecnología digital, las herramientas cibernéticas y ciberoperaciones, la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de armas cada vez más autónomos, son algunos aspectos a considerar. En particular, al CICR le preocupa el uso creciente de sistemas de armas con distintos grados de autonomía, y de sistemas que utilizan inteligencia artificial para contribuir a tomar decisiones sobre los objetivos y las modalidades de ataque; en otros términos, el uso de sistemas de armas (medios) con funciones o modos cada vez más autónomos, en especial pequeños drones armados y municiones de tipo loitering, también conocidas como “merodeadoras”.

Además, los conflictos armados contemporáneos presentan tendencias preocupantes en el plano tecnológico e informacional. Por una parte, se advierte el empleo de ataques cibernéticos por parte de actores tanto estatales como no estatales, concebidos para desestabilizar la infraestructura digital de gestión, los servicios esenciales y, en general, las economías nacionales. Por otra parte, cobra fuerza el uso de instrumentos de comunicación digital para acelerar y ampliar el alcance de operaciones de información que exacerban la violencia y pavimentan el camino para el quebrantamiento del DIH. A este escenario se añade la constante preocupación de Ginebra ante la posible afectación de las funciones y servicios civiles esenciales por su cada vez mayor dependencia de sistemas espaciales, de los cuales tampoco quedan exentas las operaciones militares.

Otro aspecto que llama la atención es el menor costo de ciertos medios como los drones y los misiles de fabricación propia que, por ejemplo, fueron proporcionados por la República Islámica de Irán a los hutíes para atacar blancos en Israel y Arabia Saudita, marcaron ex ante la diferencia a favor de Azerbaiyán en su guerra contra los separatistas armenios de Nagorno Karabaj, gracias al apoyo de Turquía, y que en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania han logrado la destrucción de sistemas de armas pesadas y sofisticadas como tanques y blindados de mucho mayor costo, y la neutralización del dominio de mar Negro ejercido por la armada de la Federación Rusa, cuyos buques de superficie demostraron ser por demás vulnerables, lo que quedó demostrado con el hundimiento del crucero Moskvá, buque insignia de la flota rusa del mar Negro, por el impacto de 2 misiles antibuque R-360 Neptune de fabricación ucraniana de bajo costo y, posteriormente, cuando con drones marinos fue echado a pique el César Kunikov, un gran buque de asalto anfibio ruso.



Retos de otras situaciones de violencia

En otro orden, a la luz de los recientes eventos de violencia y vandalismo en Francia, conviene reflexionar sobre lo que el CICR denomina otras situaciones de violencia (OSV), en las que se encuadran dichos acontecimientos del Viejo Mundo.

Se trata de una zona gris a caballo entre la guerra y la paz que cuestiona severamente la seguridad pública, el orden público y la paz social, y que se define como "actos aislados y esporádicos de violencia", tales como tensiones, disturbios, motines (incluyendo los carcelarios) y otros actos análogos que, si bien no alcanzan el umbral de intensidad del conflicto armado y, por ende, no están sujetos a las leyes y costumbres de la guerra, generan efectos humanitarios muchas veces de mayor alcance y calado que una guerra propiamente dicha.

En general, suelen rebasar las capacidades policiales y de las fuerzas de seguridad o intermedias (a la sazón, policías militarizadas como los cuerpos de gendarmería), y en muchos casos imponen la declaración del estado de sitio, de excepción o de emergencia, la consiguiente suspensión o restricción de derechos humanos como la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y libre tránsito (incluido el toque de queda), y autorizan el uso intensivo del componente militar para restablecer la normalidad. Esto explica por qué, si bien escapan a la competencia del CICR, desde 1993 Ginebra estudia estos fenómenos y produce doctrina sobre el uso de la fuerza por los instrumentos coercitivos estatales, a los que se aplica el derecho interno del Estado soberano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo que subyace en las OSV es un severo cuestionamiento del monopolio legítimo de la violencia física en un territorio dado, nota esencial del Estado moderno conforme al sociólogo Max Weber, al disputárselo actores no estatales: sectores de la población que responden violentamente por hartazgo social ante la incapacidad de los gobernantes para resolver asuntos de interés público y hacer valer sus derechos; el crimen organizado y el terrorismo; la creciente injerencia de empresas privadas de seguridad ante el fracaso del Estado; y ciudadanos que se toman la justicia por propia mano. Ocurre que, en muchos casos, la autoridad, como árbitro de los conflictos sociales, renuncia al uso legítimo de la fuerza y deja expedito el camino para que los particulares recurran a la violencia.

Durante siglos, el escenario internacional estuvo dominado por el aforismo latino si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra), pues el conflicto armado ha sido y es una constante en la historia de la humanidad.

Se trata de un fenómeno dinámico que sufre mutaciones y que, desde 1991, trae aparejados retos de nuevo cuño; incluso, la renuncia al monopolio de la guerra, establecido por los tratados de paz de Westfalia en 1648, en algunos Estados-nación categorizados como fallidos (failed state), así como la erosión (cuando no la pérdida) del monopolio estatal de la fuerza de fronteras hacia adentro cuando la conducción política decide evitar el uso de la fuerza que legítimamente le corresponde por mandato de ley. Ello contribuye al desarrollo de una cultura de la transgresión y a la anomia social, así como al convencimiento de ciertos sectores de que pueden recurrir a la violencia privada sin consecuencia ni sanción alguna.

En el caso de la guerra, desde el estallido de las hostilidades se aplica el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), Derecho Internacional Humanitario (DIH), o Derecho de la Guerra en sus dos vertientes: la costumbre y su codificación en instrumentos jurídicos como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Sin embargo, los conflictos armados contemporáneos se caracterizan por el incumplimiento de las leyes y costumbres de la guerra y un proceso de deshumanización, agravado por la emergencia de actores no estatales y nuevas tecnologías, cuyo principal efecto es la centralidad de la población civil o no combatiente como víctima.

Como quiera que sea, el poder duro (hard power), principalmente el factor militar, se impone en la arena internacional, dando al traste con la proscripción del uso de la fuerza y de la amenaza al uso de la fuerza establecida como fundamento de la Carta de Naciones Unidas. De donde, todo Estado-nación que se precie de serlo debe contar con un instrumento militar con capacidades tanto disuasivas como de proyección de su poder nacional para la defensa y preservación de su soberanía y la promoción de sus objetivos e intereses nacionales. Y es que la principal enseñanza de las relaciones internacionales signadas por la realpolitik es que lo que el Derecho Internacional Público, como su rama del Derecho del Mar, le reconoce a todo Estado soberano debe, por tanto, respaldarse en sus fuerzas armadas.

La experiencia del Congo advierte que proteger la soberanía exige cooperación regional, inteligencia y capacidades militares adaptadas a las amenazas híbridas.

F\



OPERACIÓN TELARAÑA
BASE OLENYA

1 de junio de 2025, Operación Telaraña.
Un histórico ataque ucraniano con drones golpeó la base aérea rusa de Olenya en el Ártico. Infiltrados mediante camiones civiles en territorio enemigo, los dispositivos destruyeron y dañaron severamente múltiples bombarderos estratégicos de largo alcance.



**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

UNA GUERRA MUNDIAL NO DECLARADA

DOS TEATROS, DOS BLOQUES Y UN TERCER FRENTE POTENCIAL

DIEGO **USATINSKY.** OFICIAL DE ASUNTOS POLÍTICOS DE LA EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA

El sistema internacional y una estructura de conflicto global bipolar, interconectado y parcialmente militarizado

¿Está el mundo atravesando una Tercera Guerra Mundial sin haberla declarado? Probablemente la respuesta dependa menos de la existencia de una declaración formal de guerra que de la definición que utilicemos para caracterizar un conflicto mundial.

Desde una perspectiva clásica, no existe actualmente una guerra mundial, puesto que las principales potencias no se encuentran formalmente en guerra entre sí y no existe una movilización generalizada comparable con las de 1914 o 1939, y buena parte de los intercambios económicos internacionales continúan funcionando. Sin embargo, si el análisis se desplaza desde las declaraciones formales hacia la estructura de las alianzas, los flujos de armamento, inteligencia y financiamiento, y la distribución geográfica de las operaciones militares, emerge una realidad diferente.

El sistema internacional parece haber ingresado en una suerte de Segunda Guerra Fría, con una diferencia fundamental respecto de la primera; esta nueva confrontación contiene múltiples guerras calientes simultáneas y crecientemente interconectadas.

Teniendo en cuenta esa interconexión, los conflictos iniciados o intensificados desde 2022 pueden analizarse como partes de una misma confrontación sistémica, actualmente organizada alrededor de dos grandes teatros de operaciones, uno septentrional y otro meridional, y con la posibilidad de apertura de un tercero en el Indo-Pacífico.

No se trata de afirmar que Moscú, Beijing, Teherán y Pyongyang conformen una alianza equivalente a la OTAN, ni que Israel, los Estados árabes y los miembros de la Alianza Atlántica constituyan un único bloque político. Sus intereses divergen en numerosos aspectos. Sin embargo, la interacción entre sus acciones genera progresivamente una lógica de bloques que trasciende cada conflicto individual.





El teatro norte: Ucrania como epicentro europeo

El primero de estos escenarios es el teatro de operaciones norte, cuyo campo de batalla principal continúa siendo Ucrania.

Desde la invasión rusa de febrero de 2022, lo que comenzó como una guerra ruso-ucraniana adquirió progresivamente características internacionales. Rusia continúa aportando el grueso de los combatientes y del esfuerzo militar, pero su capacidad bélica se encuentra vinculada cada vez más estrechamente con otros actores. Irán proporcionó drones y otros sistemas militares a Rusia, mientras que Corea del Norte avanzó todavía más, suministrando armamento, municiones y posteriormente efectivos militares. La propia OTAN confirmó el despliegue de unidades norcoreanas en territorio ruso y su participación en operaciones relacionadas con la guerra. China ocupa una posición diferente: no interviene militarmente de manera directa, pero se convirtió en un soporte fundamental para la economía rusa y, particularmente, para su complejo industrial-militar mediante comercio, componentes tecnológicos y bienes de doble uso.

No existe un equivalente formal al artículo 5 de la OTAN entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Lo que existe es una complementariedad estratégica de facto: Rusia aporta poder militar convencional y nuclear; China da profundidad económica, industrial y tecnológica; Irán da experiencia en sistemas no tripulados, misiles y guerra asimétrica (con sus proxis); y Corea del Norte, municiones y recursos humanos. Del otro lado, Ucrania tampoco combate exclusivamente con recursos propios: Estados Unidos y, crecientemente, los miembros europeos de la OTAN proporcionan armamento, entrenamiento, inteligencia, financiamiento y respaldo logístico.

Por lo tanto, el teatro ucraniano constituye simultáneamente una guerra nacional y una confrontación internacional indirecta. Soldados rusos y ucranianos ocupan la mayor parte de las posiciones de combate, pero detrás de ellos funcionan dos redes internacionales que permiten sostener el esfuerzo bélico.

La característica distintiva es que los principales Estados occidentales han conseguido participar sin comprometer directamente sus fuerzas terrestres en combate contra Rusia. Europa ha transferido cantidades significativas de recursos financieros y militares, y ha incrementado sustancialmente su gasto de defensa, pero los ejércitos europeos permanecen fuera del campo de batalla ucraniano.

Los recursos comprometidos y la capacidad militar movilizable son variables diferentes.

El teatro sur: Medio Oriente y la expansión de la confrontación

El segundo escenario puede denominarse teatro de operaciones sur y comprende Medio Oriente, el Golfo Pérsico y sus espacios marítimos adyacentes. Aquí la configuración es diferente, pero los actores vuelven a aparecer.

Durante años Irán desarrolló una arquitectura regional basada en fuerzas propias y organizaciones aliadas o proxies: Hezbollah en Líbano, milicias chiitas en Irak y Siria, los hutíes en Yemen y organizaciones palestinas como Hamás, aunque cada una conserva diferentes grados de autonomía política y operacional respecto de Teherán.

Israel constituye el principal adversario militar regional de esta estructura, pero la participación directa estadounidense en operaciones contra Irán durante 2026 transformó cualitativamente la confrontación. Washington dejó de ocupar exclusivamente el rol de proveedor, garante y apoyo de Israel para convertirse también en actor militar directo.

La conexión con el teatro norte resulta particularmente significativa. Rusia e Irán desarrollaron durante los últimos años una relación militar cada vez más estrecha. Durante el conflicto de 2026 incluso surgieron evidencias de que Moscú proporcionó a Teherán inteligencia para localizar activos militares estadounidenses en Medio Oriente.

La relación, por lo tanto, funciona en ambas direcciones: Irán contribuyó al esfuerzo militar ruso en Europa y Rusia contribuyó posteriormente a las capacidades iraníes en Medio Oriente.

A esta estructura deben incorporarse los países árabes del Golfo y Jordania. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Jordania no pueden ser considerados simplemente miembros de un “bloque occidental” porque mantienen políticas exteriores propias, diferentes relaciones con Washington y, en algunos casos, importantes vínculos económicos con China. Sin embargo, frente a la expansión regional del conflicto iraní, sus sistemas defensivos, bases, espacio aéreo e infraestructura adquieren relevancia para la arquitectura de seguridad asociada a Estados Unidos.

La guerra deja entonces de parecer una sucesión de crisis independientes. Los actores que sostienen el esfuerzo ruso en el norte aparecen directa o indirectamente vinculados al enfrentamiento con Estados Unidos e Israel en el sur y los Estados que respaldan a Ucrania pertenecen, en gran medida, a la misma arquitectura estratégica liderada por Washington.



La variable decisiva: la fuerza todavía no empleada

Esta es quizás la cuestión militar más relevante: una guerra no se evalúa solamente observando los recursos desplegados, sino también considerando aquellos que todavía pueden ser desplegados.

Estados Unidos constituye el caso más evidente. Incluso después de importantes operaciones aéreas y navales, Washington conserva una enorme reserva estratégica. Una fracción de su Armada y de su Fuerza Aérea puede encontrarse comprometida simultáneamente en distintos escenarios, sin que ello implique una movilización general del instrumento militar estadounidense. Su Ejército, especialmente sus grandes unidades terrestres, permanece en gran medida fuera de estos teatros.

Europa presenta una situación todavía más extrema. Los miembros europeos de la OTAN han entregado sistemas de armas, municiones, recursos financieros y entrenamiento a Ucrania y reforzado el flanco oriental de la Alianza, pero no han desplegado sus ejércitos para combatir directamente contra Rusia.

Algo similar ocurre con los Estados árabes alineados defensivamente frente a Irán: pueden comprometer capacidades de defensa aérea, infraestructura, inteligencia y apoyo logístico, sin haber movilizado su potencial ofensivo de manera comparable con los actores directamente beligerantes.

Desde esta perspectiva, el bloque compuesto, con todas las precauciones conceptuales que requiere el término, por Estados Unidos, Europa, Israel y determinados socios árabes conserva una profundidad militar no movilizada extraordinariamente significativa.

La situación del otro agrupamiento es diferente: Irán y sus aliados regionales tuvieron que emplear durante años una proporción considerable de sus capacidades operativas disponibles, especialmente misiles, drones y fuerzas irregulares. Rusia ha movilizado una parte mucho mayor de su instrumento terrestre y ha transformado progresivamente su economía hacia las necesidades de una guerra prolongada.

Sin embargo, Rusia tampoco agotó su capacidad estratégica. Conserva fuerzas nucleares, capacidades aeroespaciales y una parte significativa de su poder naval fuera del esfuerzo cotidiano de Ucrania.

Una comparación estática de las fuerzas desplegadas puede resultar engañosa: más importante que preguntarse quién tiene más poder actualmente en el campo de batalla es observar qué coalición tiene mayor capacidad para escalar sin alcanzar antes sus límites estructurales.

En ese indicador, Estados Unidos y sus aliados mantienen inicialmente una ventaja.



**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

Los campos de batalla como laboratorios tecnológicos

Ucrania y Medio Oriente se han convertido en grandes laboratorios de experimentación militar en condiciones reales de combate. Sin embargo, cada teatro está impulsando desarrollos tecnológicos diferentes porque los problemas operacionales que deben resolver también son distintos.

En el teatro norte, la guerra ruso-ucraniana está acelerando especialmente el desarrollo de inteligencia artificial, robótica, sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones resilientes y nuevas herramientas de comando y control. Ucrania constituye probablemente el ejemplo más avanzado de esta transformación. La enorme proliferación de drones convirtió buena parte del frente en un espacio permanentemente observado, donde concentraciones de tropas, vehículos o posiciones pueden ser detectadas y atacadas en períodos extremadamente breves. Esto está reduciendo progresivamente la distancia entre detección, identificación, decisión y ataque.

La inteligencia artificial comienza a incorporarse precisamente en esa cadena. Hay sistemas de reconocimiento automático de imágenes que permiten clasificar objetivos a partir de enormes volúmenes de video producidos por drones y otros sensores; algoritmos que ayudan a procesar información operacional, y diferentes plataformas que empiezan a integrarse dentro de redes capaces de proporcionar una imagen prácticamente continua del campo de batalla.

En 2026, por ejemplo, Ucrania comenzó a probar en combate sistemas de drones interceptores capaces de automatizar aproximadamente el 95 % del proceso de intercepción de otros UAV: una vez seleccionado el blanco por el operador, el sistema puede navegar hacia él, identificarlo mediante inteligencia artificial y realizar automáticamente las fases finales de seguimiento e intercepción. Al mismo tiempo, Ucrania y sus socios occidentales están utilizando millones de imágenes obtenidas durante la guerra para entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial aplicables al reconocimiento y la adquisición de blancos.

La guerra está funcionando como un gigantesco ciclo de innovación, empleo operacional, aprendizaje y rediseño que puede medirse en meses e incluso semanas, en lugar de los tradicionales ciclos de adquisición militar de años o décadas.

La robótica terrestre atraviesa un proceso similar. Vehículos terrestres no tripulados ya son utilizados para transporte logístico, colocación de minas, evacuación de heridos e incluso determinadas misiones ofensivas. Su desempeño sigue presentando limitaciones importantes, especialmente frente a terrenos complejos, interferencias electrónicas y problemas de autonomía energética, pero precisamente por ello Ucrania proporciona algo extremadamente difícil de obtener durante tiempos de paz: muchísimas horas de experiencia operacional real.

También se está desarrollando una verdadera competencia entre drones y guerra electrónica. Rusia y Ucrania modifican constantemente frecuencias, sistemas de navegación, enlaces de datos y mecanismos de interferencia. La aparición de drones controlados mediante fibra óptica es precisamente una respuesta a la creciente eficacia de los sistemas de jamming. Cada innovación genera una contramedida y cada contramedida una nueva adaptación.

La dimensión cibernética completa este proceso. La protección de comunicaciones, infraestructura energética, redes militares, sistemas de navegación y centros de comando se ha convertido en una parte inseparable de las operaciones convencionales.

Es por eso que el teatro norte puede ser entendido como el principal laboratorio contemporáneo de la digitalización y automatización del campo de batalla terrestre. La experiencia ucraniana ya está siendo incorporada por la OTAN: en 2026 la Alianza anunció inversiones superiores a 40.000 millones de dólares en capacidades contra drones durante los siguientes cinco años, y programas conjuntos con Ucrania buscan trasladar tecnologías probadas en combate hacia las fuerzas occidentales.



El teatro sur, en cambio, está impulsando especialmente otra revolución tecnológica: la defensa frente a ataques masivos mediante misiles, cohetes y vehículos no tripulados. La experiencia israelí constituye probablemente el caso más avanzado de construcción de una defensa aérea y antimisil multicapa sometida regularmente a condiciones reales de combate. Los sistemas Iron Dome, David's Sling y Arrow permiten asignar diferentes interceptores según las características, trayectoria y alcance de cada amenaza, pero esta arquitectura presenta un problema económico fundamental.

La proliferación de drones y municiones relativamente económicas permite que un atacante intente saturar sistemas defensivos utilizando armas cuyo costo puede ser sustancialmente inferior al del interceptor necesario para destruirlas. En una guerra prolongada, por lo tanto, la cuestión deja de ser únicamente si técnicamente es posible interceptar una amenaza, y pasa a ser también cuánto cuesta hacerlo y cuántos interceptores pueden producirse. De allí la importancia de los sistemas de energía dirigida.

A fines de 2025, Israel entregó a sus Fuerzas de Defensa el primer sistema operativo Iron Beam, un láser de alta potencia destinado a complementar, no reemplazar, los sistemas cinéticos existentes. En pruebas realizadas previamente, había demostrado capacidad contra cohetes, morteros y UAVs, y durante 2026 continuó su integración con el sistema de comando y control de Iron Dome.

La importancia estratégica del láser no reside solamente en su precisión, reside en modificar potencialmente la ecuación económica de la defensa aérea. Mientras un interceptor convencional constituye una munición que debe fabricarse, almacenarse y reponerse, un arma láser puede efectuar sucesivos disparos mientras disponga de energía y mantenga las condiciones necesarias para operar. No elimina, naturalmente, la necesidad de misiles interceptores, ya que condiciones atmosféricas, distancias, potencia disponible y características del blanco continúan imponiendo limitaciones, pero introduce una capa defensiva cuyo costo marginal por intercepción puede ser radicalmente inferior.

Paralelamente, Israel, Estados Unidos y otros actores están investigando sistemas de microondas de alta potencia y otras tecnologías electromagnéticas destinadas especialmente a enfrentar enjambres de drones. A diferencia de un láser, que concentra energía sobre un objetivo determinado, determinadas armas electromagnéticas buscan afectar los componentes electrónicos de uno o varios sistemas dentro de un área determinada.

El problema que intentan resolver es, nuevamente, económico y cuantitativo: ¿cómo defender una posición contra decenas o centenares de amenazas baratas sin consumir decenas o centenares de interceptores extremadamente costosos?

En consecuencia, los dos teatros están produciendo aprendizajes complementarios. En el norte se experimenta con las capacidades de inteligencia y combate, reduciendo progresivamente la intervención humana mediante inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Por otro lado, en el sur se experimenta con las capacidades de interceptar grandes volúmenes de amenazas, combinando radares, inteligencia artificial, interceptores convencionales, guerra electrónica y armas de energía dirigida. Uno está transformando principalmente la ofensiva y supervivencia táctica; el otro está acelerando la transformación de la defensa aérea y antimisil.

No obstante, ambos convergen hacia una misma conclusión: la próxima guerra entre grandes potencias difícilmente pueda combatirse exclusivamente con plataformas tradicionales extremadamente sofisticadas y costosas. Será necesario combinar esas plataformas con enormes cantidades de sistemas baratos, autónomos y reemplazables.

Esto puede representar una transformación comparable con otros grandes cambios tecnológicos de la historia militar. Así como el tanque no eliminó a la infantería; el dron, la inteligencia artificial o el láser probablemente no eliminarán las plataformas convencionales. Lo que modificarán será la relación entre ellas y, fundamentalmente, el costo necesario para destruir o proteger un objetivo.

Las potencias que observan estos conflictos no están solamente evaluando quién gana cada batalla. Están aprendiendo.

Estados Unidos, China, los miembros de la OTAN y otras potencias militares están obteniendo información sobre vulnerabilidad de vehículos, efectividad de defensas aéreas, funcionamiento de redes de comunicaciones bajo interferencia, comportamiento de drones, consumo de municiones, supervivencia de instalaciones militares y capacidad de las fuerzas para adaptarse a campos de batalla permanentemente observados.

Por ello, si finalmente se abriera un tercer teatro en el Indo-Pacífico, este no comenzaría tecnológicamente desde cero, comenzaría con las lecciones acumuladas durante años de combate en Ucrania y Medio Oriente.

Los teatros norte y sur no solamente constituyen los campos de batalla de la confrontación actual, también están desarrollando y seleccionando las tecnologías con las que podría combatirse su siguiente etapa.



*Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.

El tercer teatro: la variable china

Esa ventaja podría modificarse radicalmente ante la apertura de un tercer teatro de operaciones en el Indo-Pacífico.

China es precisamente el actor que permite conectar los escenarios europeo y asiático. Beijing ha evitado hasta ahora una participación militar directa en la guerra de Ucrania, pero su relación económica con Moscú y el suministro de componentes y tecnologías de doble uso resultan importantes para la capacidad rusa de sostener una guerra prolongada. La verdadera incógnita estratégica aparece en Asia. Una crisis militar en torno a Taiwán, acompañada por operaciones que involucrara directa o indirectamente a Japón, Corea del Sur o fuerzas estadounidenses estacionadas en la región, obligaría a Washington a distribuir recursos entre tres teatros simultáneos. En ese momento desaparecería buena parte de la actual asimetría. Estados Unidos debería sostener simultáneamente compromisos en Europa, Medio Oriente y el Indo-Pacífico. Sus fuerzas navales y aéreas pasarían a constituir el recurso crítico del sistema y Japón y Corea del Sur dejarían de ser solamente socios industriales y estratégicos para transformarse potencialmente en actores militares directos.

De allí que Taiwán pueda representar el punto de transición entre una confrontación global fragmentada y una guerra verdaderamente mundial.

La interdependencia estratégica funciona también en sentido inverso; cuanto mayores sean los recursos estadounidenses necesarios en Medio Oriente y Europa, mayor será el costo de oportunidad de sostener la disuasión en Asia.



Las periferias del conflicto: África y América Latina

Si el sistema evolucionara hacia tres grandes teatros simultáneos, quedarían dos regiones relativamente periféricas: África y América Latina. El primero posee enorme importancia por sus recursos naturales, minerales críticos, rutas marítimas y posición geográfica. Algunos gobiernos africanos pueden aproximarse diplomática o militarmente a uno u otro agrupamiento, y países como Uganda han manifestado posiciones que revelan hasta qué punto las tensiones globales penetran en la política africana. Sin embargo, con excepciones puntuales, la capacidad militar convencional africana difícilmente pueda modificar por sí sola el balance global de fuerzas.

América Latina presenta otra particularidad: la región se encuentra políticamente dividida y sus gobiernos mantienen posiciones muy diferentes respecto de Estados Unidos, China, Rusia, Israel e Irán. Sin embargo, ninguno de los principales países latinoamericanos posee actualmente una capacidad militar convencional suficiente para alterar decisivamente el equilibrio de un conflicto entre grandes potencias. Eso no significa que América Latina resulte irrelevante. Su importancia sería fundamentalmente económica y logística: alimentos, energía, litio, cobre y otros minerales críticos; rutas marítimas; infraestructura portuaria; posiciones diplomáticas y acceso a mercados.

En una guerra global prolongada, Argentina, Brasil y Chile podrían adquirir una importancia estratégica superior a la que sugeriría el tamaño de sus fuerzas armadas. No necesariamente como combatientes, sino como proveedores de los recursos necesarios para que otros puedan combatir, siempre y cuando puedan proteger esos recursos.



Los ganadores, independientemente del resultado

Esta dinámica permite identificar actores que ya se benefician de la confrontación independientemente de cuál sea su desenlace político.

El primero es la industria de defensa: cuatro años de guerra de alta intensidad han demostrado que los arsenales diseñados durante décadas de relativa estabilidad resultan insuficientes frente a conflictos prolongados. Misiles antiaéreos, munición de artillería, drones, interceptores, vehículos, sistemas electrónicos y misiles de precisión se consumen a velocidades muy superiores a las previstas durante tiempos de paz. Esto está impulsando un nuevo ciclo mundial de inversión militar y expansión de las capacidades industriales de defensa. Incluso si las guerras actuales finalizaran mañana, la percepción de vulnerabilidad permanecería durante años.

El segundo ganador estructural es el sector de energía y minerales críticos: petróleo y gas recuperaron una centralidad geopolítica que algunos análisis consideraban declinante. Al mismo tiempo, cobre, litio, tierras raras, uranio, níquel, cobalto y otros minerales adquirieron una dimensión directamente vinculada con la seguridad nacional.

La guerra contemporánea depende de semiconductores, baterías, radares, satélites, drones, sistemas de comunicación y enormes cantidades de energía. La distinción tradicional entre política industrial, política energética y política de defensa se vuelve cada vez menos clara.

Esto constituye, nuevamente, una característica propia de una confrontación sistémica.



Una guerra mundial antes de la guerra mundial

Tal vez todavía sea conceptualmente excesivo afirmar que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Pero resulta igualmente insuficiente analizar Ucrania, Irán, Israel, el Mar Rojo, Corea del Norte, Rusia y las tensiones en torno a Taiwán como fenómenos completamente independientes, porque existe una creciente integración entre ellos.

Los mismos actores reaparecen y las armas circulan entre teatros activos. La producción industrial china influye en la capacidad militar rusa; la participación norcoreana en Europa modifica los cálculos de seguridad de Corea del Sur y Japón y los recursos estadounidenses destinados a Medio Oriente son recursos que, potencialmente, no se encuentran disponibles en el Pacífico.

La guerra iniciada en Ucrania en 2022 puede ser recordada, entonces, no solamente como un conflicto regional, sino como el comienzo de una transformación mucho más profunda del sistema internacional. Podría ser el magnicidio del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en el siglo XXI.

Por ahora, existen dos grandes teatros activos y un tercero potencial. Mientras el Indo-Pacífico permanezca contenido, Estados Unidos y sus aliados conservan una ventaja fundamental: una considerable capacidad militar todavía no movilizada. Si China cruzara el umbral de la participación militar directa y se abriera simultáneamente un frente asiático, esa ecuación cambiaría por completo.

En ese escenario, la discusión acerca de si nos encontramos ante una Segunda Guerra Fría o una Tercera Guerra Mundial dejaría de ser semántica. La pregunta relevante sería otra: ¿cuándo comenzó?

Es posible que, mirando retrospectivamente, la respuesta de los historiadores no sea el día en que las grandes potencias se declararon formalmente la guerra, sino febrero de 2022, cuando comenzó a formarse una cadena de conflictos, alianzas y transferencias de recursos que progresivamente transformaron guerras regionales en una única confrontación global.

Si se abriera un tercer teatro en el Indo-Pacífico, la pregunta dejaría de ser cómo llamar a esta confrontación y pasaría a cuándo comenzó.

F\



CATEDRAL DE LA DORMICIÓN
KIEV

15 de junio de 2026 - Destrucción parcial de la Catedral de la Dormición.
El ataque provocó un devastador incendio en la cubierta del templo del siglo XI, catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

***Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.**

EL FIN DE LAS CERTEZAS.
LOS CONFLICTOS MODERNOS COMO LABORATORIO DE LO QUE VIENE

MAIA **BORNSZTEIN.** REPRESENTANTE DE LAS NUEVAS GENERACIONES EN EL COMITÉ EJECUTIVO DEL WORLD JEWISH CONGRESS

Los conflictos contemporáneos ya no aparecen como rupturas excepcionales, sino como laboratorios de un orden internacional en permanente y acelerada transformación. Entre tensiones jurídicas, crisis multilaterales, tecnologías de bajo costo, disputas narrativas y nuevos tableros estratégicos, el futuro empieza a ensayarse en el presente, con consecuencias todavía difíciles de anticipar.

Durante buena parte de las últimas tres décadas, la guerra fue concebida como una excepción: una ruptura puntual dentro de un orden internacional que, pese a sus tensiones y desequilibrios, mantenía cierto grado de previsibilidad. Sin embargo, esa percepción comenzó a resquebrajarse. El progresivo debilitamiento del predominio estadounidense, el ascenso de nuevos centros de poder y la creciente competencia entre grandes potencias contribuyen a configurar un escenario más fragmentado e incierto. China continúa ampliando su influencia global, Rusia mantiene capacidad de incidencia estratégica y el sistema internacional avanza hacia una distribución más dispersa del poder.



En paralelo, la política exterior se ha vuelto más personalizada y menos dependiente de los mecanismos diplomáticos tradicionales, favoreciendo procesos de decisión inmediatos y menos previsibles. Al mismo tiempo, la confianza en las instituciones multilaterales muestra signos de desgaste, mientras un número creciente de Estados prioriza estrategias de autoprotección y seguridad nacional por encima de mecanismos colectivos de gestión de conflictos.

Los indicadores reflejan esta transformación: según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó un 41 % durante la última década (Trends in World Military Expenditure, 2025, abril de 2026). A su vez, 2025 registró 65 conflictos armados activos, la cifra más elevada desde 1946, según el Peace Research Institute Oslo (PRIO) en su artículo “Conflict Trends: A Global Overview, 1946-2025”. Más que episodios aislados, estos datos sugieren que los conflictos contemporáneos constituyen espacios de observación privilegiados para analizar tendencias que exceden los escenarios donde se desarrollan y que podrían definir la evolución futura del sistema internacional. La pregunta es si estos fenómenos representan el cierre de un ciclo histórico o el anticipo de las dinámicas que definirán las próximas décadas.



La pérdida de previsibilidad, el desgaste multilateral y el aumento de conflictos activos muestran que la guerra vuelve a ocupar un lugar estructural en el orden internacional.



El derecho internacional humanitario y la justicia internacional bajo tensión

Los Convenios de Ginebra, columna vertebral del derecho internacional humanitario, atraviesan hoy una de sus pruebas más exigentes. Ucrania es el escenario más visible, pero no el único: en el Sahel y en Medio Oriente se repiten patrones similares: bloqueos deliberados de ayuda humanitaria, violaciones y ataques sexuales como arma de guerra, ataques contra población civil y operaciones militares desarrolladas en zonas densamente pobladas. El problema no es solamente la infracción de la norma, sino la erosión de su capacidad disuasiva: cuando la impunidad se aplica de modo selectivo, la universalidad del derecho humanitario pierde fuerza.

A esta erosión se suma un desafío de otra naturaleza: el cambio de época también interpela las categorías con las que el derecho internacional humanitario clasifica a los actores del conflicto. Surgen grupos que no encajan con nitidez en las definiciones tradicionales –criminales, insurgentes, movimientos que se autodenominan revolucionarios o liberadores– y cuya caracterización jurídica condiciona directamente qué normas se les aplican. La ausencia de categorías jurídicas claras frente a actores armados no estatales y formas híbridas de violencia puede generar dificultades para determinar el marco normativo aplicable y, con ello, incrementar los riesgos de interpretaciones divergentes y eventuales violaciones del derecho internacional. El resultado es una paradoja: la eficacia del derecho internacional parece concentrarse con frecuencia en la identificación y atribución de responsabilidades ex post, más que en su capacidad para prevenir o contener las conductas ilícitas mientras los conflictos se encuentran en desarrollo.

Multilateralismo y justicia internacional

La crisis del multilateralismo encuentra una de sus expresiones más visibles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya capacidad de acción se ve limitada en determinados conflictos por el uso del veto y por una arquitectura institucional que conserva, en lo esencial, la estructura establecida en 1945. Desde 2022, Rusia recurre sistemáticamente a esa herramienta para bloquear la acción del Consejo, pese a que su invasión de Ucrania viola de manera directa la Carta de las Naciones Unidas. El resultado es una organización que refleja, en buena medida, las fracturas del actual equilibrio de poder: la noción de “responsabilidad de proteger” enfrenta dificultades para traducirse en mecanismos efectivos de acción cuando están comprometidos los intereses de las grandes potencias. El sistema se fragmenta en múltiples polos y coaliciones temáticas, sin un centro de gravedad capaz de administrar conflictos híbridos.

Frente a este panorama, cabe una lectura menos lineal: que las instituciones no logren seguir el ritmo de las relaciones de poder actuales no equivale a que hayan dejado de funcionar. Como planteó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 en la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), coorganizada por la Fundación TAEDA, las instituciones internacionales reflejan el orden mundial y que no se vea plasmado en el metabolismo actual de las relaciones internacionales no significa que no funcionen. La competencia entre superpotencias las tensiona, pero no elimina su función como espacios de diálogo, coordinación y previsibilidad. Lo que necesitan no es ser reemplazadas, sino adaptarse a un contexto que todavía no terminó de definirse.

La crisis multilateral no implica la desaparición de las instituciones, sino su desajuste frente a un orden más fragmentado, competitivo y difícil de administrar.

Autonomía estratégica y multialineamiento

Mientras el sistema multilateral enfrenta mayores dificultades para articular respuestas colectivas, las potencias medias ganan espacio. Turquía, Qatar, India y algunos Estados del Golfo se consolidan como mediadores cada vez más relevantes, en virtud de su capacidad para mantener relaciones simultáneas con actores con intereses divergentes. La competencia entre Estados Unidos y China amplía, en la misma dirección, el margen de maniobra de las potencias medias. En este contexto, el concepto tradicional de no alineamiento parece dar paso a una lógica de multialineamiento, basada en la cooperación diferenciada con distintos actores, según el área temática y los intereses nacionales en juego.

India es uno de los países que ilustra esta lógica: profundiza su relación con Estados Unidos y Occidente –en defensa y tecnología, y como parte de una estrategia orientada a equilibrar la creciente influencia de China–, sin abandonar sus vínculos con Rusia, Irán y los países del Golfo, y combina organismos globales con coaliciones más pequeñas y flexibles como el QUAD o los BRICS. El multialineamiento no equivale a neutralidad, constituye, más bien, una estrategia orientada a preservar márgenes de autonomía y ampliar la capacidad de influencia en un sistema internacional crecientemente multipolar.

Drones, ciberguerra y la democratización de la letalidad

La transformación tecnológica también está modificando la escala, los costos y las condiciones del empleo de la fuerza. Una de las tendencias más relevantes del entorno operativo contemporáneo es la creciente incorporación de sistemas de armas de bajo costo y alto volumen de producción, donde el éxito no depende tanto de quién inventa la tecnología sino de qué organización logra desarrollarla, operacionalizarla y protegerla con la velocidad suficiente para obtener una ventaja real. Estados Unidos, por ejemplo, ha comenzado a adaptar su postura estratégica a esta transformación. En abril de 2026, la creación del Southcom Autonomous Warfare Command dentro del Comando Sur reflejó un giro estratégico. Frente a determinadas amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y los desastres naturales, los sistemas autónomos, los drones y las capacidades distribuidas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento pueden ofrecer ventajas operativas y económicas respecto de plataformas tradicionales de mayor costo.

La guerra en Ucrania constituye uno de los principales escenarios de observación y experimentación de esta transformación. Desde comienzos de la década de 2010, los avances en electrónica, baterías, sensores e inteligencia artificial permitieron desarrollar sistemas no tripulados más baratos, pequeños y producidos en masa. Su valor operativo no depende necesariamente de la sofisticación individual de cada plataforma, sino de la posibilidad de desplegar grandes cantidades de sistemas económicos y reemplazables. Un dron de bajo costo puede neutralizar un sistema enemigo costoso, y la pérdida de unidades puede resultar operacionalmente asumible cuando los sistemas presentan bajos costos de producción y pueden ser reemplazados con rapidez. La velocidad de innovación se volvió determinante: la tecnología de drones puede quedar obsoleta en meses, a diferencia de los sistemas militares tradicionales que tienen más durabilidad, lo que obliga a repensar los procesos de adquisición militar en función de ciclos mucho más cortos.

Este mismo fenómeno –el acceso a bajo costo a una capacidad de daño antes reservada a Estados con grandes presupuestos– es comparable con lo que se observa en el dominio digital. La ciberguerra, con ataques a infraestructura crítica y operaciones con fines políticos, democratiza de manera análoga la capacidad de afectar a un adversario, solo que en un terreno sin fronteras físicas y con niveles de atribución mucho más difusos.



La competencia por las narrativas

La disputa por el relato se constituyó como un frente de batalla en sí mismo. La desinformación digital dejó de ser una actividad artesanal basada en bots y spam para convertirse en una capacidad automatizada y escalable: la inteligencia artificial permite generar contenido convincente a gran escala, coordinar campañas con mínima intervención humana y, sobre todo, generar artificialmente percepciones de consenso social. Una definición reciente propone pensar la desinformación digital como un proceso que puede ser producido por personas, por máquinas o por la interacción entre ambas –esta última vía, la híbrida, resulta particularmente relevante porque caracteriza buena parte de la desinformación contemporánea (International Journal of Information Management, agosto de 2026)–. Los algoritmos, orientados a maximizar la interacción de los usuarios, amplifican involuntariamente ese contenido. Incluso un número relativamente reducido de cuentas automatizadas puede contribuir a modificar la percepción sobre el grado de respaldo social de determinadas narrativas, a una velocidad que los Estados no siempre logran seguir.

Este proceso también permite revisar una de las principales interpretaciones surgidas tras el fin de la Guerra Fría. La tesis de las “nuevas guerras”, desarrollada por Mary Kaldor en Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global (1999), puso el foco en formas de violencia caracterizadas por la fragmentación de los actores, la pérdida de centralidad de los enfrentamientos interestatales y la creciente relevancia de actores no estatales. La persistencia y escalada de conflictos convencionales desde 2020 obligan, sin embargo, a matizar aquella interpretación: la guerra interestatal no desapareció, sino que coexiste con dimensiones tecnológicas, informacionales, económicas y no convencionales.



El próximo tablero

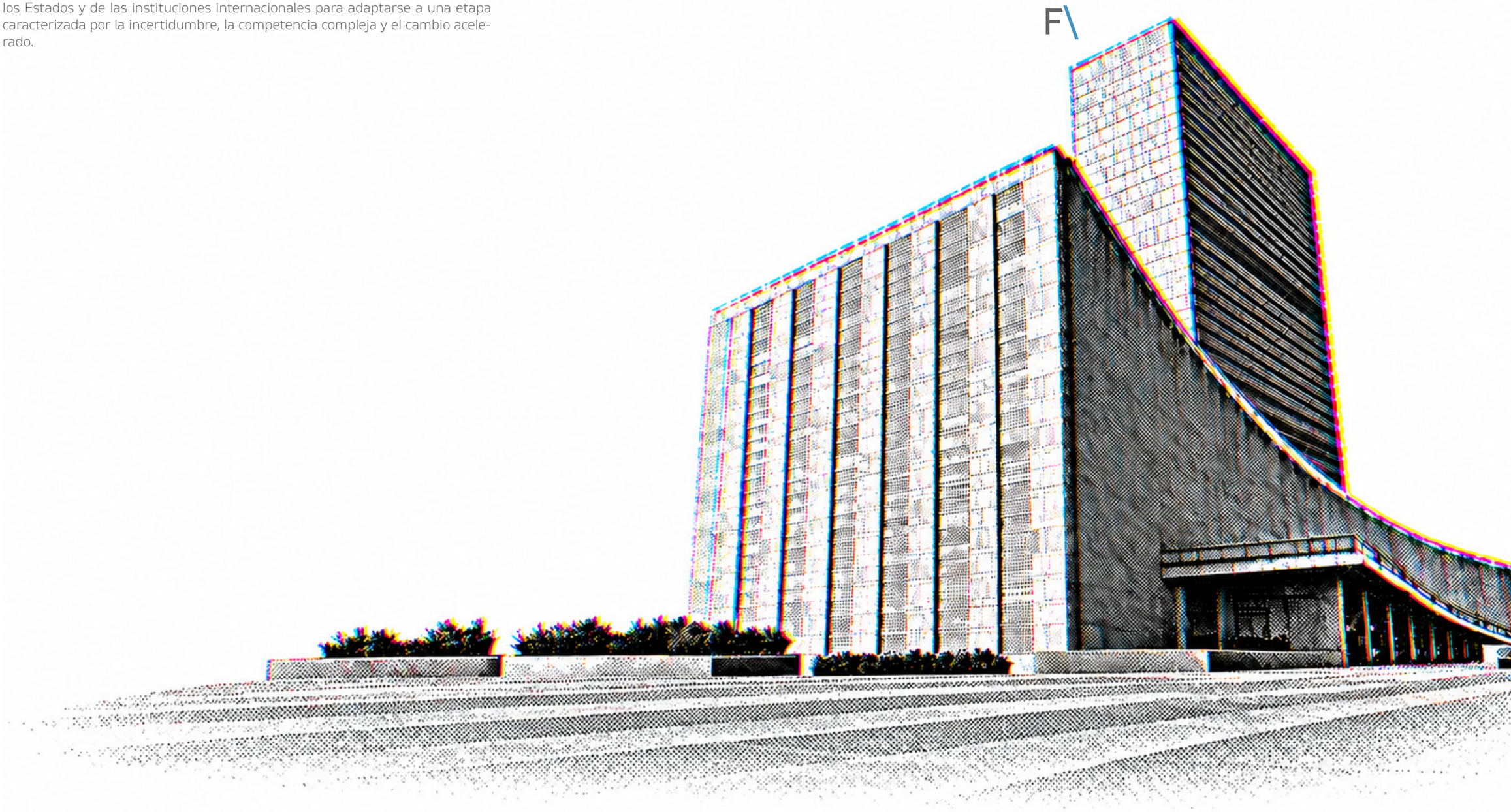
La evolución de los conflictos actuales sugiere que las transformaciones observadas en los planos jurídico, tecnológico, institucional y estratégico no constituyen fenómenos aislados, sino manifestaciones de cambios más amplios en la distribución del poder internacional. Los escenarios de competencia que actualmente se desarrollan en distintos espacios geográficos y en el ciberespacio brindan indicios sobre desafíos que podrían reproducirse en otros lugares.

La Antártida ofrece una muestra particularmente relevante para la región. El continente blanco constituye la convergencia de recursos naturales de interés estratégico, una creciente atención geopolítica y un régimen internacional –el Tratado Antártico–, concebido en un contexto histórico sustancialmente diferente del actual. Esta combinación plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones vigentes para preservar su legitimidad y adaptarse a nuevas dinámicas de poder. El interés creciente de potencias extrarregionales en la gobernanza del continente reedita, en clave austral, la misma pregunta que atraviesa al derecho humanitario o al sistema multilateral: si las instituciones diseñadas pueden sostener su legitimidad frente a intereses estratégicos cada vez más directos.



Por lo tanto, la pregunta que atraviesa este recorrido permanece abierta: ¿las tensiones que hoy transforman el orden internacional constituyen fenómenos coyunturales o anticipan las dinámicas que marcarán los escenarios estratégicos del futuro? La respuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad de los Estados y de las instituciones internacionales para adaptarse a una etapa caracterizada por la incertidumbre, la competencia compleja y el cambio acelerado.

El futuro del orden internacional se juega en la capacidad de interpretar conflictos que ya no son excepción, sino síntoma.



LYMAN
UCRANIA

Diciembre de 2025.
Lyman, región de Donetsk, Ucrania. Los drones de ataque guiados por fibra óptica dejan kilómetros de filamentos que cubren viviendas, árboles y calles, formando inmensas telarañas artificiales. La contaminación tecnológica alcanza incluso a la fauna local, algunas aves comenzaron a reutilizar estos restos para construir sus nidos.

**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

DE LA BAJA **AL DATO**

GONZALO **RESTREPO ZANIER.** DISEÑADOR REVISTA **FORTÍN**

Métricas, incentivos y conducción en el conflicto armado ruso-ucraniano

En algún puesto de mando ucraniano, una grabación termina de cargarse en el sistema. La imagen registra los efectos de un ataque sobre una posición adversaria y, tras ser revisada y clasificada según los criterios establecidos, acredita puntos a la unidad responsable. Tiempo después, esa puntuación se utilizará para solicitar equipamiento en el catálogo, cuya contratación y entrega ejecutará la Agencia de Adquisiciones de Defensa mediante *DOT-Chain Defence*. Así, una acción táctica en la línea de contacto completa un recorrido inusual: pasa del frente a una base de datos, de allí a una escala de puntuación y, finalmente, regresa al campo de batalla convertida en nueva capacidad operativa.

Aunque el vehículo que produjo las imágenes suele ser un dron FPV, reducir el análisis al vector resulta insuficiente. Los sistemas no tripulados son apenas la manifestación más visible de una transformación integral que alcanza al mando, la logística y la base industrial.

Al incorporar puntuación, competencia y recompensas en su esquema de abastecimiento, Ucrania apela a un mecanismo que suele etiquetarse como «gamificación». Sin embargo, la noción puede llevar a lecturas superficiales si sugiere que los combatientes simplemente juegan, que los objetivos son meros puntos o que los videos funcionan como el tablero de una partida ficticia.



En Ucrania, los resultados verificados del combate adquieren poder de compra. Cada acción reconocida puede convertirse en puntos, cada punto en equipamiento y cada entrega en una nueva capacidad operacional. La logística comienza a responder al ritmo del frente.

El resultado se convierte en crédito

El programa *Army of Drones Bonus* comenzó como una respuesta a una dificultad concreta. Las unidades consumían drones a una velocidad que los procedimientos habituales de adquisición no lograban acompañar. Al mismo tiempo, los fabricantes modificaban plataformas, enlaces, cargas útiles y sistemas de navegación en ciclos de pocas semanas. Entre la necesidad operacional del frente y la burocracia de la compra centralizada quedaba un intervalo demasiado largo para una guerra que cambiaba de una semana a otra.

Para recortar ese desfase se creó el sistema de *ePoints*, una suerte de crédito de uso restringido o moneda digital interna otorgada a las tropas en función de su rendimiento **en todo tipo de misiones -abarcando desde neutralización de blancos hasta tareas de reconocimiento, logística no tripulada y cobertura antiaérea móvil-**. El procedimiento exige que la unidad cargue en DELTA **-el sistema integrado de gestión e inteligencia del campo de batalla ucraniano-** la evidencia audiovisual o fotográfica de los efectos producidos. Si la acción es validada, la unidad recibe una cantidad de puntos según la categoría **de la misión** y la puntuación establecida.

El personal autorizado puede emplear esos créditos en *Brave1 Market*, la plataforma estatal que funciona como un catálogo virtual de tecnología militar **e innovación**. Allí selecciona desde drones y repuestos hasta equipos de guerra electrónica o vehículos terrestres no tripulados. A partir de esa elección, el sistema digital de logística y contratos de la Agencia de Adquisiciones de Defensa (*DOT-Chain Defence*) se encarga de gestionar la orden, el pago **financiado mediante partidas presupuestarias específicas para innovación** y la entrega en el frente.

La magnitud del mecanismo es considerable: según cifras oficiales presentadas por Mykhailo Fedorov, quien se desempeñó como Ministro de Transformación Digital y posteriormente asumió la titularidad del Ministerio de Defensa, el programa *Army of Drones Bonus* llegó a registrar cerca de 820.000 ataques y misiones confirmadas por video tan solo en 2025.

Un aspecto clave es que los puntos pertenecen a las unidades y no representan una prima personal para el operador por cada baja documentada. Tampoco reemplazan el abastecimiento general, sino que funcionan como un canal complementario descentralizado bajo una premisa sencilla: la unidad elige y el Estado provee. Detrás de esa regla hay una transformación profunda: el resultado operacional adquiere poder de compra dentro de un mercado regulado por la propia organización militar.

Ahí aparece la gamificación en sentido estricto. Existe una tabla de valores, reglas de acreditación, comparación de rendimientos y una recompensa material. Estos elementos no vuelven ficticia la actividad ni convierten cada combate **o misión** en una simple partida. Actúan después de la acción, cuando la organización determina qué reconoce, cuánto vale lo conseguido y qué recursos asignará como consecuencia.

En marzo de 2026, el Ministerio de Defensa extendió la obtención de *ePoints* a los equipos de francotiradores, grupos móviles de defensa aérea y aviación del Ejército. La ampliación muestra que la lógica del programa comenzó a desprenderse del medio que le dio origen: lo transferible no era el dron, sino el principio de vincular resultados verificados con un acceso prioritario a recursos.

El analista militar Joe Murphy sugiere interpretar el sistema, ante todo, como una innovación en la gestión de compras públicas de defensa nacida bajo la presión de un conflicto de desgaste, **donde el presupuesto estatal de innovación se canaliza directamente hacia la demanda operacional probada**. Su perspectiva ayuda a ponderar el fenómeno: lejos de ser un mero entusiasmo tecnológico o una frivolización del combate, la fuerza armada incorporó dinámicas de incentivos para resolver problemas reales de información, motivación y abastecimiento continuo en el frente.

Métrica y mando

Las fuerzas armadas necesitan cuantificarlo todo. Sin indicadores resulta imposible estimar capacidades, evaluar daños, anticipar consumos o decidir si una acción debe repetirse. El problema comienza cuando la medición abandona su papel auxiliar y pasa a considerarse una representación suficiente del conflicto.

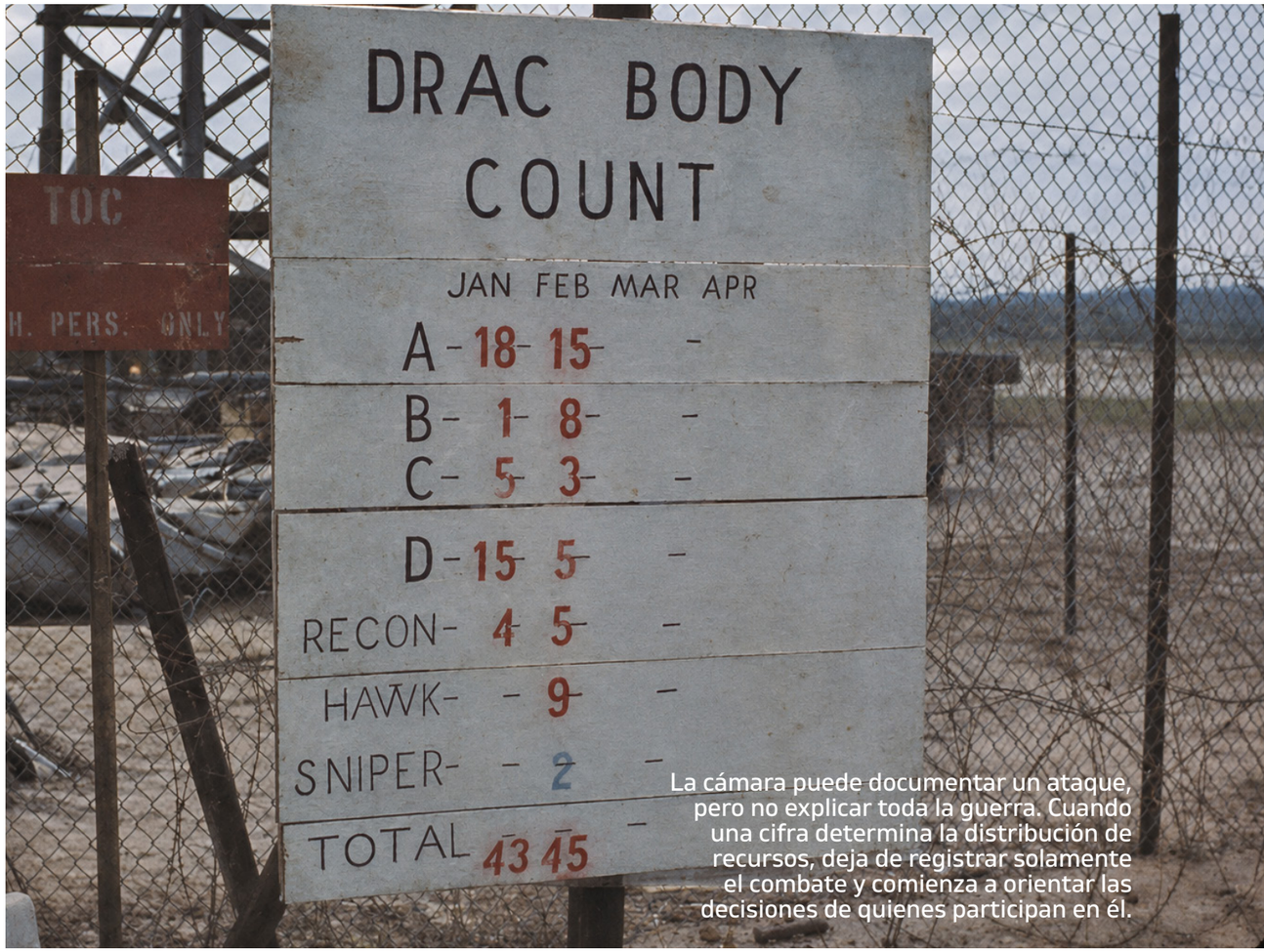
La experiencia estadounidense en Vietnam ofrece un antecedente incómodo pero esclarecedor. En el marco de una estrategia orientada al desgaste, el conteo de bajas enemigas (*body count*) adquirió un peso desproporcionado como indicador de progreso. Como mostró el historiador militar Gregory Daddis en sus estudios sobre Vietnam, el *body count* formaba parte de un aparato burocrático de medición mucho más amplio. **Lejos de asumir que las métricas de Vietnam carecían de consecuencias materiales, es justo afirmar que los indicadores cuantitativos estadounidenses condicionaban ascensos, asignaciones de recursos, prioridades operacionales y presupuestos de abastecimiento**. El problema no era únicamente qué se contaba, sino la dificultad de determinar hasta qué punto las cifras disponibles reflejaban el progreso militar en un conflicto cuyo desenlace dependía también de factores territoriales y políticos.

El *body count* padecía, además, una falla elemental: quienes producían el resultado en el frente eran los mismos encargados de medirlo. En la práctica, los criterios se flexibilizaban, las cifras se inflaban y el indicador terminaba incentivando aquello que afirmaba limitarse a registrar. El fenómeno puede entenderse a través de la ley de Goodhart: cuando una medida cuantitativa se convierte en un objetivo de gestión, aumenta el riesgo de que los incentivos asociados a ella distorsionen aquello que pretende medir.

El sistema ucraniano busca atenuar ese sesgo mediante registros audiovisuales y protocolos de validación. La diferencia con el antecedente de Vietnam es relevante, aunque no absoluta. La etiqueta «verificado en DELTA» (la plataforma digital de gestión del campo de batalla) significa que la acción fue reconocida por el sistema militar ucraniano; no equivale a una confirmación independiente del logro de cada objetivo. La cámara mejora la trazabilidad de los hechos, pero no elimina los problemas de clasificación de blancos, el contexto táctico ni la atribución de los efectos.

La diferencia más defendible entre el antecedente de Vietnam y el modelo ucraniano no radica en la existencia de consecuencias materiales, sino en la velocidad de retroalimentación en tiempo real, la granularidad del registro digital en video y la conexión institucional directa del circuito con la producción industrial. En Vietnam, la cifra ascendía burocráticamente por la cadena de mando para alimentar evaluaciones retrospectivas en los estados mayores. En Ucrania, en cambio, el registro audiovisual verificado en DELTA regresa de inmediato hacia la unidad transformado en crédito y capacidad material futura. La métrica no solo evalúa el pasado: condiciona en tiempo real la conducta táctica del mañana.

Por eso la comparación histórica exige cautela. Ambos modelos traducen los efectos del combate a un lenguaje administrativo. Sin embargo, el esquema ucraniano suma velocidad, registro en video y una conexión directa con la logística de abastecimiento. Resulta más preciso que el conteo de bajas de Vietnam en varios aspectos técnicos, pero también posee una capacidad mucho mayor para orientar la conducta de las tropas.



La cámara puede documentar un ataque, pero no explicar toda la guerra. Cuando una cifra determina la distribución de recursos, deja de registrar solamente el combate y comienza a orientar las decisiones de quienes participan en él.

Una fuerza organizada como plataforma

En julio de 2026, el Ministerio de Defensa ucraniano informó que la plataforma DELTA incorporaba más de ocho millones de nuevos objetos cartográficos al mes, gestionaba más de 75.000 transmisiones de video en vivo por día y había registrado más de 200.000 ataques con drones durante junio. Según el Ministerio, el sistema integra estos registros con el programa de *ePoints*, que permite verificar los ataques y vincular sus resultados con los mecanismos de abastecimiento militar.

A esta arquitectura se sumó *Mission Control*, un módulo específico diseñado para el planeamiento y seguimiento táctico de las unidades de drones que excede la mera convalidación de impactos. A través de esta herramienta, las tripulaciones ingresan el tipo de plataforma utilizada, la ruta de vuelo y la tarea asignada, lo que permite al sistema generar reportes automáticos y tableros de control sobre misiones de reconocimiento, ataque, minado, logística y evacuación médica. Hacia marzo de 2026, la plataforma acumulaba más de 150.000 informes digitales y se encontraba desplegada en la totalidad de las grandes unidades de las Fuerzas de Defensa. De este modo, el parte de guerra en papel comenzó a ceder su lugar a un flujo continuo de datos procesados en tiempo real durante la operación.

Esta integración promete a los mandos identificar tendencias en el frente mientras todavía es posible influir en el curso de las acciones. La ventaja en términos de dinamismo es clara, pero trae consigo el riesgo de confundir la actualización constante de datos con una verdadera comprensión de la situación en el terreno. Un tablero digital no contiene la guerra en su complejidad, sino únicamente aquello que los sensores lograron captar y el sistema decidió clasificar. Ante un volumen masivo de información, resulta fácil caer en la ilusión de totalidad y olvidar que la pantalla ofrece tan solo una representación simplificada de la realidad.

El ex funcionario ucraniano Mykhailo Fedorov, quien ocupó los cargos de ministro de Defensa y de Transformación Digital entre 2023 y 2026, sintetizó la ambición del proyecto con una premisa de gestión: transformar cada acción en datos y los datos en decisiones. Para una administración estatal bajo las exigencias de un conflicto de alta intensidad, esa promesa posee un atractivo indudable. Desde la doctrina militar, sin embargo, el planteo abre un interrogante crucial: qué tipo de decisión mejora sustancialmente cuando aumenta el volumen de información disponible. La respuesta dista de ser uniforme, ya que las necesidades operativas de una tripulación FPV en la trinchera difieren drásticamente de las de un comandante de brigada, un estado mayor operacional o la conducción estratégica de la guerra.



La pantalla multiplica la información disponible, pero no necesariamente la comprensión del conflicto. El verdadero desafío del mando no consiste en acumular datos, sino en interpretar aquello que muestran y reconocer lo que permanece invisible.



El frente ya no es solamente el destino del equipamiento militar: también determina qué necesita fabricarse. Cada resultado operacional alimenta un circuito de información que acelera las compras, modifica los diseños y transforma la logística de guerra.

Del frente a la fábrica

La logística suele concebirse como un flujo unidireccional que avanza desde la retaguardia hacia el frente. El sistema ucraniano introduce un movimiento inverso: las unidades no solo reciben insumos, sino que devuelven información sobre qué emplearon, contra qué blanco, bajo qué condiciones y con qué resultado. Ese rastro influye de manera directa en las decisiones de compra y en el diseño de los fabricantes.

Para potenciar este circuito, el Ministerio de Defensa incorporó en *Brave1 Market* un tablero de analítica que permite a los proveedores observar el desempeño de sus productos en combate. Más tarde, la plataforma sumó la posibilidad de encargar drones personalizados mediante licitaciones competitivas, donde las tropas definen especificaciones de frecuencia, cámaras, autonomía o carga útil. Aunque esta modalidad se financia por ahora con fondos propios de las unidades y no mediante *ePoints*, la tendencia es clara: la demanda del frente adquiere un canal cada vez más directo hacia la industria.

La infraestructura logística de *DOT-Chain Defence* también excedió el programa de incentivos. Para mayo de 2026, la plataforma había canalizado 485.000 drones y equipos por un valor de 31.400 millones de grivnas (alrededor de 700 millones de dólares), con un plazo promedio de entrega de nueve días. Aunque este volumen incluye adquisiciones financiadas por otras partidas presupuestarias y no responde de forma exclusiva a los *ePoints*, ambos circuitos comparten la misma arquitectura de contratación, pagos y distribución.

La interacción entre combatientes e industria siempre existió, pero la diferencia contemporánea radica en la velocidad con la que se procesa el retorno. El reporte de una unidad, el registro de efectividad y la orden de compra quedan vinculados dentro del mismo entorno digital. Frente a un adversario que modifica constantemente sus frecuencias y contramedidas, un equipo puede ser eficaz durante unas semanas y perder valor de inmediato. Los datos de desempeño permiten identificar esos cambios y orientar las decisiones de adquisición, para adaptar la oferta a las necesidades del frente. Así, la línea de contacto se convierte en un laboratorio brutal de adaptación acelerada.

La trascendencia de este esquema no reside en su semejanza formal con una tienda de comercio electrónico. Estamos ante un modelo articulado de innovación, compras públicas y experiencia operacional bajo la lógica de una plataforma: el Estado fija el presupuesto y las reglas, las unidades expresan la demanda táctica, los fabricantes compiten por responder y los datos del frente retroalimentan la selección.

El mando por otros medios

La existencia de un sistema de puntos no suprime la cadena de mando. Las misiones asignadas, las prioridades operacionales, las reglas de empeñamiento y las restricciones legales continúan delimitando la acción en el frente. El operador de un dron no elige libremente cualquier objetivo por el solo hecho de que otorgue una puntuación alta; presentar el esquema como una cacería autónoma sería inexacto y poco plausible desde la práctica militar.

Lo novedoso reside en una dimensión menos explícita de la conducción. Al modificar la puntuación asignada a una categoría de objetivo, incorporar nuevas actividades o premiar determinados procedimientos, el nivel superior comunica una prioridad estratégica sin necesidad de redactar una orden puntual para cada situación. La tabla de valores puede operar como una señal general que las unidades interpretan dentro de su sector de responsabilidad. Si aumenta la puntuación asignada a neutralizar un sistema de guerra electrónica, ese cambio puede incentivar a las unidades a prestar mayor atención a ese tipo de objetivo y a dedicarle más recursos tácticos.

Este modelo plantea un equilibrio singular entre centralización y autonomía. Las unidades ganan margen para seleccionar el equipamiento más adecuado a sus necesidades inmediatas y reducen los tiempos muertos de la burocracia. Al mismo tiempo, la conducción central conserva el diseño del sistema: decide qué cuenta como logro, cuánto vale y qué productos están disponibles en el catálogo. En la práctica, se descentraliza la elección táctica sin renunciar al control sobre las reglas que ordenan esa elección.

Esta arquitectura permite alinear la iniciativa en el terreno con la prioridad operacional a gran velocidad, aunque no está exenta de distorsiones. El sistema podría amplificar las desigualdades entre unidades: aquellas desplegadas en sectores con mayor densidad de blancos, mejor visibilidad o más medios iniciales podrían tener más oportunidades de acumular puntos y acceder antes a nuevo equipamiento. Sin un análisis contextualizado por parte de los mandos, las tablas de rendimiento corren el riesgo de transformar situaciones geográficas y operativas disímiles en una competencia aparentemente homogénea.

El efecto más profundo sobre la organización es sutil. Las tripulaciones aprenden con rapidez qué conductas reconoce el sistema y adaptan sus informes, sus prioridades y sus procedimientos a esa lógica. La conducción obtiene así una herramienta potente para guiar la iniciativa, pero asume la responsabilidad constante de evitar que la búsqueda de la métrica termine sustituyendo al propósito militar de la operación.



**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

Lo que el tablero no ve

Toda clasificación favorece aquello que puede registrar. En el sistema de *ePoints*, la evidencia audiovisual ocupa un lugar central porque aporta trazabilidad y certeza sobre los impactos. Sin embargo, esa fortaleza técnica genera su propio sesgo: los resultados filmables ingresan al sistema con fluidez, mientras que contribuciones operacionales decisivas quedan relegadas por falta de un registro visual que las acredite. La guerra electrónica que neutraliza un ataque sin destruir la plataforma enemiga, una patrulla de reconocimiento que recomienda no empeñar medios, el tendido de comunicaciones o la evacuación sanitaria producen efectos vitales difíciles de reducir a una secuencia de video. Aunque módulos como Mission Control hayan incorporado el seguimiento de tareas logísticas y médicas, registrar una actividad no equivale a medir su verdadera contribución al propósito de la operación.

Aquí cobra importancia la distinción entre actividad, efectividad y eficacia. Un aumento en los ataques registrados puede reflejar un uso más intensivo de los drones, una mejor cobertura digital o la incorporación de nuevas unidades, sin que ello implique necesariamente una ventaja operacional ni un avance hacia los objetivos estratégicos. La propia expansión del programa dificulta aislar las causalidades: la multiplicación de los *ePoints* coincidió en el tiempo con el incremento de la producción nacional, la acumulación de experiencia en las tripulaciones y la profundización de la plataforma DELTA. Atribuir cada mejora en el frente al esquema de incentivos resulta tan apresurado como ignorar el impacto de la velocidad de reposición; para evaluar el programa con rigor habría que comparar sectores, misiones y costos, observando también aquellas conductas no premiadas y las tareas que el sistema termina desplazando.

A esto se suma una vulnerabilidad crítica de seguridad. La misma plataforma que concentra rutas, misiones, resultados y patrones de consumo para facilitar la conducción propia construye un repositorio de inestimable valor para la inteligencia adversaria. La centralización masiva de datos acelera el aprendizaje, pero eleva los riesgos ante una eventual intrusión, alteración de registros o interrupción del servicio. Por eso, la ciberdefensa y la protección electrónica no constituyen aspectos accesorios del programa, sino condiciones estructurales para su propia supervivencia.

Por último, existe una tensión constante entre las urgencias tácticas y los tiempos de la estrategia. Un incentivo puede reorientar con rapidez la prioridad de una unidad que busca aprovechar una oportunidad inmediata en el terreno. Sin embargo, lo que resulta óptimo para una tripulación en el nivel táctico no siempre encaja en la secuencia de una campaña operacional ni garantiza una aproximación al objetivo político de la guerra. Si los criterios que asignan recursos pierden sintonía con las prioridades de la conducción superior, la arquitectura digital corre el riesgo de multiplicar la actividad en las tareas mejor remuneradas sin mejorar la ejecución general del conflicto.



Octubre de 2026
Evacuación aérea de un soldado ucraniano.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania difundieron imágenes de un combatiente herido evacuado mediante un dron de carga pesada, adaptado para realizar rescates donde el traslado terrestre resulta demasiado peligroso.

**Imagen intervenida con IA con fines ilustrativos.*

Responsabilidad sin puntos

Ninguna acreditación administrativa ni asignación de puntos determina por sí sola la licitud de un ataque. Que una acción aporte evidencia audiovisual suficiente para validar un crédito no resuelve si el objetivo constituía un blanco militar legítimo, si se adoptaron las precauciones factibles para proteger a la población o si el daño incidental previsto resultaba excesivo frente a la ventaja militar esperada. El Derecho Internacional Humanitario no representa un casillero más dentro del tablero digital, sino el marco normativo obligatorio para quienes planifican, autorizan y ejecutan el uso de la fuerza.

Las transmisiones en directo pueden colaborar con el cumplimiento de esas normas al permitir observar el entorno de la posición, confirmar variaciones de la amenaza o advertir la presencia de civiles o personal fuera de combate. Sin embargo, la imagen en pantalla también puede generar una falsa certeza: el encuadre de la cámara es reducido, el enlace de video suele degradarse por la guerra electrónica y el operador decide en cuestión de segundos bajo una presión extrema.

La asociación recurrente entre el combate no tripulado y los videojuegos introdujo considerable confusión en este debate. Aunque la interfaz FPV, los visores y la telemetría compartan rasgos formales con el entretenimiento digital, eso no significa que el operador ignore la gravedad de su acción. Las tripulaciones ucranianas actúan en las proximidades de la línea de contacto, expuestas a la detección por espectro electromagnético, el fuego de artillería adverso y la fatiga del combate continuo. La aeronave puede ser un insumo descartable; la tripulación humana no.

A esto se suma una paradoja psicológica particular: la distancia física del operador convive con una extrema proximidad visual con el blanco. El tripulante observa a la persona, analiza sus movimientos en tiempo real, presencia la detonación y luego revisa las grabaciones para confeccionar el parte de evaluación. Un estudio exploratorio de Ayla Noëmi Molenkamp, Maartje Weerdesteijn y Alette Smeulers, publicado en *Armed Forces & Society* en 2025, cuestiona la noción simplista de una «mentalidad *PlayStation*» y examina los problemas psicológicos que pueden afrontar los operadores de drones, así como la estigmatización asociada a ellos. Aunque extrapolar estos hallazgos a las tripulaciones de drones FPV en un frente de alta intensidad exige prudencia, ignorar el desgaste psicológico del operador remoto resulta igualmente erróneo.

Los *ePoints* introducen una presión organizacional centrada en la reposición de material que incide en la cultura interna y en la competencia por recursos, pero aún se desconoce en qué medida ese incentivo modifica el instante crítico de decisión sobre el objetivo. La digitalización y los algoritmos distribuyen tareas entre una red más amplia de actores, pero no disuelven las obligaciones legales ni éticas: la responsabilidad por el empleo de la fuerza permanece indelegable en la estructura de mando e individual en el combatiente, sin importar cuántas pantallas interponga la tecnología.



Una acción puede estar perfectamente registrada y, aun así, ser ilegítima. La cámara documenta lo que sucede dentro de su encuadre, pero no reemplaza el juicio humano ni la responsabilidad de quien decide utilizar la fuerza.



Más allá del arma

La innovación ucraniana no puede reducirse al empleo masivo de drones económicos ni al diseño de una tabla de puntuación. Su verdadera trascendencia reside en haber integrado en una misma arquitectura digital funciones que históricamente recorrían canales fragmentados y plazos prolongados: observación en el terreno, evaluación de daños, conducción, adquisición de insumos, producción industrial y comunicación pública.

Este esquema ofrece ventajas operativas concretas: acorta los tiempos de reposición de material, conecta la demanda directa del frente con los fabricantes, mejora la trazabilidad de las acciones y brinda a la conducción una herramienta ágil para reorientar prioridades. En contrapartida, la concentración masiva de datos genera vulnerabilidades de inteligencia críticas, tiende a privilegiar aquello que resulta fácil de registrar sobre lo que es tácticamente relevante y favorece la tentación de confundir un volumen abundante de información con la comprensión real del conflicto.

La gamificación constituye apenas una pieza dentro de esta estructura. Más allá de su utilidad para motivar y distribuir recursos, expresa una decisión institucional profunda: definir qué conductas merecen ser reconocidas y transformar ese reconocimiento en capacidad material inmediata. Lo que a simple vista parece una mera regla de puntajes condensa, en rigor, una teoría de la organización sobre el rendimiento en combate.

Durante siglos, la evolución de los medios militares buscó maximizar los efectos sobre el adversario minimizando la exposición de las fuerzas propias. Si bien la tecnología no tripulada profundiza esa tendencia histórica, la experiencia ucraniana introduce una ambición adicional: recortar al mínimo la distancia entre el efecto producido en el terreno y la decisión logística que le sigue. En este circuito, cada acción táctica genera un dato, ese dato altera una asignación de recursos y esa asignación regresa al campo de batalla convertida en nuevo equipamiento.

El debate central, por lo tanto, no pasa por discutir si las tripulaciones «juegan» al combate frente a una pantalla. La pregunta relevante reside en determinar qué tipo de organización militar emerge cuando una porción sustancial de su actividad operativa pasa a ser medida, clasificada, comparada y recompensada casi en tiempo real. El dron funcionó como la ventana que permitió vislumbrar esta transformación; la verdadera novedad se encuentra detrás del sensor.

La amenaza no avanza en silencio: es la falta de una respuesta estratégica la que permite que siga ganando territorio.

F\



CHERNÍHIV
NORTE DE UCRANIA



5 de marzo de 2022.
El avión fue derribado sobre una zona residencial mientras realizaba bombardeos tácticos. El copiloto murió y el piloto, mayor Aleksandr Krasnoyartsev, logró eyectarse antes de ser capturado por civiles y tropas ucranianas. El episodio se convirtió en uno de los derribos más difundidos durante los primeros meses de la guerra.

***Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.**

DEL IMPERIO A LA SUPERVIVENCIA.
LA ENCRUCIJADA GEOPOLÍTICA DEL CÁUCASO SUR

DIEGO **ÁLVAREZ RIVERA.** DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES (UBA), MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES, EX EMBAJADOR EN ARMENIA Y EX CÓNSUL GENERAL EN ESTAMBUL.

El Cáucaso Sur constituye hoy un espacio de tensión estratégica donde la geografía, la historia y el poder configuran la conducta de los Estados. Comprender las trayectorias divergentes de Armenia, Georgia y Azerbaiyán ante la fuerza gravitatoria que Moscú ejerce en la región, requiere analizar tanto la herencia del dominio ruso como sus intentos contemporáneos por garantizar la supervivencia nacional frente a la hegemonía de la antigua metrópoli.

La configuración política del Cáucaso Sur tiene raíces en el siglo XIX, cuando la región formó parte del Virreinato del Cáucaso bajo el Imperio ruso en 1844. Tras el colapso imperial, las tres naciones intentaron articular una entidad unificada con la creación de la República Democrática Federal de Transcaucasia. Sin embargo, esta unidad apenas duró un mes, dando paso al surgimiento de tres repúblicas independientes.

Esta primera etapa de independencia entre 1918 y 1921 tuvo, para el tiempo histórico, una existencia efímera. Hacia 1921, el Ejército Rojo avanzó sobre el territorio y reabsorbió a las tres naciones en la órbita soviética. Armenia presentó una resistencia limitada ante el avance de las tropas, en gran medida porque percibía a Turquía como su gran amenaza geopolítica. Por su parte, Georgia opuso una abierta y enconada resistencia militar que concluyó con un enfrentamiento violento. Finalmente, Azerbaiyán atravesó una situación intermedia tras haber sido ocupada por el Reino Unido, potencia atraída principalmente por el valor estratégico de sus recursos energéticos y petroleros.

La disolución de la Unión Soviética en 1991 tomó por sorpresa a líderes y analistas por igual, sumiendo al espacio postsoviético en una etapa de profunda confusión. Los quince Estados sucesores debieron redefinir su arquitectura política interna y su política exterior, así como la relación con el antiguo centro de poder.

En un primer momento, la Federación de Rusia adoptó una política de alineamiento con Occidente, respaldando las reformas democráticas y económicas en las ex repúblicas. Dicha postura respondía a la imposibilidad de oponerse al «momento unipolar» liderado por Estados Unidos tras la desaparición de la estructura bipolar de la Guerra Fría.

Sin embargo, el avance de las estrategias occidentales sobre el espacio de influencia ruso provocó un cambio de rumbo. Moscú definió una estrategia basada en la combinación de poder duro y blando, denominando a las catorce ex repúblicas como su "exterior cercano", un término ambiguo que reafirma sus pretensiones de hegemonía regional.

Un hito clave ocurrió en la Cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, donde la alianza atlántica declaró formalmente su beneplácito ante las intenciones de Georgia y Ucrania de sumarse al bloque. La advertencia del Kremlin no se hizo esperar: cruzar esa línea marcaba un punto de no retorno en las relaciones entre la OTAN y Rusia. A partir de ese momento, Rusia abandonó su posición no revisionista e inauguró un ciclo de política de defensa asertiva con un presupuesto militar ampliado. Esta dinámica se evidenció primero con la intervención en Georgia en 2008 tras el conflicto por Abjasia y Osetia del Sur, continuó con la anexión de Crimea en 2014 y culminó con las acciones militares en Ucrania en 2022.



Las tres estrategias post soviéticas en el Cáucaso Sur

A lo largo de tres décadas, los tres países del Cáucaso Sur desplegaron esquemas de alineamiento marcadamente disímiles, condicionados por sus vulnerabilidades, sus recursos y sus percepciones de amenaza, así como por la evolución de los equilibrios de poder. Aunque Armenia, Georgia y Azerbaiyán comparten una historia soviética y un espacio geográfico atravesado por disputas territoriales, sus estrategias exteriores siguieron caminos diferentes, con prioridades y márgenes de acción. La relación con Rusia constituyó un elemento central de esa divergencia: para Armenia, un respaldo de seguridad; para Georgia, una amenaza directa; y para Azerbaiyán, una potencia con la cual negociar sin renunciar a otros vínculos.

Armenia optó durante gran parte de ese período por una alianza estrecha con Moscú debido a factores de vulnerabilidad estructural. Su situación geográfica, los conflictos con Azerbaiyán y las dificultades para diversificar sus relaciones regionales favorecieron una dependencia que excedía el ámbito militar. Rusia aportó armamento, cooperación en defensa y presencia estratégica, consolidando una relación asimétrica en la que la búsqueda de protección reducía los márgenes de autonomía del Estado armenio.

Esa dependencia se extendió hacia sectores decisivos de la economía. La infraestructura energética, incluida la central nuclear, las vías férreas y el abastecimiento de petróleo y gas mantuvieron vínculos profundos con intereses rusos. Moscú también ocupó un lugar destacado como mercado para las exportaciones y origen de inversiones. A ello se sumaron las remesas enviadas por la numerosa comunidad armenia residente en Rusia, fundamentales para el sostenimiento económico de hogares. En consecuencia, cualquier intento de modificar bruscamente ese alineamiento podía tener efectos sobre el abastecimiento, la actividad económica y la estabilidad interna.

La alianza, por lo tanto, no puede interpretarse únicamente como una elección ideológica. Representó una respuesta a restricciones concretas, que otorgaba ciertas garantías, pero imponía costos políticos y estratégicos. Diversificar sus apoyos internacionales suponía buscar alternativas sin desarticular las redes militares, comerciales y energéticas de las que dependía el país. Allí residía una de las principales contradicciones de la política exterior armenia: aspirar a una mayor independencia mientras persistían condiciones materiales que dificultaban ejercerla.

En contraste, Georgia identificó tempranamente a Rusia como su principal amenaza a la seguridad nacional. La guerra de 2008 y la posterior consolidación de la presencia militar rusa en Abjasia y Osetia del Sur profundizaron esa percepción y precipitaron la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú. Desde la perspectiva georgiana, la disputa no se limitaba a cuestiones de influencia regional, sino que comprometía su integridad territorial y su capacidad de decisión soberana.

Para contrarrestar esa presión, Georgia buscó un balance geopolítico mediante su aproximación a la OTAN y la Unión Europea. La integración euroatlántica aparecía como una vía para obtener respaldo político, ampliar la cooperación y disminuir su exposición frente a Rusia. Sin embargo, la aspiración de integrarse en esas estructuras no equivalía a disponer de garantías inmediatas de seguridad. La distancia entre el objetivo diplomático y las capacidades de protección reflejaba los límites de una estrategia condicionada por una relación de fuerzas desfavorable.

Azerbaiyán, por su parte, adoptó una postura de neutralidad pragmática, evitando alinearse de manera exclusiva con las estructuras occidentales o las iniciativas euroasiáticas impulsadas por Moscú. Esa flexibilidad se apoyó en sus abundantes recursos energéticos, que le proporcionaron ingresos, instrumentos de negociación y una proyección internacional. A diferencia de sus vecinos, Bakú disponía de una fuente de poder económico capaz de ampliar su margen de maniobra frente a actores externos.

La alianza estratégica con Turquía resultó fundamental. Además de su dimensión política y militar, ofreció corredores para exportar gas y petróleo hacia los mercados europeos mediante oleoductos y gasoductos. Paralelamente, Azerbaiyán mantuvo intercambios de armamento con Rusia y atrajo inversiones de Estados Unidos y Europa. Esta combinación le permitió sostener vínculos con potencias de intereses divergentes, sin comprometer su política exterior con una sola de ellas. El acuerdo energético con la Unión Europea, orientado a aumentar los suministros de gas hacia 2027, reforzó esa lógica de diversificación.

En conjunto, las trayectorias de Armenia, Georgia y Azerbaiyán muestran que los alineamientos internacionales no dependen únicamente de afinidades políticas. La seguridad territorial, la infraestructura crítica, los flujos comerciales, los recursos energéticos y las alianzas militares establecen límites y oportunidades concretas. En una región donde confluyen intereses de potencias mayores, preservar la soberanía implica administrar dependencias, construir apoyos y sostener capacidad de decisión propia.





Cambios de rumbo y reconfiguraciones recientes

La dinámica reciente en la política exterior del Cáucaso Sur muestra transformaciones significativas, en un escenario de disputas de influencia, redefinición de alianzas y nuevos equilibrios de seguridad. Armenia, Georgia y Azerbaiyán respondieron de manera diferente a la necesidad de preservar autonomía y sostener vínculos externos. Los alineamientos responden a preferencias diplomáticas y a condicionamientos militares, económicos e institucionales.

En Armenia, la llegada del gobierno de Contrato Social desplazó la hegemonía del prorruso Partido Republicano e impulsó un distanciamiento de la órbita de Moscú. Esta orientación busca ampliar el margen de maniobra de Ereván y diversificar sus relaciones. Sin embargo, la posibilidad de traducir ese objetivo político en una modificación efectiva de sus dependencias encuentra límites concretos: las fronteras armenias continúan bajo resguardo ruso y permanecen operativas la base militar de Gyumri y la base aérea de Erebuni. A ello se suman relaciones económicas y energéticas que dificultan sustituir rápidamente a su histórico socio estratégico. Un quiebre abrupto con Rusia podría situar al país en una posición compleja, en la que la búsqueda de autonomía política se enfrentaría con necesidades inmediatas de protección y estabilidad. El desafío armenio consiste en redefinir sus alianzas sin generar un vacío de capacidades que agrave sus vulnerabilidades.

En Georgia se observa una aparente paradoja. Aunque el artículo 78 de su Constitución establece el mandato de promover la integración a la Unión Europea y a la OTAN, el partido gobernante Sueño Georgiano —bajo la influencia del magnate Bidzina Ivanishvili— ha mostrado una reorientación favorable a Moscú. La tendencia contrasta con la orientación euroatlántica consolidada tras sus conflictos territoriales. La aprobación de leyes restrictivas para organizaciones no gubernamentales, inspiradas en la legislación rusa, un régimen favorable a capitales offshore y la elección indirecta de autoridades desencadenaron casi dos años de protestas populares. Estas movilizaciones expresan una disputa que supera el desacuerdo con decisiones puntuales: ponen en tensión las aspiraciones de integración occidental de una parte de la sociedad y la orientación adoptada por sus dirigentes. Georgia enfrenta así una contradicción entre sus objetivos constitucionales, el peso de la influencia rusa y las disputas internas sobre el rumbo del Estado.

Finalmente, Azerbaiyán continúa desplegando una estrategia multipolar, basada en preservar vínculos simultáneos con potencias de intereses divergentes. Un día antes de la invasión rusa de Ucrania, Bakú y Moscú anunciaron un acuerdo de alianza que contemplaba aspectos de cooperación militar. Este acercamiento, sin embargo, no implicó abandonar las relaciones estratégicas con Turquía ni la articulación económica con los mercados occidentales. Por el contrario, ilustra una política exterior que procura aprovechar sus recursos energéticos y su posición regional para negociar. En conjunto, las trayectorias de los tres países muestran cómo el Cáucaso Sur se convierte en un espacio donde los proyectos de autonomía conviven con dependencias persistentes y donde cada decisión exterior debe ponderar oportunidades, riesgos y relaciones de fuerza.

La supervivencia en el realismo estratégico

Para interpretar estas conductas contrapuestas resulta fundamental recurrir a la escuela del realismo político. Esta corriente analiza el comportamiento estatal a partir de un paralelo con la conducta humana, argumentando que los Estados comparten un deseo de dominación y definen su interés nacional en términos de poder frente a sus rivales.

Sin embargo, teóricos realistas como Raymond Aron o John Mearsheimer destacan que la meta prioritaria de los Estados no es necesariamente la maximización constante del poder, sino garantizar su propia supervivencia. En el Cáucaso Sur, los alineamientos, los virajes diplomáticos y la gestión de los recursos estratégicos responden a este imperativo categórico. La resolución definitiva de estas posturas quedará condicionada al desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania, evento que redefinirá el equilibrio de fuerzas en todo el espacio postsoviético.

En el Cáucaso Sur, las estrategias divergentes de Armenia, Georgia y Azerbaiyán responden a un mismo imperativo: garantizar su supervivencia frente a un equilibrio regional incierto.



BAKÚ
AZERBAIYÁN

Gracias al auge petrolero, la capital de Azerbaiyán pasó de ser una gris urbe soviética a una metrópolis moderna. Se restauró su casco antiguo, surgieron rascacielos futuristas como las Torres Flama y se globalizó su economía e infraestructura.

***Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.**



EL FANTASMA DE UNA GUERRA
EN DOS FRENTES PARA PAKISTÁN

ADOLFO **KOUTOUDJIAN.** PROFESOR DE GEOPOLÍTICA EN LA FACULTAD DE LA DEFENSA NACIONAL (UNDEF)

La reciente escalada de bombardeos y combates en la frontera afgano-paquistaní expone la grieta definitiva entre Islamabad y el Talibán. Ante un Pakistán desbordado en la Línea Durand y forzado a replegar su disuasión, la India activa una estrategia de cerco asimétrico, mientras Washington, Moscú y Pekín libran una silenciosa batalla geopolítica por el control de los corredores energéticos y las bases estratégicas en el corazón de Eurasia.

El conflicto encierra una paradoja histórica: Pakistán impulsó el nacimiento del Talibán en la década de 1990 para ganar influencia regional frente a la India y celebró su regreso al poder en 2021. Sin embargo, la alianza duró poco: en la actualidad, Pakistán acusa a las autoridades afganas de cobijar a grupos rebeldes en su suelo, mientras que Afganistán niega. La disputa enfrenta, además, a dos fuerzas totalmente desiguales: un gobierno talibán con 172.000 combatientes frente a un ejército paquistaní de 600.000 soldados dotado de armamento nuclear.

A simple vista, para el observador distante estos episodios pueden parecer una disputa lejana o irrelevante. Sin embargo, la pregunta estratégica es inevitable: ¿por qué un choque de baja intensidad en estas cordilleras debería captar la atención internacional?

Tal como nos enseñó la reciente crisis en Irán, el control o la inestabilidad de un paso estratégico puede alterar de inmediato los costos de producción y la seguridad a nivel mundial. En la cuenca del valle del Indo ocurren dinámicas de igual magnitud: allí convergen las rutas por donde circula el 20% del petróleo del planeta, las segundas reservas de gas de Asia Central y el tenso equilibrio entre potencias atómicas vecinas. El valle del Indo no es un rincón aislado, sino el estrecho pasillo donde se cruzan los mayores intereses energéticos, comerciales y militares del globo.

Lo que presenciamos hoy es la reactivación de una guerra tribal y de clanes que busca demostrar presencia, valentía y fanatismo religioso mediante ataques a puntos fijos y duelos de artillería intensos, pero con un número relativamente bajo de bajas. Pakistaníes y afganos pastunes luchan y mueren por diversas causas, atravesados por la pobreza económica y la fragilidad de unidades políticas incapaces de contener tanta diversidad. Estos hechos se repiten desde hace siglos en los valles desérticos de Asia Central y generan ecos que alcanzan los confines de Asia, Europa y Medio Oriente.



En 1893 la diplomacia victoriana fijó los límites entre el área de influencia británica en el Indostán y la expansión de la Rusia zarista sobre el Turquestán. La Línea Durand, como se conoce en la actualidad, dio forma a la frontera internacional terrestre de 2.640 kilómetros entre Afganistán y Pakistán. Sobre esa demarcación artificial predomina hoy la etnia pastún, asentada mayoritariamente en el sur afgano y con un peso decisivo en el oriente paquistaní. Se trata de comunidades atravesadas por intereses superpuestos, hegemonizadas actualmente por la facción político-étnica del Talibán: una estructura surgida en la década de 1990 e integrada por sectores que promueven un orden ancestral, el sometimiento de las mujeres, desarrollos tecnológicos marcadamente primitivos y una clara ajenidad respecto del pensamiento científico superior.

El siglo XX bautizó a esta geografía como la tumba de los imperios. Los británicos debieron ceder su hegemonía tras la partición de la India en 1947. En el vacío resultante, irrumpió la Unión Soviética, que terminaría por ser expulsada militar y políticamente en 1989 tras enfrentarse a las milicias muyahidines respaldadas por Estados Unidos. Fueron justamente las canteras ideológicas y los estudiantes de esa resistencia los que dieron forma al Talibán en 1994, abriendo el camino para su posterior retorno al poder en 2021, tras la repentina evacuación estadounidense, celebrada por los afganos como una victoria.

Detrás del polvorín del valle del Indo late una herida no resuelta: el nacionalismo pastún a ambos lados de la Línea Durand. La imposición de esa frontera artificial no logró separar a una etnia que se reconoce como un solo pueblo, dividido únicamente por una demarcación colonial que ni afganos ni paquistaníes han logrado consolidar jamás.

El motor oculto y la Media Luna de Oro

Esta inestabilidad no ocurre en un vacío: sobre el valle del Indo chocan recursos energéticos clave, el 25 % de las reservas mundiales de gas y los corredores hacia el océano Índico. Es también la cuna de la "Media Luna de Oro", el epicentro histórico de producción de heroína, cuyas rutas alimentan a Europa y Estados Unidos y en cuyas zonas grises se germinaron las redes extremistas que marcaron el siglo XXI. En este mapa, la democracia representativa nunca echó raíces; lo que rige es una compleja geografía étnica donde el norte afgano (dominado por uzbekos y tayikos) choca históricamente con el sur y oriente pastún.

Esta fragilidad estructural se vuelve crítica al considerar la desesperación estratégica de Islamabad. Pakistán impulsó al Talibán en la década de 1990, buscando "profundidad estratégica" frente a la India. Al romperse esa alianza, Pakistán quedó expuesto a dos frentes simultáneos. Para blindarse, firmó en septiembre de 2025 un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudita. En un escenario donde las potencias del Golfo financian a un Pakistán atómico acorralado, cualquier error de cálculo militar en la frontera afgana amenaza con arrastrar a la región a una conflagración nuclear.

Frente a este eventual desborde bélico sobre la Línea Durand, la estrategia de la India no pasaría por la intervención militar directa, sino por la consolidación de un cerco geopolítico asimétrico. Para Nueva Delhi, la fractura del eje Islamabad-Kabul representa la anulación definitiva de la histórica "profundidad estratégica" paquistaní. En este escenario, la dirigencia india apostaría a un calculado juego de desgaste: mantener la máxima alerta en la Línea de Control en Cachemira para inmovilizar a las Fuerzas Armadas paquistaníes en su frontera oriental, al tiempo que preserva vías de comunicación pragmáticas con el régimen talibán y con Moscú. Sin romper la delicada arquitectura de disuasión nuclear, la India explotaría la fragilidad estructural de Pakistán, permitiendo que el desgaste en los valles del Hindu Kush reduzca, por peso propio, la capacidad de su histórico rival regional.

El "nuevo gran juego": del tren transafgano a la proyección sobre Ormuz

Este acorralamiento de Pakistán abrió una rendija que las potencias continentales de Eurasia aprovecharon. Ante el deterioro del eje Islamabad-Kabul y el vacío dejado por la retirada estadounidense en 2021, Moscú y Pekín recalibraron sus fichas para reconfigurar el comercio del sur de Asia y sortear las sanciones occidentales, en un escenario de fracturas regionales y competencias geopolíticas superpuestas.

Ante la ruptura con Pakistán, Kabul respondió con un pragmatismo inédito, buscando en Moscú y Pekín avales políticos y financieros para sobrevivir. El ejemplo más ambicioso es el proyecto ferroviario transafgano impulsado por Rusia para conectar el gas de Turkmenistán con los puertos pakistaníes y los mercados de la India. Para Moscú, representa la concreción de un anhelo imperial de siglos: asegurar un corredor terrestre hacia las aguas cálidas del Índico. A la vez, busca seducir a Nueva Delhi –que equilibra su alianza de seguridad con Washington y sus tradicionales lazos comerciales con Moscú– y forzar una coexistencia pragmática entre Islamabad y Kabul mediante el negocio logístico.

Sin embargo, el interés por Afganistán no es sólo comercial; es militar y de proyección de fuerza. En esta arquitectura recobra valor el control de megabases aéreas como Bagram o Kandahar. Estos enclaves funcionan como portaaviones terrestres inhundibles en el corazón de Eurasia. Quien domine el espacio aéreo afgano desde Bagram no sólo fiscaliza las rutas comerciales de Rusia y China, sino que se posiciona a escasos minutos de vuelo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

El tablero se completa en las costas de Baluchistán, la convulsionada provincia dividida entre Irán y Pakistán con salida al Índico. Por su ubicación, a espaldas de Teherán, y su valor como nodo marítimo, Baluchistán se ha convertido en pieza codiciada de una partida de billar a varias bandas, donde Washington, junto a los intereses de Israel, Turquía, China e India, mueve sus fichas para condicionar el abastecimiento energético y el equilibrio de poder del siglo XXI.



Como síntesis de esta compleja trama, el principal efecto de fondo para la macrorregión centroasiática sigue siendo una inestabilidad estructural —política, económica y militar— signada por la reconfiguración de viejas influencias imperiales y la irrupción de actores clave como China y Turquía. En 2026, las grandes potencias reordenan sus prioridades: mientras Estados Unidos busca superar los fantasmas de Saigón (1975) y Kabul (2021) persiguiendo una representación estratégica en el Índico y un eventual retorno indirecto a enclaves como la gran base de Bagram, Rusia profundiza su giro hacia Asia para puentear las sanciones occidentales, utilizando a la India como pivote comercial y buscando concretar su histórico anhelo de acceso a aguas cálidas. Por su parte, China emerge como el gran ordenador pragmático, obsesionado con la estabilidad comercial y la expansión de su Nueva Ruta de la Seda tanto por vía terrestre como marítima.

Sin embargo, tras las proyecciones de las potencias y el protagonismo indiscutido de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, late una realidad que Occidente suele malinterpretar: las crisis de esta región responden a raíces étnico-religiosas profundas, moldeadas por cosmovisiones tribales y estructuras sociales fuertemente patriarcales que resisten tanto a las recetas democráticas liberales como a los viejos esquemas socialistas. En este escenario de final abierto para los próximos años, la hegemonía no se definirá únicamente por la capacidad de disuasión militar o nuclear, sino por la resiliencia económica de los actores que logren sostener su desarrollo social en medio de las recurrentes crisis globales de energía, alimentos y gobernabilidad.

En el corazón de Eurasia, la disuasión militar no bastará: la estabilidad también dependerá de la resiliencia económica y social de sus Estados.

F\



TORA
BORA

14 de junio de 2017 — Ocupación de Tora Bora, Afganistán.
En las montañas de Nangarhar, junto a la frontera pakistaní, el complejo de cuevas de Tora Bora sirvió de refugio a Osama bin Laden y Al Qaeda durante la ofensiva estadounidense de 2001. En junio de 2017, Estado Islámico ocupó brevemente el enclave, recuperado días después por fuerzas afganas.



**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

LA PACIENCIA DEL DÉBIL.

GEOPOLÍTICA DEL DESGASTE Y LA ENCRUCIJADA ASIMÉTRICA ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

ADOLFO **ROSSI.** DIRECTOR DE LA MAESTRÍA EN DEFENSA NACIONAL (FADENA/UNDEF)

La superioridad militar estadounidense no garantiza vencer a Irán. Washington afronta presiones políticas y económicas para resolver pronto el conflicto; Teherán convierte el tiempo, la guerra híbrida y la amenaza sobre Ormuz en resistencia estratégica.

La suposición de que la superioridad militar garantiza por sí sola un resultado favorable se ha vuelto insostenible. Si repasamos la dinámica de las crisis internacionales desde la segunda mitad del siglo XX, lo habitual ya no es el choque directo entre grandes potencias, sino la confrontación asimétrica entre Estados consolidados y actores menores que logran neutralizar la lógica del poder duro. La irrupción de la disuasión nuclear consagró la destrucción mutua asegurada y bloqueó la posibilidad de un enfrentamiento directo entre gigantes, con lo que desplazó las tensiones hacia zonas periféricas de fricción donde el cálculo militar tradicional pierde efectividad.

Para comprender la naturaleza de estos escenarios es necesario remontarse a la genealogía del orden internacional contemporáneo. El mapa global que conocemos nació de las grandes guerras decisivas. La Segunda Guerra Mundial definió un equilibrio bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con zonas de influencia rígidamente delimitadas. Ese orden se transformó en la década de 1990, no como producto de una victoria militar, sino de la implosión interna del bloque soviético. Hoy nos encontramos en una fase singular de reacomodamiento geopolítico: asistimos al surgimiento de un nuevo orden multipolar sin que haya mediado una batalla decisiva que reordene el tablero de un solo golpe.

China proyecta su poder sobre su entorno inmediato y amenaza a Taiwán; Rusia despierta de su letargo postsoviético y desafía la arquitectura de seguridad europea en Ucrania; y Estados Unidos vacila entre sostener sus compromisos globales y replegarse hacia su zona de influencia directa. En ausencia de un conflicto generalizado que defina las posiciones, el sistema internacional se vuelve lento, trabado y propenso al empantanamiento.



En esas áreas de fricción estructural proliferan los conflictos asimétricos, y la relación entre Estados Unidos e Irán funciona como caso testigo. La asimetría central entre Washington y Teherán no reside solamente en el volumen del armamento disponible ni en la brecha entre sus presupuestos de defensa, sino también en la disparidad de intereses estratégicos y en el uso divergente del tiempo. Para una superpotencia global, la intervención en Oriente Medio responde a intereses regionales o periféricos, en los que no está en juego su supervivencia. Para el régimen iraní, en cambio, la contienda representa una lucha existencial. Cuando un actor político percibe que puede ser erradicado, su resistencia no tiene techo. Ante el objetivo declarado de provocar la caída del régimen, sobrevivir a la ofensiva ya constituye una victoria estratégica.

Esta diferencia en la escala de prioridades condiciona la gestión del tiempo. Las democracias occidentales padecen una vulnerabilidad estructural ligada a su propia dinámica política: operan bajo el reloj corto de los ciclos electorales y el escrutinio permanente de la opinión pública. Washington necesita éxitos inmediatos, quirúrgicos y de bajo costo humano y financiero para sostener la legitimidad interna de sus intervenciones. Las guerras prolongadas erosionan el consenso político y vuelven insostenible el costo del despliegue militar. El actor asimétrico, por el contrario, opera con el reloj largo. No necesita ganar batallas decisivas ni destruir las fuerzas de su adversario en campo abierto; le basta con prolongar el conflicto, evitar la derrota y encarecer la permanencia de la potencia hasta inducir su repliegue.

A este choque de temporalidades se suma una transformación profunda en los medios y métodos de la guerra. Al no poder competir en un enfrentamiento convencional entre fuerzas regulares, Teherán asienta su estrategia en la guerra híbrida y de zona gris. El despliegue de herramientas de bajo costo y alto impacto —como la producción masiva de drones, las capacidades de ciberataque, los misiles balísticos accesibles y la articulación de fuerzas irregulares o proxies en la región— reduce la brecha táctica y complejiza el terreno para los grandes sistemas de armas tradicionales. Un dron de costo reducido puede amenazar activos estratégicos o rutas comerciales multimillonarias y poner en crisis la ecuación económica de la defensa convencional.

El factor económico se convierte así en un vector de disuasión tan determinante como el frente estrictamente militar. La capacidad de Irán para proyectar inestabilidad sobre el estrecho de Ormuz y amenazar la infraestructura energética del Golfo le permite incidir directamente en la economía global. Cuando el precio del barril se dispara y la volatilidad del mercado energético se traslada a la inflación mundial, la presión se desplaza automáticamente hacia la política interna de los países centrales. Elevar los costos económicos para el adversario es la vía para que la propia opinión pública de la potencia empiece a cuestionar la racionalidad del compromiso militar.



Frecuentemente se califica la conducta de Teherán como la de un actor irracional, con el argumento de que sus exigencias en la mesa de negociación resultan desproporcionadas respecto de su poder real. Sin embargo, en la lógica del conflicto asimétrico, elevar demandas inaceptables no es un signo de irracionalidad, sino una maniobra meditada para dinamitar acuerdos desfavorables y dilatar los plazos. Cuando las opciones presentadas por la potencia amenazan la continuidad del régimen, la intransigencia negociadora funciona como un mecanismo para ganar tiempo y mantener vivo el conflicto en los términos de Teherán.

Lejos de provocar el desplome interno que en Washington se preveía, la presión externa y el hostigamiento militar han tendido a modificar el equilibrio de poder dentro de Irán. El estado de conmoción permanente no derivó en una fractura social ni en la caída de las instituciones teocráticas, sino en una mayor militarización del régimen y en el fortalecimiento de sus sectores más duros, encabezados por la Guardia Revolucionaria, en detrimento de las facciones más moderadas o pragmáticas. El régimen utilizó la amenaza exterior para cohesionar el frente interno, disciplinar a la disidencia y justificar el control estatal sobre la sociedad.

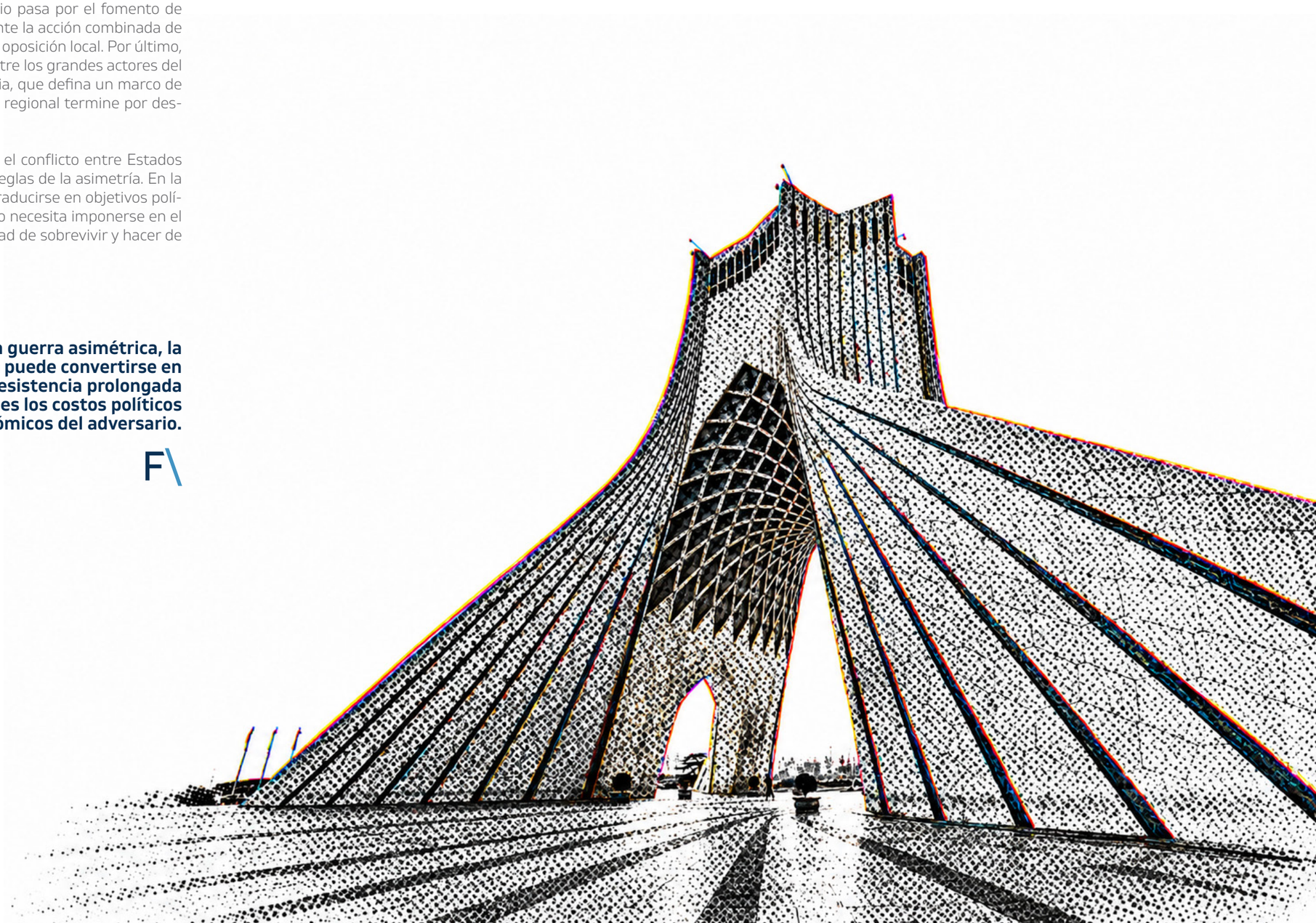


Ante este escenario de empantanamiento, la resolución de las crisis asimétricas raras veces adopta la forma de una victoria militar absoluta. En el mundo contemporáneo existen límites no escritos al uso de la fuerza destructiva total, imprecisos en su origen, pero vigentes en la práctica, que impiden la aniquilación completa de un país. En ese marco, los desenlaces posibles son de otra índole. Un primer escenario es la retirada pragmática de la potencia tras un acuerdo que enmascare el repliegue, semejante a las salidas históricas en otros teatros de conflicto. Un segundo escenario pasa por el fomento de una desestabilización interna de largo plazo mediante la acción combinada de servicios de inteligencia extranjeros y sectores de la oposición local. Por último, existe la posibilidad de un entendimiento amplio entre los grandes actores del sistema internacional, Estados Unidos, China y Rusia, que defina un marco de contención general para evitar que la inestabilidad regional termine por descarrilar la economía mundial.

Mientras ninguno de esos desenlaces se concrete, el conflicto entre Estados Unidos e Irán continuará desarrollándose bajo las reglas de la asimetría. En la guerra moderna, cuando la fuerza bruta no logra traducirse en objetivos políticos sostenibles, el actor militarmente más débil no necesita imponerse en el campo de batalla: le basta con mantener la capacidad de sobrevivir y hacer de la paciencia su principal recurso estratégico.

En una guerra asimétrica, la supervivencia puede convertirse en victoria cuando la resistencia prolongada vuelve insostenibles los costos políticos y económicos del adversario.

F\



ESTRECHO DE **ORMUZ**

28 de febrero de 2026.
Irán restringe el paso marítimo y Estados Unidos aplica un contrabloqueo naval. Esta crisis energética global acumula decenas de petroleros atacados por minas y drones, disparando los precios del crudo a niveles históricos.

**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

LA GUERRA DE DESGASTE ENTRE RUSIA Y UCRANIA. **FRENTES ESTÁTICOS Y BATALLAS POR LA LOGÍSTICA**

GUILLERMO **SPINELLI.** SECRETARIO DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE LA ARMADA

En Ucrania, la aparente inmovilidad del frente esconde una guerra que se libra mucho más allá de las posiciones defensivas. Drones, ataques a refinerías y golpes sobre rutas de abastecimiento convierten la logística en un campo de batalla decisivo.

La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa una fase marcada por el desgaste. Ninguno de los dos contendientes parece, por el momento, en condiciones de quebrar decisivamente el frente, mientras ambos buscan someter al adversario a una presión creciente mediante ataques contra sus posiciones, su infraestructura y sus líneas de abastecimiento.

El resultado es un frente relativamente estático, donde las grandes ofensivas mecanizadas tienen un costo cada vez más elevado. La concentración de sistemas de vigilancia, drones y armas antitanque dificulta el movimiento de grandes formaciones y obliga a buscar otras formas de obtener ventajas. La guerra se libra, así, tanto sobre la línea de contacto como sobre los recursos que permiten sostenerla.

En este escenario, Rusia mantiene una intensa campaña de ataques con misiles contra territorio ucraniano. Emplea tanto misiles balísticos como de crucero, y son los primeros los que representan uno de los principales desafíos para la defensa aérea de Ucrania.

Por su trayectoria, distinta de la de los misiles de crucero —que vuelan a baja altura y siguen el relieve del terreno—, los misiles balísticos son particularmente difíciles de interceptar. Entre los sistemas empleados por Rusia se encuentran los de la familia Iskander y otros de origen norcoreano. Frente a ellos, Ucrania cuenta con una defensa aérea limitada, en la que resultan clave los sistemas diseñados específicamente para enfrentar amenazas balísticas, como los interceptores Patriot PAC-3, de fabricación estadounidense.

La disponibilidad de estos interceptores constituye, por eso, un factor crítico. La reducción de las existencias de PAC-3 limita la capacidad ucraniana para hacer frente a los ataques balísticos rusos, mientras que otros sistemas de defensa aérea ofrecen mejores posibilidades frente a misiles de crucero y drones.





Ataque con drones ucranianos a la planta de petróleo de Kapotnia

Frente a los drones, Ucrania enfrenta además un problema de escala. Los drones son relativamente económicos en comparación con otros sistemas de ataque, pero su eficacia depende en gran parte de su empleo masivo. La saturación de las defensas aéreas se convierte, de este modo, en una parte central de la guerra de desgaste, pues no se trata únicamente de alcanzar un blanco, sino de conseguir que una cantidad suficiente de medios logre atravesar las defensas del adversario.

La relativa ventaja rusa en materia de misiles balísticos contrasta con las limitaciones ucranianas. Ante la imposibilidad de responder con una capacidad equivalente, Ucrania concentra buena parte de sus ataques de largo alcance en drones y misiles de crucero. Estos sistemas también deben atravesar las defensas aéreas rusas, por lo que su eficacia responde a la misma lógica de saturación.

La lógica del conflicto se traslada entonces a la selección de los blancos. Cuando las defensas alrededor de determinados objetivos se refuerzan, Ucrania busca otros puntos vulnerables de la infraestructura que sostiene el esfuerzo de guerra ruso.

Las refinerías han sido uno de los principales objetivos. Los ataques buscan afectar la capacidad rusa de procesar petróleo y producir combustible, con un doble efecto: dificultar el abastecimiento de las tropas en el frente y reducir una fuente de ingresos fundamental para sostener el esfuerzo bélico. No se trata solamente de destruir instalaciones, sino de deteriorar la capacidad que permite mantener en funcionamiento el aparato militar.

El fortalecimiento de las defensas aéreas alrededor de las refinerías llevó, a su vez, a ampliar la búsqueda de objetivos hacia otros eslabones de la cadena logística. Ucrania comenzó a atacar instalaciones destinadas al almacenamiento y la distribución de suministros, incluidas las que abastecen directamente a las unidades de primera línea.

Según el análisis que sirve de base a este artículo, alrededor de veinte instalaciones de este tipo fueron atacadas y sufrieron daños significativos. La lógica es coherente con la naturaleza de esta guerra: cuando resulta difícil quebrar las posiciones enemigas en el campo de batalla, la presión se desplaza hacia todo aquello que permite sostenerlas.

La presión ucraniana no se limita a las posiciones rusas en el frente. Uno de sus principales objetivos es degradar las líneas de abastecimiento que permiten sostener las operaciones, con particular atención a Crimea y al corredor terrestre que conecta la península con el resto de los territorios bajo control ruso.

Los ataques contra puentes, vehículos de transporte y otras vías de comunicación buscan dificultar el movimiento de combustible, munición y equipamiento. A esta presión se suman los ataques contra instalaciones vinculadas al suministro de energía y otros recursos esenciales. El objetivo es reducir la capacidad de Rusia para mantener una infraestructura logística estable en un espacio geográfico estratégico para sus operaciones.

La campaña de interdicción alcanza también a la red que abastece a las fuerzas rusas. Una parte sustancial de ese abastecimiento depende del transporte marítimo y, especialmente, del ferrocarril. La importancia de este último es tal que las Fuerzas Armadas rusas cuentan con tropas ferroviarias especializadas, encargadas de operar y mantener la infraestructura ferroviaria militar.

En este contexto, los drones se han convertido en una herramienta cada vez más relevante para atacar la logística en profundidad. Ucrania emplea sistemas capaces de alcanzar objetivos situados, según el análisis, a entre 80 y 100 kilómetros de la línea de contacto.

La evolución tecnológica de estos sistemas amplía todavía más sus posibilidades. Algunos drones incorporan sistemas de navegación y reconocimiento basados en inteligencia artificial, lo que les permite operar sin una conexión permanente con el operador. De esta manera, pueden identificar determinados blancos y completar el ataque aun cuando se interrumpa la comunicación con quien los controla.

El efecto buscado es claro: afectar el flujo de suministros antes de que llegue al frente. Un ataque contra un vehículo que transporta combustible, munición o equipamiento puede tener una incidencia operativa mucho mayor que la destrucción de un objetivo aislado, porque introduce una interrupción en la cadena que sostiene a las unidades desplegadas.

De acuerdo con este análisis, la presión sobre la logística comienza a reflejarse en las dificultades que enfrentan las fuerzas rusas para mantener el ritmo de sus operaciones. La escasez o la llegada tardía de combustible, munición y equipamiento limita la capacidad de las unidades para sostener acciones ofensivas prolongadas.

Sin embargo, esto no significa que el frente haya dejado de moverse. Las fuerzas rusas continúan atacando en distintos sectores y buscan avanzar mediante operaciones de pequeña escala, mientras Ucrania intenta conservar sus posiciones. El resultado es un combate en el que la disputa por cada posición está estrechamente vinculada con otra batalla, menos visible pero igualmente decisiva: la que se libra por las rutas, los depósitos y los medios que permiten mantener a los soldados en condiciones de combatir.

En tierra, Ucrania mantiene una postura predominantemente defensiva. Pero esa defensa está lejos de reproducir el modelo clásico de la guerra de trincheras, basado en líneas continuas de posiciones enfrentadas y una tierra de nadie entre ambos dispositivos.

El frente actual funciona de otra manera. La defensa se articula alrededor de puntos fuertes ocupados por tropas y, sobre todo, de una vigilancia permanente mediante drones. La presencia de estos sistemas ha reducido drásticamente la posibilidad de moverse al descubierto y permite atacar incluso objetivos individuales: un solo soldado que se desplace cerca de la línea de contacto puede convertirse en blanco de un dron.

Esta densidad de medios no solo modifica la defensa ucraniana. También condiciona la forma en que Rusia intenta avanzar. Las grandes ofensivas mecanizadas tienen un costo elevado y ofrecen blancos demasiado visibles para los sistemas de vigilancia y ataque desplegados en el frente. Por eso, las fuerzas rusas recurren cada vez más a grupos pequeños que buscan infiltrarse en las posiciones ucranianas.

Estas infiltraciones suelen aprovechar la noche o condiciones meteorológicas que dificultan la observación aérea, como la lluvia intensa, la nieve o la niebla. El objetivo inicial no es conquistar grandes extensiones de terreno, sino alcanzar una posición, consolidarla y permitir el ingreso progresivo de nuevos grupos. A partir de esa acumulación se intenta generar la masa necesaria para avanzar.

El procedimiento explica, al menos en parte, el ritmo lento de las operaciones terrestres. La dificultad para concentrar fuerzas y penetrar en profundidad obliga a avanzar de manera gradual, mientras la defensa ucraniana utiliza los drones para detectar y atacar a los grupos que intentan infiltrarse.



Puente en Crimea



Restos de un SU-34 Fúllback derribado en Donetsk

Un combate aéreo a distancia

En el aire, la dinámica es diferente. Ninguna de las dos fuerzas aéreas parece dispuesta a asumir de manera sistemática el riesgo de operar en profundidad sobre el territorio controlado por el adversario. La amenaza de las defensas aéreas obliga a los aviones a operar mayormente desde posiciones relativamente seguras y a recurrir al armamento guiado.

Rusia ha generalizado el empleo de bombas de la familia FAB equipadas con kits UMPK, que les permiten planear y ser guiadas hacia sus objetivos. Lanzadas desde grandes distancias, estas municiones permiten atacar posiciones ucranianas sin que los aviones deban aproximarse directamente a ellas.

Ucrania emplea sistemas de características similares, como las bombas JDAM estadounidenses y las Hammer francesas, además de desarrollos propios. En ambos casos, el armamento guiado permite mantener a las aeronaves fuera del alcance de algunas de las amenazas más peligrosas del espacio aéreo adversario.

La aviación cumple además una función defensiva. Los medios aéreos ucranianos participan en la interceptación de drones y misiles de crucero que ingresan en su espacio aéreo, mientras que la aviación rusa proporciona cobertura a sus propias fuerzas y participa en la protección de las operaciones terrestres.

La consecuencia es un escenario aéreo en el que la aviación no domina libremente el campo de batalla. Como ocurre en tierra, la presencia extendida de sistemas de detección y defensa obliga a operar desde la distancia y convierte a las armas de precisión en una herramienta central del combate.

En el ámbito marítimo también se libra una batalla por la logística. Ucrania ha intensificado los ataques contra pequeños buques rusos utilizados para transportar combustible y provisiones hacia el frente y hacia Crimea. Según el análisis, alrededor de doscientos buques habrían sido afectados por esta campaña.

Todavía resulta difícil determinar cuánto de esa presión se traduce en una pérdida concreta de capacidad de combate para las fuerzas rusas. La destrucción o interrupción de medios logísticos no necesariamente produce efectos inmediatos en el campo de batalla: su impacto depende de la capacidad del adversario para reemplazar los medios perdidos, modificar sus rutas y mantener el flujo de suministros por otras vías.

La misma incertidumbre rodea los ataques rusos contra Ucrania. Mientras Ucrania busca interrumpir las líneas de abastecimiento y afectar la infraestructura que sostiene las operaciones rusas, Rusia ataca la infraestructura ucraniana, incluidas las instalaciones energéticas y objetivos situados en Kiev.



La guerra de desgaste se desarrolla, entonces, en varios niveles simultáneos. Se combate por el control del terreno, pero también por la capacidad de transportar combustible, munición y equipamiento; por la posibilidad de mantener operativas las redes ferroviarias y marítimas; por la disponibilidad de energía y por la capacidad de reponer drones, misiles y otros sistemas.

En ese sentido, la relativa inmovilidad del frente no significa que el conflicto se encuentre detenido. Por el contrario, detrás de cada posición que se sostiene o de cada avance territorial existe una disputa mucho más amplia por los recursos que permiten seguir combatiendo.

La cuestión central pasa, en última instancia, por la resistencia. Rusia y Ucrania buscan imponer al adversario un costo difícil de sostener durante un período prolongado, mientras intentan preservar sus propias capacidades. En una guerra en la que ninguno de los dos bandos parece capaz de obtener rápidamente una ruptura decisiva, la capacidad de absorber daños, reponer pérdidas y mantener en funcionamiento la maquinaria logística puede resultar tan determinante como la conquista de una posición en el frente.

En una guerra sin avances decisivos, resistir depende tanto de la capacidad de combate como de sostener la logística y reponer las pérdidas.

F\



SARCÓFAGO DEL REACTOR 4
CHERNÓBIL

14 de febrero de 2025 - Ataque a la central nuclear de Chernóbil. Un artefacto militar impactó contra el techo del domo, provocando un incendio y perforando la cubierta exterior. Aunque causó daños materiales significativos, las autoridades confirmaron que los niveles de radiación se mantuvieron estables.

***Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.**

LA AMENAZA SILENCIOSA. **NIGERIA, EL GIGANTE DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y EL CONFLICTO QUE AVANZA SIGILOSAMENTE DESDE EL SAHEL**

JOHN **CHINEDUM IGWENAGUM.** OFICIAL DEL EJÉRCITO NIGERIANO Y MAESTRANDO EN FADENA.

Nigeria concentra el mayor poder demográfico y militar de África Occidental, pero pierde iniciativa frente a una insurgencia que avanza desde el Sahel. La desarticulación de la seguridad regional y la falta de respuesta estratégica amenazan con convertir esa vulnerabilidad en una crisis estructural.

Basta conducir dos horas hacia el norte desde la ciudad de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, para que el asfalto se termine poco después de Illela, en el límite con la República de Níger. El camino da paso a una intrincada red de pistas de arena y corredores boscosos anteriores a cualquier mapa trazado sobre esta región. En esa ruta, un poblado mercantil solía convocar cada viernes a comerciantes de ambos lados de la frontera. Quienes habitan la zona advierten en voz baja que el mercado apenas sobrevive; las vías de acceso están bajo vigilancia constante, y no por parte del Estado. Cuatrocientos kilómetros al sur, en Lagos, las compañías fintech cierran rondas millonarias de financiamiento, los compases del afrobeats resuenan en las terrazas de moda y la prensa económica recuerda que Nigeria se mantiene como una de las mayores economías y la nación más poblada del continente. Ambos escenarios conviven dentro de Nigeria. Sin embargo, la distancia que los separa no es estrictamente geográfica: es una brecha de atención política.

Este artículo aborda la fractura creciente generada por el colapso del cinturón de Estados que bordea el norte nigeriano, donde distintas juntas militares expulsaron a las tropas extranjeras que contenían la expansión yihadista. Dichos grupos insurgentes avanzan hoy con determinación hacia el sur, amenazando a un país de una escala territorial y demográfica inmensamente superior. Nigeria no está perdiendo esta contienda de manera aparatosa ni en los titulares de primera plana, pero subestima hasta qué punto el fenómeno ya ha echado raíces en su territorio.



La paradoja de la primacía

Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África y una de sus economías más gravitantes. Posee, por un margen considerable, las fuerzas armadas más numerosas y experimentadas de África Occidental. Fue miembro fundador y pilar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, también identificada por su sigla en inglés ECOWAS) y aportó el núcleo operativo de la fuerza regional de interposición que resultó determinante para poner fin a las guerras civiles de Liberia y Sierra Leona en la década de 1990. Aquella experiencia consolidó su gravitación política y militar, al demostrar que su capacidad de movilización podía proyectarse más allá de las fronteras nacionales y traducirse en un instrumento de estabilización regional.

Bajo cualquier parámetro doctrinario tradicional, Nigeria debería constituir el principal ancla de seguridad del teatro regional, capaz de articular respuestas colectivas frente a amenazas transnacionales. En cambio, asiste como observadora, con un notable grado de distracción, a la disgregación de la propia arquitectura multilateral concebida para conjurar este tipo de amenazas. Esta vulnerabilidad queda de manifiesto ante el hecho de que una insurgencia a la que contuvo durante diez años como un foco localizado en el noreste encuentra ahora nuevas vías de penetración territorial desde el noroeste. La expansión del problema revela las dificultades para convertir la superioridad de medios en una estrategia coherente y coordinada con los países vecinos. En consecuencia, la masa crítica no se ha traducido en control territorial, ni el poderío militar en liderazgo estratégico.



El colapso del Sahel

Entre 2020 y 2023, Mali, Burkina Faso y Níger atravesaron golpes de Estado que desplazaron a sus gobiernos y dieron paso a juntas militares. Estas autoridades justificaron la toma del poder con el argumento de que los gobiernos derrocados habían fracasado en contener la violencia yihadista. Los oficiales que asumieron el mando expulsaron a los contingentes militares occidentales y reivindicaron su «soberanía», recurriendo con frecuencia a fuerzas paramilitares rusas para sustituir la presencia francesa y las misiones de Naciones Unidas ya replegadas.

No obstante, la maniobra estratégica parece haber fracasado por completo. Dos organizaciones yihadistas rivales —Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vinculada a Al Qaeda, y la Provincia del Sahel del Estado Islámico, afiliada a esa organización— se han expandido con un ritmo que descolocó incluso a los analistas más cautelosos. Ambas estructuras concentraron una porción sustantiva de las muertes provocadas por el terrorismo a escala global en 2025, reflejo de la intensidad que había alcanzado la violencia en la región. La junta militar de Burkina Faso ejerce hoy control efectivo sobre menos de la mitad de su territorio nacional. En Mali, durante los últimos meses de 2025, el JNIM impuso un asedio sobre Bamako mediante el bloqueo del suministro de combustibles: una forma de presión que afectó el abastecimiento de la capital sin necesidad de tomarla militarmente.

En enero de 2025, las tres juntas formalizaron su ruptura con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS) mediante su retiro conjunto del bloque, mientras consolidaban su propia alianza política y de seguridad, la Alianza de Estados del Sahel. Esta decisión dejó a un conjunto de países que abarca cerca de un tercio de la superficie de África Occidental fuera del principal marco regional con experiencia en operaciones de seguridad y defensa coordinadas. Vista en retrospectiva, la advertencia de intervención militar formulada por Nigeria tras el golpe en Níger no hizo más que endurecer la postura de las juntas, acelerando su ruptura en lugar de abrir una vía de negociación.



La misma patología en la cuenca del lago Chad

El foco insurgente tradicional de Nigeria —encarnado por Boko Haram y su escisión alineada con el Estado Islámico, ISWAP— también sufrió el costo institucional de esta fragmentación. La Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional (MNJTF, por sus siglas en inglés), una coalición militar integrada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún para coordinar la lucha contra estas insurgencias en la cuenca del lago Chad, se encuentra en proceso de desintegración. Chad amenazó con retirarse tras sufrir severas bajas operacionales. Níger consumó su salida formal en 2025 y reorientó sus tropas hacia la protección exclusiva de su infraestructura petrolera, lo que redujo aún más los efectivos disponibles para actuar conjuntamente contra los grupos armados. En este escenario, Nigeria, potencia hegemónica de la región, asume un volumen creciente de las operaciones bélicas con un número cada vez menor de aliados, en paralelo a una diversificación sin precedentes del vector de amenaza.

El síntoma más nítido de dicha mutación es la facción conocida como Lakurawa. Nacida en 2017 como una milicia de autodefensa vecinal —un grupo armado comunitario, distinto de las fuerzas de seguridad regulares— y financiada por productores rurales de Sokoto y Kebbi para combatir el cuatrerismo, es decir, el robo de ganado, hacia 2024 se transformó en un actor híbrido que combina el bandidaje organizado con formas de control local de inspiración yihadista. Sus bases operativas se asentaron a lo largo de la franja fronteriza entre Nigeria y Níger. En 2025, el Estado nigeriano la catalogó formalmente como organización terrorista, disposición legal que tuvo un impacto táctico nulo en el terreno.

La relevancia de Lakurawa no radica en su volumen de fuego ni en su número de efectivos, sino en su valor posicional dentro del mapa estratégico. Constituye el punto de articulación entre los conglomerados yihadistas del Sahel y las facciones herederas de Boko Haram en el lago Chad, ubicadas a más de mil kilómetros de distancia. Trabajos de inteligencia e investigación académica documentaron la cesión o «préstamo» de un centenar de combatientes del JNIM a una red tributaria de Lakurawa activa en el estado nigeriano de Kwara. Fue en esa misma jurisdicción donde, en febrero de 2026, un ataque coordinado causó la muerte de más de doscientas personas, hecho que ilustra hasta qué punto la violencia se había extendido dentro de Nigeria. Se trata del trazado inicial de un teatro de operaciones transnacional continuo: un espacio de conflicto en el que redes y grupos armados actúan a través de fronteras y conectan áreas geográficamente distantes, desde la fachada atlántica hasta la cuenca del lago Chad, utilizando el territorio nigeriano como corredor.



Las cuestiones de fondo

El liderazgo regional de Nigeria durante la última década ha sido más declarativo que real, y el derrumbe institucional del Sahel terminó de exhibir sus límites. Ningún Estado puede pretender funcionar como polo de estabilidad regional mientras importa vulnerabilidades e ingobernabilidad a través de todas sus fronteras. Este silencio estratégico, por otra parte, responde a incentivos claros. Una amenaza que madura lentamente en corredores selváticos carece de la urgencia de una incursión sobre la capital federal y no pone en jaque directo los nudos de renta petrolera, los centros bursátiles ni los distritos de la élite institucional, que son las variables que configuran el termómetro de crisis en Abuya. Esta atención selectiva constituye una opción política deliberada que se sostiene sistemáticamente año tras año.

Asimismo, cabe recalcar que la mera expansión presupuestaria en el área de defensa —absorbida fundamentalmente por la masa salarial— no redunda en una mayor capacidad operacional. La partida asignada a la seguridad de Nigeria para 2026 ronda los 5,4 billones de nairas (₦5.400.000.000.000, es decir, 5,4 millones de millones de nairas). Sin embargo, el grueso de las asignaciones de la cartera de Defensa se destina a gastos corrientes de personal, en detrimento de capacidades críticas como vehículos aéreos no tripulados (drones), medios de movilidad táctica e infraestructura de inteligencia y reconocimiento, indispensables para detectar y contener insurgencias que atraviesan las fronteras nacionales. Quince años ininterrumpidos de erogaciones por decenas de billones de nairas no han mejorado el cuadro de situación, que hoy es más complejo y degradado que en los inicios del ciclo.

Sumado a esto, los mecanismos interestatales diseñados para prevenir este escenario colapsaron sin que Nigeria haya formulado una arquitectura de reemplazo. La MNJTF se desangra operativamente y la CEDEAO ha perdido un tercio de su jurisdicción territorial junto con gran parte de su gravitación política sobre el Sahel. Nigeria continúa siendo el único actor regional con la capacidad material indispensable para promover un nuevo pacto de seguridad colectiva, pero no ha exhibido sentido de urgencia estratégica. Mientras tanto, en el noroeste del país, una milicia rural originalmente contratada contra el delito común muta silenciosamente hasta erigirse en el eslabón de enlace entre dos insurgencias de escala continental.

La consecuencia central de esta combinación no reside sólo en la persistencia insurgente, sino en la pérdida de iniciativa estratégica del Estado nigeriano. Cuando la respuesta pública se organiza alrededor de episodios de alto impacto y no de la evolución territorial de las amenazas, los actores armados ganan tiempo para consolidar corredores, diversificar recursos y explotar fracturas entre jurisdicciones. La contención deja entonces de constituir una política de seguridad para convertirse en administración reactiva del deterioro. Revertir esta dinámica exigiría desplazar el centro de gravedad desde el volumen nominal del gasto hacia la capacidad operacional efectiva y reconstruir mecanismos de coordinación fronteriza. Sin ese viraje, Nigeria corre el riesgo de financiar indefinidamente una amenaza cuya expansión no logra impedir.



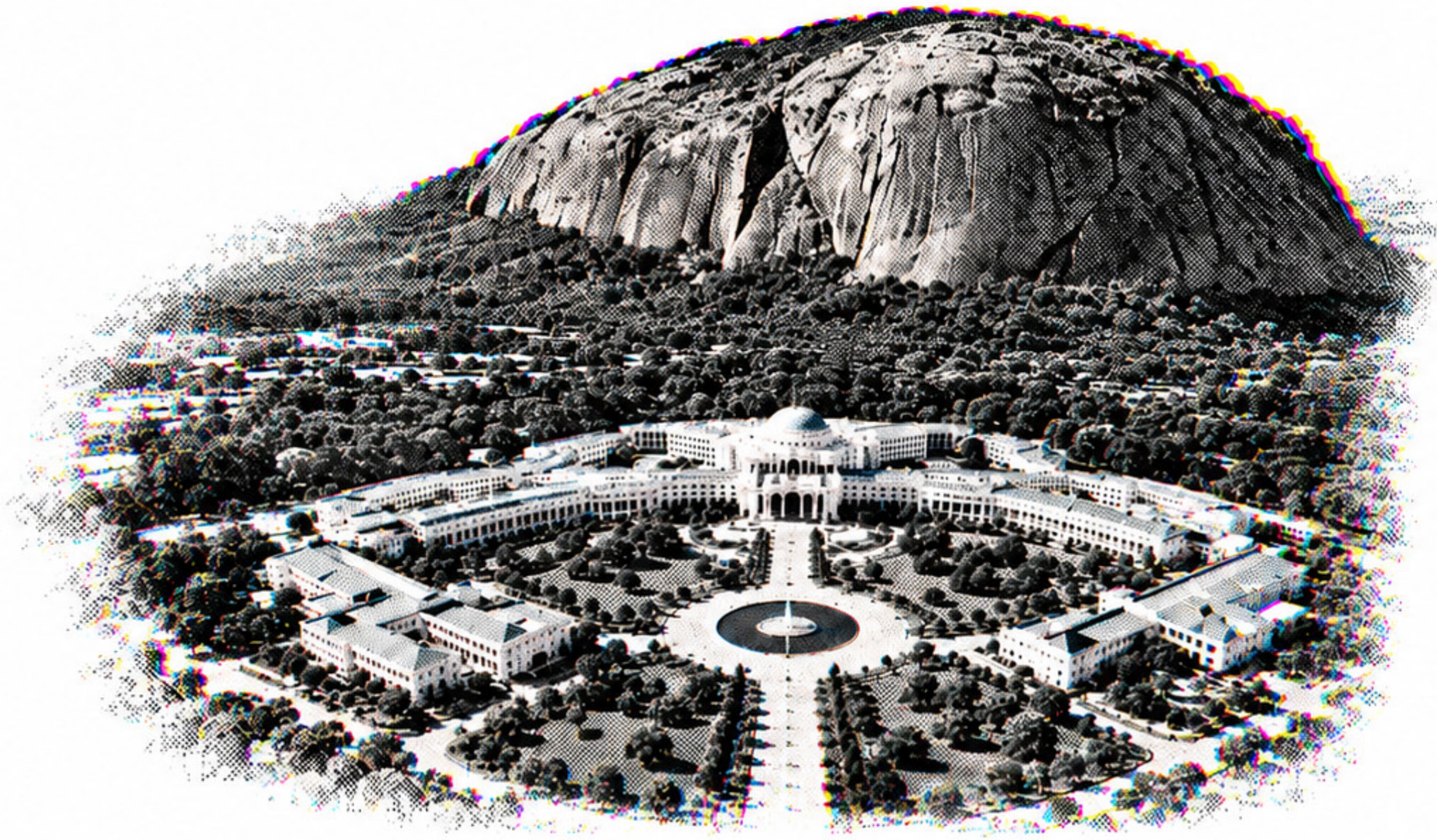
Retorno a la ruta de Illela

Dada su escala macroeconómica y su mayor resiliencia estructural, es poco probable que Nigeria experimente una pérdida de control territorial similar a la sufrida por Mali, Burkina Faso o Níger. Sin embargo, la comparación no se agota en el riesgo de disolución estatal. Pese a su preeminencia en África Occidental, Nigeria ha visto degradarse sus dispositivos de defensa en los últimos diez años, debido en gran parte a que el deterioro se ha desarrollado de forma capilar, al margen de la atención pública masiva y bajo la indiferencia de sus decisores.

El conflicto que se proyecta desde el Sahel no es silencioso por falta de violencia o de señales en el terreno. Es silencioso porque la conducción política de Nigeria ha resuelto de forma sistemática desoírlo. Se trata de una decisión deliberada y, por ahora, el país todavía retiene el margen de maniobra necesario para rectificar el rumbo.

La amenaza no avanza en silencio: es la falta de una respuesta estratégica la que permite que siga ganando territorio.

F\



WORO
KWARA NIGERIA

3 de febrero de 2026 - Masacre de Woro, Nigeria. Un ataque perpetrado por grupos armados contra Woro y comunidades cercanas, en el estado nigeriano de Kwara, provocó numerosas víctimas fatales y graves destrozos materiales. Viviendas y comercios fueron incendiados; vehículos quedaron destruidos. Las fotografías posteriores muestran paredes ennegrecidas, techos de chapa derrumbados y edificios parcialmente reducidos a escombros.

**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

LA GUERRA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO QUE POCOS VEN Y MUCHOS SUFREN. **LO QUE LA MONUSCO ENSEÑA A LA DEFENSA SUDAMERICANA**

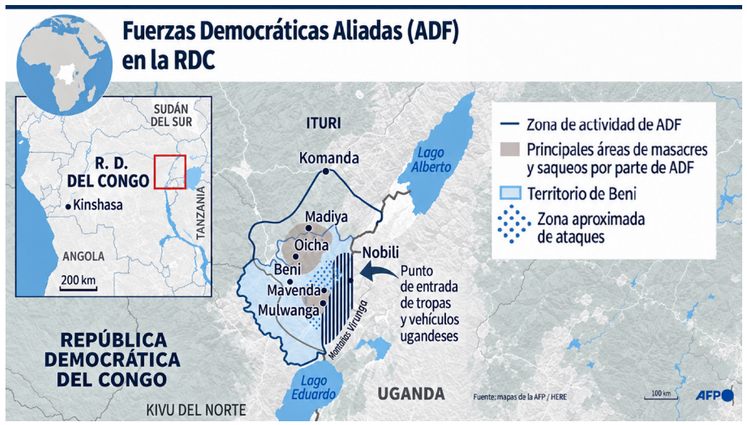
CARLOS AUGUSTO **DA SILVA NÉTO.** OFICIAL DEL EJÉRCITO BRASILEÑO. MAESTRANDO EN DEFENSA NACIONAL EN LA FACULTAD DE LA DEFENSA NACIONAL (FADENA)

En las selvas del este congoleño, grupos armados explotan recursos estratégicos y vacíos de autoridad estatal mientras la MONUSCO adapta sus operaciones. Esta experiencia revela desafíos de la guerra irregular contemporánea y ofrece lecciones concretas para la defensa sudamericana.

El humo invisible en los Grandes Lagos

Mientras las cancillerías mundiales y los titulares de la prensa internacional mantienen su atención enfocada casi exclusivamente en los escenarios de Europa del Este o de Oriente Medio, una tragedia silenciosa de proporciones devastadoras devora el corazón ecuatorial de África.

En el este de la República Democrática del Congo, bajo la densa copa de la selva de Ituri y en las laderas escarpadas de Kivu del Norte, una facción yihadista que juró lealtad al califato global masacra aldeas enteras, secuestra niños para convertirlos en combatientes prescindibles y gana millones de dólares mediante el control de minas clandestinas de oro y coltán. Se trata de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), brazo armado de la Provincia de África Central del Estado Islámico (ISCAP, por sus siglas en inglés). Casi nadie informa sobre estos hechos y son pocos los debates acerca de lo que sucede allí.



Fuente: AFP (2021), reproducida en Modern Ghana.



Sin embargo, justo en el epicentro del engranaje geopolítico de sangre y minerales estratégicos que envuelve el este de África, el general de división Ulisses de Mesquita Gomes comanda la fuerza militar de las Naciones Unidas más compleja y numerosa del planeta: la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Es el sexto oficial general brasileño que asume el mando militar de la misión en ese país. La presencia de un oficial general sudamericano al frente de cerca de 11.000 cascos azules en un entorno de combate real constituye un puesto avanzado de observación operacional y doctrinaria de valor inestimable para el Cono Sur.

La complejidad del teatro de operaciones aumenta significativamente porque dos provincias del este de la República Democrática del Congo, Kivu del Norte e Ituri, se encuentran bajo estado de sitio, decretado tras la ocupación de Goma, capital de Kivu del Norte, por el grupo armado M23. La caída de este polo regional en manos de una fuerza irregular con un fuerte apoyo externo no solo desencadenó un colapso humanitario y sanitario sin precedentes, sino que también expuso la fragilidad de la gobernanza en zonas donde la presencia soberana del Estado es limitada. Además, la misión también interviene ante emergencias sanitarias, como el brote de ébola que afecta a la región, lo que amplía aún más la complejidad del entorno operacional y las exigencias sobre las tropas.

Brasil, al igual que Argentina, posee una larga tradición de participación en misiones multilaterales de paz. Sin embargo, el escenario del este de la República Democrática del Congo dista mucho de la pacificación urbana de Puerto Príncipe, en Haití, durante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), o de las tareas de observación en Chipre, en el marco de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).

Este artículo busca mostrar que la lucha que libra la MONUSCO contra las ADF no constituye una anomalía exótica africana. Por el contrario, representa una de las expresiones más acabadas de la guerra irregular contemporánea que amenaza las periferias soberanas del Sur Global. El enfrentamiento entre tropas regulares, milicias con armamento pesado, células yihadistas dispersas y redes de saqueo económico en zonas de selva densa ofrece lecciones tácticas, operacionales y estratégicas fundamentales para la planificación y el desarrollo de capacidades de defensa en América del Sur, así como para profundizar la cooperación estratégica entre Brasil y Argentina.

Anatomía del enemigo: oro, cacao y yihadismo en la línea del ecuador

Para comprender la magnitud del desafío, es indispensable dejar de lado las etiquetas simplistas que presentan a las ADF como «rebeldes tribales».

El grupo, fundado en la década de 1980 en Uganda por disidentes islámicos radicalizados, experimentó una profunda transformación a lo largo de las últimas décadas. Al arraigarse en el noreste de la República Democrática del Congo, la organización estableció una alianza de conveniencia operacional e ideológica con la red transnacional del terrorismo islámico. Las Naciones Unidas la han catalogado como la segunda filial más letal del Dáesh a escala mundial (Institute for Security Studies, 2025; Organización de las Naciones Unidas, 2026). Su conducta combina el terror asimétrico clásico con una forma de gobernanza depredadora sobre territorios rurales donde la presencia del Estado congoleño es limitada.

Los ejemplos de la violencia perpetrada por esta facción no necesitan abstracciones teóricas. En mayo de 2026, una serie coordinada de incursiones en aldeas del territorio de Beni provocó la masacre de más de cincuenta civiles en el transcurso de una sola semana. Los ataques se llevaron a cabo primero con machetes y luego con fusiles automáticos, con el propósito de evitar que las guarniciones militares vecinas recibieran una alerta temprana. Algunos meses después, en julio, dieciséis personas fueron ejecutadas en Mambasa, mientras caravanas de transporte civil eran emboscadas e incendiadas en la carretera RN4, una arteria vital que atraviesa la provincia de Ituri.

El modo de operar de las ADF se basa en el uso sistemático del terror para vaciar zonas agrícolas productivas y forzar el desplazamiento de las comunidades locales. La estrategia busca crear deliberadamente franjas de amortiguación deshabitadas, que eliminan fuentes esenciales de inteligencia local y funcionan como barreras tácticas para dificultar el avance, el rastreo y la infiltración de las tropas estatales y de las fuerzas internacionales de la MONUSCO.

El motor financiero que sostiene esta maquinaria de atrocidades es sofisticado y funcional. Según el informe de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/2026/466), las ADF abandonaron el saqueo esporádico e instituyeron un sistema formal de extorsión tributaria sobre las cadenas productivas locales. Los productores rurales de cacao son obligados a pagar 15 dólares por hectárea para obtener el sello AMANI NA UPENDO – Délivrance Cacao, que les permite cosechar sin exponerse a ser decapitados en los campos. Paralelamente, las minas artesanales de oro, casiterita y coltán pagan cuotas semanales fijas bajo amenaza armada, mientras que los secuestros sistemáticos de comerciantes y líderes comunitarios aportan fondos a la organización mediante rescates que oscilan entre 2.000 y 5.000 dólares por rehén (Organización de las Naciones Unidas, 2026).



La respuesta militar: el mandato, el terreno y la doctrina

La contención de esta amenaza terrorista exige que la MONUSCO despliegue capacidades superiores a la patrulla convencional de presencia visible. Mediante la Resolución 2808 (2025), el Consejo de Seguridad renovó su mandato hasta diciembre de 2026 y estableció la obligación de realizar operaciones ofensivas selectivas contra grupos armados ilegales, bajo el liderazgo del comandante de la Fuerza (Force Commander) (Organización de las Naciones Unidas, 2025). El dispositivo operacional cuenta con la Brigada de Intervención de la Fuerza (FIB, por sus siglas en inglés), que actúa junto a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC, por sus siglas en francés). Asimismo, existe coordinación para evitar interferencias entre las operaciones de la misión y las de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés), en el marco de la Operación Shujaa, que desmanteló complejos logísticos del grupo en las selvas de Mambasa en febrero de 2026.

Por lo tanto, la doctrina de la misión pasó de la protección pasiva a la acción ofensiva selectiva, marcando una evolución significativa en la historia de las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En el nivel estratégico-operacional destacan tres iniciativas: la integración de inteligencia con las fuerzas nacionales, la neutralización de propaganda extremista y el apoyo a operaciones especiales de alta precisión.

Entre las medidas implementadas destaca la activación del Centro Conjunto de Coordinación de Operaciones (CCCO, por sus siglas en francés), que integra la información de la MONUSCO con la de las fuerzas congoleñas, mejorando la comprensión de la situación operacional y la conducción de misiones. También se estableció el Grupo de Maniobra de Información de la Fuerza (FIMG, por sus siglas en inglés), destinado a contrarrestar la propaganda radical del ISCAP en radios comunitarias y redes móviles locales (MONUSCO, 2026; Radio Okapi, 2026). Además, el mando concentró estratégicamente a la Compañía de Fuerzas Especiales de Guatemala para ejecutar operaciones como la captura de líderes de células terroristas de las ADF.

En el nivel táctico, la MONUSCO implementó la Fuerza de Tarea contra las ADF (Counter-ADF Task Force), compuesta por tropas convencionales, unidades de respuesta rápida y fuerzas especiales. Concebida para actuar en tiempo real, busca neutralizar líderes y bloquear las cadenas de suministro de las ADF. Para apoyarla, se adquirieron sistemas de aeronaves no tripuladas de clase III (UAS, por sus siglas en inglés), destinados a la vigilancia infrarroja persistente de rutas de infiltración en la selva densa. En lugar de grandes destacamentos estáticos, se establecieron bases operacionales móviles, desplegadas temporalmente en puntos críticos identificados mediante el análisis de señales de radio y datos. Esta medida aumentó la flexibilidad y seguridad de las tropas, mejoró el factor sorpresa y facilitó maniobras de doble envolvimiento —el clásico concepto táctico de martillo y yunque—, con dos brigadas cercando simultáneamente los refugios del grupo armado (MONUSCO, 2026).

El despliegue de una base móvil en Nia Nia, ubicación estratégica donde confluyen ejes que conectan tres provincias y la capital, Kinshasa, ilustra esta doctrina: cascos azules en posiciones defensivas adelantadas, contacto directo con la población civil y coordinación con las autoridades congoleñas. No se trata de un gesto protocolar. En un teatro donde las ADF explotan el vacío entre tropas y población para intimidar y reclutar, la presencia visible y permanente de la fuerza en zonas de contacto constituye, por sí misma, un instrumento operacional (MONUSCO, 2026).



La dimensión humana de esta campaña quedó en evidencia durante la visita del comandante de la Fuerza al puesto avanzado de Nia Nia, en Ituri, el 13 de octubre de 2026. En una reunión con autoridades locales y comandantes de unidad, el general Ulisses de Mesquita Gomes reafirmó el compromiso central de la misión: dar prioridad absoluta a la protección de la población civil, incluso en el punto más avanzado del dispositivo. La presencia del comandante sobre el terreno, en una zona directamente expuesta a las incursiones de las ADF, transmite a las comunidades y al adversario que los esfuerzos de neutralización van de la mano con la proximidad a la población (MONUSCO, 2026).

Trasladar la experiencia de los Grandes Lagos a la realidad geopolítica de América del Sur no exige grandes saltos de imaginación teórica.

Brasil y Argentina comparten importantes responsabilidades en materia de seguridad en extensas zonas de baja densidad demográfica, fronteras fluviales permeables y regiones de selva densa donde la presencia del Estado es intermitente. El teatro operacional de Beni demuestra que las fuerzas armadas formadas exclusivamente para conflictos interestatales simétricos pueden tener dificultades para adaptarse cuando se enfrentan a adversarios híbridos no estatales, con abundante financiación ilícita y una capacidad letal asimétrica cada vez mayor.



La primera gran advertencia se refiere al uso extendido de tecnología civil en el combate irregular. En el este de la República Democrática del Congo, la proliferación de drones comerciales modificados para lanzar municiones de mortero y el uso de interferidores de señales de posicionamiento geográfico —interferencia de GPS, denunciada expresamente en la Resolución 2808— transformaron el espacio aéreo de baja altitud en una zona gris de alto riesgo (Organización de las Naciones Unidas, 2025). Las fuerzas armadas de Brasil y Argentina, encargadas de controlar corredores amazónicos, rutas fluviales de la Cuenca del Plata y zonas fronterizas, ya no pueden planificar operaciones terrestres sin integrar sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas y sensores portátiles de guerra electrónica capaces de operar en el nivel de pelotón y compañía.

La segunda lección exige planificar la protección permanente de las infraestructuras críticas vinculadas con el transporte de los recursos naturales. El modo de operar de las ADF demuestra que el control de yacimientos estratégicos no se logra ocupando únicamente la mina, sino también interrumpiendo las vías logísticas por las que circula la producción, como puentes, caminos de tierra y redes de transmisión eléctrica. Tanto Brasil, con sus reservas de niobio y mineral de hierro en la Amazonia, como Argentina, con la explotación de litio y de hidrocarburos no convencionales en regiones aisladas, como Vaca Muerta, necesitan incorporar a sus planes estratégicos protocolos para proteger los corredores de transporte frente a actos terroristas y de sabotaje perpetrados por redes del crimen organizado transnacional.

La lucha contra las facciones criminales armadas transnacionales que operan en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y en la frontera norte amazónica exige un alto nivel de coordinación bilateral. Para reducir el desplazamiento de las organizaciones criminales y desarticular su logística, es fundamental que las Fuerzas Armadas de Brasil y Argentina fortalezcan aún más la alianza estratégica consolidada a lo largo de más de 200 años de relaciones diplomáticas.



Elaboración propia del autor con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial.

El vacío de soberanía: preguntas que el pensamiento estratégico de defensa sudamericano debe plantearse

La Política Nacional de Defensa y la Estrategia Nacional de Defensa de Brasil establecen de forma categórica la disuasión y la preparación operativa para proteger el territorio nacional y sus recursos soberanos frente a agresiones de cualquier naturaleza. En consonancia con ello, la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina establece una postura esencialmente defensiva y cooperativa, centrada en la protección de la integridad territorial y la vigilancia de espacios estratégicos compartidos.

En la práctica, sin embargo, el pensamiento contemporáneo sobre defensa en el Cono Sur a veces parte de la percepción de que la estabilidad regional está consolidada. Aunque la ausencia histórica de disputas territoriales interestatales clásicas en las últimas décadas constituye un valioso activo diplomático, esa relativa tranquilidad geopolítica puede debilitar la percepción pública de la urgencia de mantener las capacidades militares en constante modernización frente a las nuevas amenazas transnacionales y asimétricas.

La trágica historia del este de la República Democrática del Congo deshace esa ilusión reconfortante. El debilitamiento de la soberanía congoleña no fue resultado de una invasión extranjera formal encabezada por divisiones blindadas regulares, sino del deterioro paulatino de las capacidades locales de seguridad, rápidamente aprovechado por grupos insurgentes financiados mediante la explotación clandestina de recursos que abastecen a las industrias tecnológicas occidentales y asiáticas (BBC News Brasil, 2025; Naciones Unidas, 2026). La realidad de la región muestra que, cuando el Estado pierde el control de las zonas mineras periféricas y de las rutas de circulación, la autoridad territorial puede pasar a manos de señores de la guerra, organizaciones criminales o grupos transnacionales, algunos de ellos terroristas.

La experiencia de las tropas de la MONUSCO en Beni plantea a los responsables del pensamiento de defensa de Brasil y Argentina una pregunta profunda y realista: si una organización terrorista como las ADF logró resistir durante décadas a distintas ofensivas y consolidar zonas de refugio aprovechando vacíos de autoridad en áreas remotas, resulta imperativo evaluar la resiliencia de nuestros propios territorios forestales, zonas fronterizas y corredores fluviales frente a dinámicas semejantes. La sofisticación táctica y el acceso a armamento de gran impacto por parte de facciones criminales transnacionales en América del Sur ya plantean desafíos complejos, que ponen a prueba las capacidades convencionales de respuesta de las Fuerzas Armadas. En este escenario, ignorar las lecciones extraídas de la experiencia de contrainsurgencia en las selvas de la República Democrática del Congo supone el riesgo de postergar una prioridad estratégica ineludible: ampliar de manera planificada las inversiones en capacidades de defensa y modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas del Cono Sur, para que la disuasión y la preparación operativa no dependan de la improvisación.



Consideraciones finales: el laboratorio del futuro

La actuación de la MONUSCO bajo liderazgo brasileño confirma que la guerra irregular moderna no puede enfrentarse con soluciones exclusivamente militares ni basadas solo en el uso de la fuerza.

Las iniciativas diplomáticas impulsadas en los procesos regionales de Luanda y Nairobi, junto con los esfuerzos coordinados en Washington, Doha y Ginebra para promover el desarme y la integración económica, muestran que la contención definitiva de la insurgencia depende tanto del bloqueo de los flujos financieros clandestinos como del restablecimiento de servicios públicos esenciales en las áreas recuperadas (Radio Okapi, 2026). La preparación operativa abre espacio de maniobra en el plano táctico, pero es la gobernanza institucional la que consolida la estabilidad.

Estas constataciones apuntan a una dirección precisa: la importancia de desarrollar un pensamiento estratégico conjunto entre Argentina y Brasil en materia de defensa. La experiencia operacional en la República Democrática del Congo ofrece aportes valiosos para ese esfuerzo doctrinario y pone de relieve la urgencia de incorporar, en el nivel táctico, capacidades contra aeronaves no tripuladas y de guerra electrónica; proteger activamente los corredores logísticos y los recursos estratégicos; y profundizar la integración entre la inteligencia militar y los organismos de seguridad pública.

Brasil y Argentina ya comparten, afortunadamente, bases sólidas de cooperación que pueden servir de apoyo a esta evolución: asociaciones consolidadas en la industria de defensa, en particular el desarrollo y suministro de plataformas estratégicas como el avión C-390 Millennium (KC-390); ejercicios combinados y periódicos de alta complejidad, como Arandú, Fraterno y Cruzex; y una sólida tradición de intercambio y formación conjunta de oficiales en escuelas militares, instituciones de perfeccionamiento y centros de altos estudios.

Convertir este patrimonio de cooperación en un marco doctrinario común, orientado a estudios compartidos sobre amenazas asimétricas en zonas de baja densidad demográfica y franjas fronterizas, constituye un paso pragmático para transformar las lecciones de la República Democrática del Congo en una capacidad de defensa regional efectiva.



Para los planificadores y asesores de defensa de Argentina y Brasil, el conflicto actual en la República Democrática del Congo debe estudiarse no como un conflicto internacional periférico y distante, sino como una posible referencia para analizar escenarios de conflicto híbrido propios del siglo XXI. Las lecciones de la actuación de la MONUSCO constituyen un patrimonio doctrinario común para la defensa del Cono Sur.

En definitiva, la soberanía sobre los territorios y los recursos estratégicos de la región exige consolidar un pensamiento estratégico conjunto y una cooperación en defensa verdaderamente integrada y pragmática, capaces de traducir la convergencia política en capacidades concretas y conjuntas para proyectar estabilidad y proteger las fronteras sudamericanas frente a las amenazas contemporáneas.

El autor agradece al general de división Ulisses de Mesquita Gomes, comandante de la Fuerza de la MONUSCO, y al coronel Marcelo Rezende de Souza, oficial de la MONUSCO, por sus valiosas orientaciones, su apoyo doctrinario y el respaldo institucional brindados durante la preparación de este artículo.

La experiencia del Congo deja una advertencia para Argentina y Brasil: la soberanía exige presencia estatal, capacidades militares modernas y cooperación estratégica sostenida.

F\



ALDEA DE NTOYO
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Septiembre de 2025 - Masacre de Lubero. Militantes vinculados a esta célula terrorista perpetraron en la localidad una de sus masacres más graves. Durante la noche, se infiltraron entre los asistentes a un funeral y asesinaron con hachas y martillos a más de 70 civiles. El ataque dejó también decenas de heridos e infraestructuras incendiadas.

**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

LA GEOMETRÍA DE LA DESCONFIANZA.
MEMORIAS DE UN CASCO AZUL EN LA FRONTERA PERSA

DANIEL **ESTEBAN.** DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE INTELIGENCIA (ENI)

En la frontera persa, la paz no aparecía como una abstracción diplomática, sino como una práctica física y precaria. Entre calor extremo, campos minados, desconfianza estructural y observadores desarmados, una misión de la ONU reveló la geometría concreta de contener la guerra.

El termómetro marcaba 52 grados sobre el asfalto de la ruta que une Ahwaz con la línea de contacto. Dentro del vehículo de la Misión de Observadores Militares de las Naciones Unidas (UNIIMOG), la vibración del motor levantaba una polvareda fina que se metía en la garganta y cubría el tablero de la camioneta con un manto ceniciento. Afuera, el paisaje de Bakhtaran me recordaba de inmediato a la Patagonia argentina: desértico, montañoso, de vegetación baja y con una amplitud térmica brutal. A ambos lados de la huella, el terreno mostraba la textura quebrada de ocho años de atrición: parapetos de tierra apelmazada, esqueletos de blindados corroídos por el salitre y el peligro latente de campos minados indocumentados.



Llegué a Irán en 1989 como parte del contingente de observadores militares desarmados integrado en la misión encargada de verificar la Resolución 598 del Consejo de Seguridad de la ONU. Hacía apenas seis años que había combatido como oficial en la guerra de Malvinas cuando me notificaron el destino. Para las Fuerzas Armadas argentinas, las misiones de paz de la ONU eran una experiencia internacional incipiente. La noticia me entusiasmó: uno marchaba convencido de que iba a hacer algo positivo por la comunidad internacional, contribuyendo a estabilizar la zona para que dejara de morir gente. Sin embargo, la crudeza del terreno se hizo sentir de inmediato. Lo primero que nos entregaron fue un traje especial y equipo de autoprotección contra explosivos. Patrullábamos en parejas por zonas de riesgo extremo bajo protocolos estrictos de autoprotección, portando dispositivos de emergencia médica y morfina para aplicar de inmediato en caso de sufrir una amputación por mina antipersonal.

La misión exigía interponer a observadores desarmados, vistiendo cascos azules y chalecos reflectantes, entre dos ejércitos continentales que venían de enfrentarse en trincheras. Aquel conflicto se había convertido en la contienda convencional más larga del siglo XX; un choque de atrición donde la densidad de fuego de artillería y el despliegue masivo de infantería revivieron las batallas de la Primera Guerra Mundial. Tras ocho años de matanzas y pérdidas económicas inconmensurables, la guerra terminó sin un vencedor claro ni ventajas territoriales decisivas. Ambas naciones habían aceptado el cese del fuego exhaustas, incapaces de sostener el costo del enfrentamiento.

Para mí, que me había formado como oficial en el Colegio Militar de la Nación bajo las nociones clásicas de la soberanía estatal, desembarcar en el Irán posrevolucionario fue un choque de marcos conceptuales. El país atravesaba la transición política posterior a la muerte del Ayatolá Jomeini, ocurrida en junio de ese mismo año. En Teherán, las fachadas de los ministerios y los pasos bajo nivel lucían retratos gigantescos de los shohada —los mártires de la patria— sobre fondos de tulipanes rojos. La vida cotidiana respondía a una liturgia de Estado donde la política exterior, el celo religioso y el trauma de la agresión exterior formaban un bloque indivisible.

Esa atmósfera teñía cada una de nuestras interacciones en el terreno. Obtener un salvoconducto para que una patrulla de la ONU cruzara un puesto de control requería horas de té amargo, gestos formales de la tradicional cortesía persa y una negociación paciente con jóvenes comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (pasdaranes) que nos miraban con una desconfianza estructural. Convencer a mandos que venían de sufrir ataques con armas químicas en el frente de que un brazalete blanco representaba garantías reales de imparcialidad exigía un rigor técnico e institucional implacable en cada informe de patrullaje.

Si dentro de la estructura de la ONU te sentías protegido por un marco jurídico previsible y profesional, frente a la población civil la sensación era muy distinta. La gente no recibía con simpatía la presencia de militares extranjeros patrullando su territorio. Caminar por las ciudades con el uniforme y la gorra azul era saberse observado constantemente; era vivir en una suerte de "mundo de espías". Había que ser riguroso con las normas locales: vestir pantalones largos a pesar del calor sofocante, respetar que en los cines existieran sectores separados para hombres y mujeres, y comprender que la Guardia Revolucionaria podía detener a una pareja en la vía pública para verificar si estaban casados. Para no cometer errores de seguridad ni diplomáticos, mantuve un contacto fluido con el embajador argentino en Teherán, Cundari Castillo, cuya lectura de la sociedad persa me resultó indispensable para interpretar el contexto local.

La misión de paz enfrentó al observador desarmado con una paradoja extrema: interponerse entre ejércitos exhaustos, campos minados y una desconfianza que atravesaba Estado, sociedad y territorio.



La UNIIMOG llegó a desplegar una dotación aproximada de 350 observadores militares provenientes de más de una docena de países, dividiendo la responsabilidad operacional en diversos sectores fronterizos a lo largo de la línea de cese del fuego. Inicialmente me destinaron al *team site* de Bakhtaran, bajo el mando de un jefe indio, y tiempo después fui trasladado al *headquarters* en Teherán. Compartíamos patrullas con colegas de distintas nacionalidades. Esta diversidad era el corazón de la legitimidad: la Resolución 598 le daba marco legal a la misión, pero la legitimidad sobre el terreno se construía mostrando la neutralidad de múltiples banderas frente a las partes en conflicto.

Según los informes periódicos del Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, presentados ante el Consejo de Seguridad, la tensión operacional se concentraba en la microgeometría de la línea de contacto. Durante el mandato de la misión se documentaron formalmente más de 1.400 violaciones al cese del fuego. La rutina consistía en detectar pequeñas ventajas tácticas que las unidades intentaban consolidar de noche: el avance de un puesto de tirador en cincuenta metros, el ensanchamiento no autorizado de una zanja antitanque, la colocación de nuevos concertinados o el disparo intimidatorio de una ametralladora pesada. Cuando detectábamos una anomalía, la patrulla se desplegaba de inmediato entre ambos puestos, solicitaba el alto al fuego a nivel táctico local, medía las distancias con goniómetros y mapas topográficos, e interpelaba a los jefes de compañía de cada bando para exigir el repliegue a las posiciones acordadas.

Uno de los episodios que más marcó mi percepción del trabajo de *peacekeeper* ocurrió durante un procedimiento de *body exchange* (intercambio de restos de combatientes). Nos encontramos en el sector neutral en la hora fijada. La delegación iraquí llegó con unas cuarenta bolsas negras grandes, mientras que los iraníes traían cuarenta bolsas mucho más pequeñas. En medio del procedimiento, la tensión se disparó y el jefe iraquí ordenó sorpresivamente a sus hombres cargar las armas. Nosotros estábamos desarmados en el centro. La confianza entre las partes acababa de volarse por los aires y el incidente amenazaba con escalar sangrientamente. En ese segundo crítico, nuestro jefe de misión, un oficial neozelandés con enorme oficio, tomó una decisión magistral. Dijo con calma: *«Propongo que esto que vimos hoy no haya ocurrido. No estuvimos acá, no hubo reunión, no hubo intercambio y no hubo desconfianza. Nos retiramos y fijamos otra fecha»*. Dos semanas después volvimos al mismo punto; las partes llevaron lo que correspondía y el procedimiento se completó en absoluto orden. Bajo la supervisión de la ONU, estos procedimientos permitieron la restitución formal de cientos de soldados muertos en combate a sus respectivas naciones.

La legitimidad de una misión de paz no se define sólo por su mandato legal: se construye en el terreno, midiendo distancias, conteniendo incidentes y sosteniendo la neutralidad frente a la desconfianza.





Los riesgos no venían solo del terreno minado o la tensión militar. El entorno físico era implacable. En Dehloran, los pozos petroleros destruidos por los bombardeos ardían en silencio desde hacía meses, proyectando columnas de humo negro que distorsionaban la visibilidad y cubrían los uniformes de una capa grasienta. Para combatir la deshidratación debíamos tomar litros de una preparación de sales suministrada por la ONU. Las enfermedades también acechaban: de las doce vacunas obligatorias cometí el error de no darme la de la rabia. A los pocos días, a un oficial australiano de nuestro team site, mientras observaba con sus binoculares, le saltó un zorro infectado y lo mordió por la espalda. Salvó su vida gracias a estar vacunado y a una evacuación de urgencia en helicóptero hacia Teherán.

También conocí la faz más opaca de la burocracia estatal. Durante un día de descanso, a un compañero argentino de apellido Martín se le cruzó la camioneta en una ruta helada; el choque contra el guardrail fue devastador y la estructura metálica atravesó el habitáculo, amputándole una pierna a otro oficial. Tras el alta médica, al intentar abordar el vuelo de regreso a la Argentina, las autoridades de migración le confiscaron el pasaporte bajo un eufemismo tan cortés como perverso: «Usted es un invitado de honor de la República Islámica y no puede salir del país». Requirió semanas de intensas gestiones diplomáticas de la ONU destrabar ese secuestro administrativo.

Aquella vivencia, que en su momento pareció un exceso burocrático puntual, revelaba la matriz de un Estado caracterizado por la opacidad institucional y el uso arbitrario de sus normas, una realidad con la que la propia sociedad civil iraní debe lidiar cotidianamente.

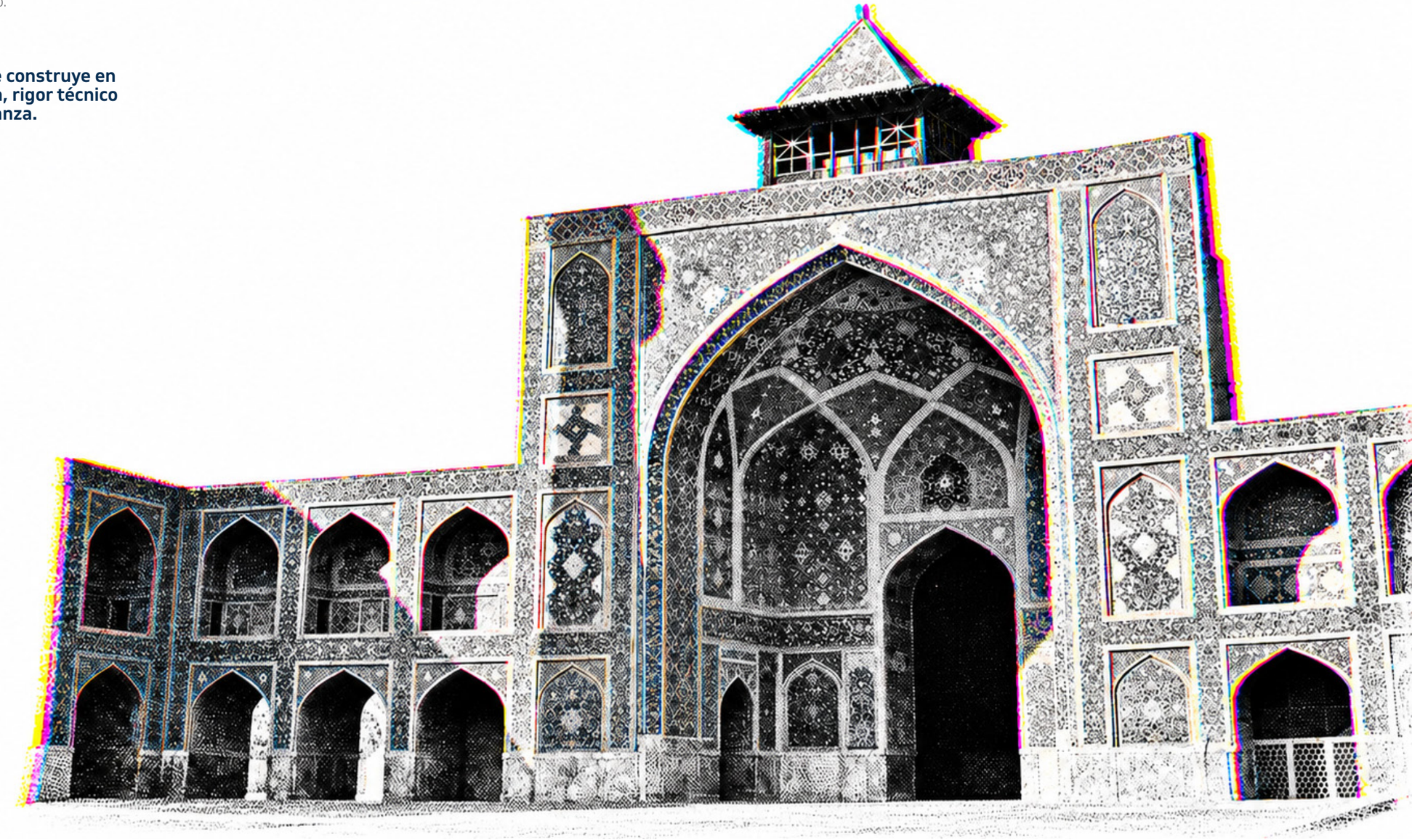
El desenlace de la misión llegó por un giro en la geopolítica regional. En agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Ante la perspectiva de enfrentar a la coalición internacional, el régimen iraquí necesitó despejar de inmediato su frontera oriental, aceptando restablecer los límites internacionales previos y completar la repatriación de prisioneros. Una vez verificado el repliegue y la consolidación de la frontera, la UNIIMOG concluyó formalmente su mandato en febrero de 1991.

En una misión de paz, el peligro no termina en la línea de contacto: también aparece en el clima, la enfermedad, los accidentes y la arbitrariedad del Estado.

Para los oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas, la participación en UNIIMOG nos permitió medir en carne propia la calidad de nuestra formación frente a exigencias internacionales estrictas. Haber sido testigo de ese proceso desde la delgada franja de tierra que separaba a dos ejércitos me dejó una lección perdurable: la paz en el ámbito internacional suele reducirse a un margen de contención estrecho, construido metro a metro en el terreno por la presencia serena, técnica y profesional de quienes asumimos el compromiso de verificar que las armas permanezcan en silencio.

La paz internacional también se construye en el terreno: con presencia serena, rigor técnico y metros ganados a la desconfianza.

F\



POZOS PETROLEROS
KUWAIT

1991, Guerra del Golfo.
En su retirada, las fuerzas iraquíes incendiaron unos 700 pozos, causando un desastre ecológico sin precedentes. El fuego contaminó el aire, cubrió la región de hollín y tomó meses en ser extinto.



**Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.*

RUANDA FUE NACER COMO PERSONA.
DOS AÑOS EN EL CONTEXTO POST GENOCIDIO EN MUHORORO

MESA EDITORIAL **FORTÍN**

En la segunda mitad de 1994, con la Argentina todavía conmocionada por el atentado a la AMIA, la enfermera Norma viajó en misión humanitaria hacia el epicentro de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente: el genocidio de Ruanda. Esta es la historia de una profesional que enfrentó el colapso absoluto de un país sin más armas que la ética y su obstinación por resguardar la vida.

Eran las dos de la mañana cuando una ráfaga de culatazos sacudió la puerta del hospital. No era un pedido de auxilio: era una orden. Un militar de alto rango se desangraba tras un enfrentamiento en las colinas y sus hombres exigían atención inmediata. Frente a la amenaza, Norma Sarrode –una enfermera argentina de 37 años– dio un paso al frente junto a dos médicos que la acompañaban. La operación se hizo bajo la mira constante de las ametralladoras. Durante siete horas, mientras el cirujano trabajaba sobre la cavidad abdominal, Norma reguló la anestesia con ketamina a puro cálculo, guiándose solo por las pupilas, el pulso y la respiración del paciente.

En medio del procedimiento, uno de los soldados lanzó una advertencia: “Si él se muere, ustedes mueren”.

Cuando finalmente extrajeron los fragmentos de plomo incrustados en el cuerpo del oficial, los combatientes exigieron verlos y llevárselos. Norma los ocultó. Sabía que identificar el calibre y las características de los proyectiles podía revelar el origen del disparo, comprometer posiciones y desencadenar nuevas represalias.

El paciente sobrevivió. Y con él, esa noche, el equipo médico también vivió para encarar una nueva guardia.



No estábamos listos para esa catástrofe

Son las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994. Norma acaba de salir de asistir una cesárea en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Todavía tiene el ambo puesto cuando entra a la sala de descanso y encuentra a sus compañeros apretados frente al televisor.

En la pantalla se ven los restos de la sede de la AMIA en la calle Pasteur, reducida a escombros tras la explosión de un coche bomba. Una nube pesada de polvo gris tapona el barrio de Once, las sirenas suenan fuera de control y los vecinos remueven piedras a mano limpia buscando sobrevivientes. El reporte confirma la cifra que paraliza al país: 85 muertos y más de 300 heridos en pleno centro porteño. Nadie entiende nada.

Para las enfermeras y médicos del hospital, la transmisión en vivo expone algo más que la tragedia: revela a un sistema de salud completamente desbordado, obligado a tomar decisiones urgentes con información fragmentaria, recursos insuficientes y escaso margen de respuesta, mientras intenta asistir a las víctimas sin certezas.

—Estaba todo mal hecho. No estábamos preparados para ese tipo de catástrofes —recuerda Norma.

Durante las semanas siguientes, el equipo del Materno Infantil organiza ateneos y se mete en un entrenamiento intensivo: emergentología de calle, intubación rápida, manejo de trauma grave. Practican entre guardias largas, convencidos de que el horror ya no es una noticia lejana en los telediarios del mundo, sino una fractura en el propio suelo.

Pocos meses después, Cecilia González, médica pediatra del hospital, se cruza con Norma en un pasillo. Cecilia estaba en contacto con la ONG Médicos en Catástrofe Argentina (MEC), una organización de profesionales de la salud preparada para desplegar en emergencias internacionales.

—Están buscando gente para ir a Ruanda ¿Te venís conmigo? —le propone Cecilia. Aunque Cecilia finalmente terminaría siendo asignada a otro destino, la semilla ya estaba plantada. —¿A dónde? —preguntó Norma.

El atentado a la AMIA expuso la falta de preparación sanitaria ante una catástrofe. Para Norma, aquella conmoción abrió un camino de aprendizaje que pronto la llevaría hacia una crisis humanitaria en Ruanda.

Londres, Nairobi y el desembarco en Kigali

Conforman el grupo completo seis personas: Marisa como médica, Javier y Norma en enfermería, Nicolás y Hugo en la logística y coordinación, y Mercedes en la secretaría. Salen de Buenos Aires el 6 de marzo de 1995. El vuelo despega de Ezeiza. Durante la escala en Londres, a bordo de un Boeing 747, la alarma de incendio en uno de los motores enciende la alerta. Lo que sigue es un despliegue inmediato de bomberos sobre la pista rodeando el avión.

"Mala señal", piensa Norma.

Pasan una semana varados en un hotel de Londres a la espera de un itinerario de reemplazo hacia Kenia, donde deben aguardar la orden de cruzar a Ruanda. Finalmente llega el día.

Nairobi es, al principio, un paréntesis. Norma recuerda esos días con liviandad. Junto a Mercedes salía a caminar por las avenidas con las remeras identificatorias de la ONG, una cruz celeste y blanca y la insignia de Médicos en Catástrofe Argentina. En una de esas caminatas escuchan hablar en español. Es una pareja de médicos argentinos vinculados a una iglesia bautista que acaba de salir de Ruanda. Se reconocen por las insignias, se abrazan en la vereda como si se conocieran de toda la vida y aceptan la invitación a continuar la charla en el hotel donde se alojan. Ahí, sobre la cama, uno de ellos saca una caja con fotografías tomadas a escondidas en las colinas. Las imágenes cortan el aire: familias masacradas en sus casas, cuerpos mutilados a machetazos y la fotografía de una bebé asesinada junto a su madre mientras amamantaba.

El impacto provoca en Norma un malestar físico inmediato. Siente que la dimensión de la violencia la supera y manifiesta su intención de regresar a Buenos Aires:

—No voy a aguantar.

Su compañera Mercedes se le acerca y le ruega:

—Por favor, no me dejes sola.

El paréntesis se cierra de golpe: llega la orden de embarque hacia Kigali.

Suben a un viejo bimotor con asientos de chapa junto a contingentes médicos de Francia, Rusia e Inglaterra. Cruzan Tanzania y el espejo de agua del lago Victoria. En la fase de aproximación a Kigali, el avión es recibido con ráfagas de una batería antiaérea desde tierra. El piloto maniobra entre las explosiones y logra tocar la pista de milagro.

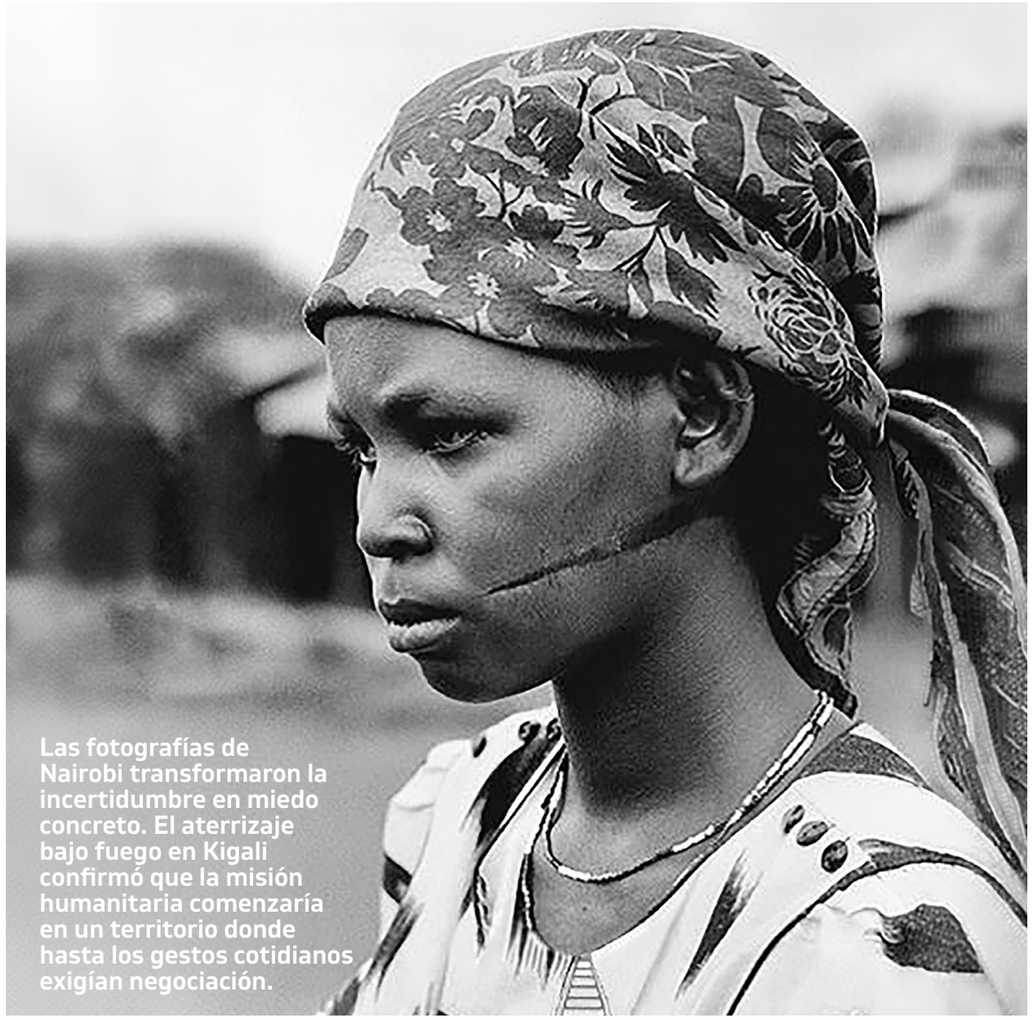
En la pista, treinta militares armados rodean la nave y comienzan a inspeccionar el equipaje. Los soldados abren un bolso, encuentran paquetes de yerba mate y los acusan de traficar estupefacientes. La situación se pone tensa, pero el malentendido se resuelve a través de un gesto que podría definir como diplomacia de trinchera: Naciones Unidas les asigna a las organizaciones una suma importante para "expensas extraordinarias", un eufemismo oficial para pagar peajes y destrabar retenes.

El clima hostil cede cuando el oficial al mando lee la procedencia de los pasaportes:

—¡Argentina! ¡Diego Maradona!

Ahí mismo, en medio de la tensión del aeropuerto, los argentinos preparan el mate y le convidan al oficial mientras guarda el soborno en el bolsillo de su uniforme:

—Amargo y bien caliente, como corresponde. Fue la primera incursión gaucha.



Las fotografías de Nairobi transformaron la incertidumbre en miedo concreto. El aterrizaje bajo fuego en Kigali confirmó que la misión humanitaria comenzaría en un territorio donde hasta los gestos cotidianos exigían negociación.

Los pies en la tierra

Norma llega a un país atravesado por uno de los exterminios más atroces del siglo XX. En abril de 1994, tras el derribo del avión del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, el gobierno extremista hutu y las milicias Interahamwe (definidas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda como organización paramilitar hutu formada en 1991 en el seno del ala juvenil del partido gobernante) ejecutaron a más de 800.000 tutsis y hutus moderados en apenas cien días, utilizando machetes, fusiles y garrotes. Las armas distribuidas entre la población fueron importadas masivamente desde Asia por empresarios locales, potencias extranjeras y proveedores de África y Medio Oriente, entre las cuales se señala principalmente a Francia, Egipto y Sudáfrica, según el informe elaborado por Human Rights Watch. La infraestructura sanitaria quedó absolutamente destruida y la mayoría de los médicos locales murieron o escaparon a países limítrofes.

Pero cuando Norma llegó, a mediados de 1995, el genocidio había terminado, aunque no así la violencia. Ese año no fue un período de reconstrucción pacífica. En abril de 1995, el ejército ruandés cerró por la fuerza el campamento de desplazados de Kibeho, ubicado en el sur del país, y abrió fuego contra la población civil. De acuerdo con los registros históricos del Memorial Australiano de la Guerra, se estima que unas 4.000 personas —en su mayoría mujeres y niños— murieron en esa masacre. La Cruz Roja Internacional, que estaba presente, describió disparos de rifles automáticos y explosiones de granadas que dejaron cientos de muertos y heridos.

La violencia no se limitó a Kibeho. Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas de abril de 1995 señaló que más de 200.000 desplazados internos seguían atrapados en campamentos, sin poder regresar a sus hogares por miedo a represalias y por la intimidación de extremistas que operaban dentro de los propios campamentos. De acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, más de 50.000 personas se encontraban detenidas sin cargos ni juicio en cárceles hacinadas, donde se registraban unas 200 muertes mensuales debido a las condiciones inhumanas. A esto se sumaban los ataques contra quienes regresaban del exilio: represalias, asesinatos selectivos y una impunidad que se extendía por todo el país.

En medio de ese contexto, Norma llega a su primer destino: Mbuye, un poblado de 45.000 habitantes incrustado a 1.500 metros de altura. Allí, el 14 de abril de 1994, las milicias habían incendiado las casas y masacrado a la población. Tras tres meses de inducción bajo las órdenes del médico Abel Pasqualini —entonces presidente de Médicos en Catástrofe— y luego de demostrar su entereza en la extrema urgencia, fue trasladada a Muhororo, una localidad ubicada dentro de la comuna de Kibilira (en la prefectura de Gisenyi). Allí, la parroquia y el hospital funcionaron como centros de ejecución masiva.

Norma cierra los ojos y recuerda las casas de adobe y ladrillo crudo con techos de chapa oxidada. La memoria de Muhororo conserva la imagen de los caminos de tierra roja y los bananares, los chicos descalzos y las mujeres con fardos de mandioca en la cabeza, esquivando retenes atendidos por hombres y niños armados. Tropas del Frente Patriótico Ruandés y bandas de saqueadores recorren las calles amontonados en la caja de sus camionetas, utilizadas como vehículos de combate. Visten pantalón de fajina, remeras desteñidas y ojotas, siempre con el fusil al hombro. La falta de insignias o distintivos hace imposible saber quién es quién.

En el terreno, el gobierno civil estaba delegado en el Burgomaestre, una figura municipal heredada de la colonización belga, sin presupuesto, sin fuerza policial y sin control efectivo del territorio. El panorama es volátil. Del otro lado de la frontera con Zaire, la actual República Democrática del Congo, se ocultan las milicias Interahamwe, refugiadas tras la derrota en el genocidio. Esos campamentos mutaron rápidamente en bases armadas desde donde lanzaban ataques nocturnos sobre suelo ruandés, aprovechando la porosidad de la frontera y el vacío institucional del vecino país.

Del otro lado se desplegaba el Ejército Patriótico Ruandés, la fuerza de mayoría tutsi liderada por Paul Kagame que acababa de tomar el poder tras derrotar al régimen genocida. A pesar de su presencia diurna, la fuerza del gobierno era incapaz de garantizar la seguridad nocturna: la imposibilidad legal y estratégica de cruzar la frontera zaireña sin desatar un conflicto internacional les dejaba el camino libre a los atacantes. En ese vacío de poder, Muhororo mutaba según la hora: de día, la disciplina del ejército victorioso; de noche, el pánico a las incursiones que descienden de los cerros.

En este escenario de conflicto y fragmentación, la acción humanitaria solo podía sostenerse mediante la aplicación estricta del principio de neutralidad. De acuerdo con la Resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas, los profesionales de la salud debían abstenerse de tomar posición en las hostilidades. Ese mandato no es una postura de pasividad ética, sino una garantía operativa fundamental: asegura la confianza de todas las partes en conflicto, condición indispensable para acceder al territorio, resguardar a las poblaciones vulnerables y prestar asistencia médica basada de forma exclusiva en la necesidad humana, con independencia de la filiación u origen de los asistidos.



Interahamwe - por Scott Chacon

Norma llega a un país atravesado por uno de los exterminios más atroces del siglo XX. En abril de 1994, tras el derribo del avión del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, el gobierno extremista hutu y las milicias Interahamwe (definidas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda como organización paramilitar hutu formada en 1991 en el seno del ala juvenil del partido gobernante) ejecutaron a más de 800.000 tutsis y hutus moderados en apenas cien días, utilizando machetes, fusiles y garrotes. Las armadas distribuidas entre la población fueron importadas masivamente desde Asia por empresarios locales, potencias extranjeras y proveedores de África y Medio Oriente, entre las cuales se señala principalmente a Francia, Egipto y Sudáfrica, según el informe elaborado por Human Rights Watch. La infraestructura sanitaria quedó absolutamente destruida y la mayoría de los médicos locales murieron o escaparon a países limítrofes.

Pero cuando Norma llegó, a mediados de 1995, el genocidio había terminado, aunque no así la violencia. Ese año no fue un período de reconstrucción pacífica. En abril de 1995, el ejército ruandés cerró por la fuerza el campamento de desplazados de Kibeho, ubicado en el sur del país, y abrió fuego contra la población civil. De acuerdo con los registros históricos del Memorial Australiano de la Guerra, se estima que unas 4.000 personas —en su mayoría mujeres y niños— murieron en esa masacre. La Cruz Roja Internacional, que estaba presente, describió disparos de rifles automáticos y explosiones de granadas que dejaron cientos de muertos y heridos.

La violencia no se limitó a Kibeho. Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas de abril de 1995 señaló que más de 200.000 desplazados internos seguían atrapados en campamentos, sin poder regresar a sus hogares por miedo a represalias y por la intimidación de extremistas que operaban dentro de los propios campamentos. De acuerdo con los informes de Amnistía Internacional, más de 50.000 personas se encontraban detenidas sin cargos ni juicio en cárceles hacinadas, donde se registraban unas 200 muertes mensuales debido a las condiciones inhumanas. A esto se sumaban los ataques contra quienes regresaban del exilio: represalias, asesinatos selectivos y una impunidad que se extendía por todo el país.

En medio de ese contexto, Norma llega a su primer destino: Mbuye, un poblado de 45.000 habitantes incrustado a 1.500 metros de altura. Allí, el 14 de abril de 1994, las milicias habían incendiado las casas y masacrado a la población. Tras tres meses de inducción bajo las órdenes del médico Abel Pasqualini —entonces presidente de Médicos en Catástrofe— y luego de demostrar su entereza en la extrema urgencia, fue trasladada a Muhororo. una localidad ubicada dentro de la comuna de Kibilira (en la prefectura de Gisenyi). Allí, la parroquia y el hospital funcionaron como centros de ejecución masiva.





Norma se sorprende al descubrir que aquellos nombres no eran apodos improvisados, sino los nombres reales con los que sus padres los inscribieron: un testimonio insólito de la huella argentina en la región. Las hazañas del Mundial de 1978 colocaron al país en el mapa de los rincones más distantes del planeta, al punto de inspirar a familias ruandesas a bautizar a sus hijos en homenaje a Mario Alberto Kempes u Osvaldo Ardiles. Esa admiración por el fútbol despierta una cercanía inmediata en las calles. A la diplomacia del deporte se suma un respeto insospechado: la memoria de la Guerra de Malvinas, percibida por diversos pueblos africanos bajo una matriz anticolonial y de soberanía.

La gestión hospitalaria comienza con la separación de los pabellones por nivel de contagio y la instalación de piletas de chapa para el lavado de manos. Norma inicia la limpieza integral del recinto, acondiciona las camas con sábanas enviadas por la logística belga de la ONU e instala piletas de agua para la higiene de pies y manos. Renueva el quirófano y la sala de partos en donde asistió al nacimiento de más de 200 niños durante su tiempo en África.

- A veces se atendían partos simultáneos. Las mujeres llegaban sobre la hora y parían en el piso. Tenía que hacer malabares para evitar que los recién nacidos cayeran al suelo, corriendo de acá para allá. Parecía la Julio Bocca de los partos.

Norma no duerme dentro del predio sanitario, sino en una casa de ladrillos alquilada por las Naciones Unidas a 200 metros del acceso principal. Todos los días recorre a pie esa distancia para empezar el turno. Cerca de allí, apostado en una colina, operaba un reducido grupo de observadores militares uruguayos (MILOBs) integrados en la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR). Tras el estallido de las masacres en abril de 1994 y la posterior decisión del Consejo de Seguridad de reducir drásticamente la fuerza internacional mediante la Resolución 912, el contingente uruguayo permanece en el terreno bajo el restrictivo Capítulo VI de la Carta de la ONU. Este marco legal limita el uso de la fuerza a la estricta legítima defensa y les impide a los Cascos Azules intervenir para detener los combates o proteger activamente a los civiles. Su labor se reduce a tareas de observación, enlace y presencia testimonial.

Como no pueden ofrecerle custodia en el terreno, establecen un código de contacto diario. A las siete de la mañana, Norma sale al patio y cuelga una camiseta de la selección argentina en el alambre de la entrada. Desde la cima, los soldados uruguayos observan con binoculares y responden con un toque corto de la bocina de un camión militar como confirmación de que está viva.

Desplegado en la UNAMIR está, además, el Teniente Coronel (VGM) Tomás Fox, un oficial del Ejército Argentino. Norma entabla con él una relación de amistad. Suelen comer juntos y encontrarse para ir a misa. Hablar en su propio idioma y compartir la mesa es, para ambos, una forma de mantener la cordura.

A las seis comienza el toque de queda. Tras el doble cerrojo, Norma escucha las motos de las milicias y el golpe metálico de los fusiles. Su única compañía es Tigre, un perro que se le pegó desde el primer día y al que recordará como su ángel guardián: echado a sus pies, vela su sueño y le devuelve calma en las noches más oscuras.

"Cuando escuchaba disparos sabía que la mañana siguiente el hospital iba a ser caótico", recuerda.

Cada quince días, en Kigali, las ONG y los Cascos Azules se reúnen para compartir información estratégica, aportar pistas sobre la posición de tropas irregulares y actualizar los mapas de riesgo. Cuando la tensión aumenta en las rutas, las autoridades ordenan el repliegue temporal del personal de la misión. Una tarde, al ser informado de un riesgo inminente de aislamiento en la base, Pasqualini se comunica por radio:

- No quiero que te quedes allá, está todo muy violento. Agarrá al driver y venite para Kigali.





Falta una hora para el toque de queda de las siete. Recorrer más de cien kilómetros significa quedar a merced de la noche. Norma se lo advierte, pero Pasqualini insiste, tajante. Sube a la camioneta con el chofer y carga insumos de mayor valor para negociar el paso: gelafundín, sueros, comprimidos de Fansidar, cloroquina, penicilina, cajas de cerveza y cartones de Marlboro. Viajan por un camino destruido, contra el reloj. A mitad del trayecto, en el primer puesto de control, treinta hombres armados rodean el vehículo. Imposible saber si pertenecen al ejército regular o a las milicias Interahamwe. Daba igual. En 1995, el ejército que detuvo el genocidio también masacra civiles. En Kibeho, en abril de ese año, sus soldados dispararon contra una multitud de desplazados y ejecutaron pacientes en sus camas de hospital. Las milicias, por su parte, siguen atacando desde las fronteras. La única duda de Norma no es quién le apunta con el fusil, sino si lo que lleva en la camioneta alcanzará para seguir con vida.

Norma ve que el chofer temblaba de miedo. Los hombres la obligan a descender del vehículo.

"Dios mío, dame la fuerza para matarme. Si me hacen algo, yo me mato, no voy a sobrevivir a una agresión de estas personas, no me tocarán viva", piensa.

No es una idea extraña. Durante el genocidio de 1994, entre 250.000 y 500.000 mujeres sufrieron agresiones sexuales, utilizadas por las milicias como una estrategia sistemática de tortura, intimidación y destrucción del tejido social. Norma lo sabe. El conflicto integró además el uso deliberado del VIH como arma de guerra mediante la movilización de hombres seropositivos con el fin de infectar a las víctimas. Esta práctica dejó un impacto duradero en la posguerra, reflejado en una prevalencia del virus del 15 % en las viudas (cinco veces superior a la de la población casada) y en una tasa general de contagio en mujeres que duplicaba la de los varones, según los datos relevados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ruanda.

Ante la amenaza directa del oficial a cargo, Norma va entregando las cajas de fármacos, la cerveza y los cigarrillos. Norma le pide tímidamente que le firmara una planilla de control de las Naciones Unidas para justificar el faltante. El militar firma sin problema el recibo y autoriza el paso.

Cuando llegan a Kigali, va a buscar a Pasqualini.

—La próxima vez, ni me llames. Hoy zafé, la próxima, no sé.

La experiencia en el primer puesto de control transforma la dinámica de los desplazamientos. Con la multiplicación de los retenes en las rutas, la negociación táctica reemplaza al temor. El paisaje vial está marcado por la presencia de niños soldados (los llamados kadogos), menores de tan solo ocho años armados con ametralladoras que apenas pueden sostener y que exigen pagos para permitir el tránsito. En ese esquema de extorsión, las divisas pierden valor frente a los insumos estratégicos: una caja de Fansidar, analgésicos o antibióticos, que se convierten en el salvoconducto indispensable para franquear los controles de las milicias.

Ese valor de cambio que adquiere la medicación obedece al desabastecimiento absoluto que sufre la población civil, despojada de cualquier red de atención básica. Con las estructuras sanitarias destruidas, los fármacos se convierten en el recurso más escaso de la inmediata posguerra.

En el hospital de Muhororo, esa misma desesperación termina filtrándose en la gestión diaria. Parte del personal local (enfermeros y asistentes formados en su mayoría bajo convenios con Rusia) comienza a retirar remedios de los cargamentos trimestrales procedentes de Bélgica. El objetivo no es el lucro, sino abastecer a sus familias y armar una "farmacita" clandestina en sus barrios para sostener a comunidades que no figuran en los mapas del auxilio internacional.

Al constatar el faltante en las planillas, Norma entiende que no hay margen para aplicar sanciones disciplinarias en un entorno destruido y sin autoridad formal. Su prioridad es evitar que la fuga de insumos derive en el recorte o la dilución de las dosis para los internados por cuadros graves de malaria o tuberculosis. Asume el control directo del fraccionamiento en las salas, reúne al personal local y fija las condiciones con pragmatismo:

—Esto es para el hospital, esto es para el barrio, esto es para ustedes. Entiendo que lo necesitan, pero no dejen de darle a los pacientes.

Enviados por Naciones Unidas como refuerzo, se incorporan al hospital dos médicos provenientes de Europa del Este, Igor y Constantin. La incorporación de estos profesionales ucranianos al equipo aporta una valiosa capacidad técnica, aunque también suma una dinámica particular al día a día de la misión. Si bien son profesionales de la salud altamente capacitados, su condición de antiguos soldados del Ejército Rojo marca profundamente su comportamiento: vienen de una dura experiencia de combate que los formó para responder de manera directa e ir al choque ante cualquier situación de tensión o amenaza. A estos médicos les cuesta asimilar la doctrina de neutralidad estricta que exige la labor humanitaria internacional, por lo que reaccionan con un celo operativo e instintos de protección hipervigilantes frente al entorno local. Sin embargo, más allá de estas fricciones, la convivencia diaria funciona bien y logran entablar una relación cercana y de buen trato con Norma, quien comprende que detrás de esa postura confrontativa se esconde el reflejo de su historia en el frente y el deseo de resguardar al equipo.

El hospital de Muhororo funciona en la práctica como un centro comunitario. En el predio y los patios se congregan habitualmente familias y chicos de la zona, lo que convierte al hospital en un punto de encuentro y contención diaria en medio de la devastación. El hospital es, ante todo, un lugar seguro. Esa noción de refugio se vuelve oficial en un momento de tensión, cuando los rumores sobre el avance de grupos armados vuelven a alterar la calma de la comuna. Frente a esa posibilidad, el alcalde convoca a una asamblea de emergencia a la que acuden las autoridades locales, la población y los observadores internacionales que operan en la zona. Norma asiste a la reunión acompañada por Vaca y Rafael, sus colaboradores locales, para medir la temperatura del ambiente y entender el alcance de la amenaza.





Frente a la comunidad, el alcalde afirma que solo existen dos territorios estrictamente neutros e inviolables en toda la comuna: el propio hospital y la casa de los musungus, la vivienda donde residen Norma y el equipo. De este modo, la casa de la enfermera argentina y el predio sanitario quedan ratificados públicamente ante todo el pueblo como los dos últimos bastiones de amparo y supervivencia para la población civil.

El genocidio de 1994 provocó el colapso del sistema de inmunización de Ruanda, lo que generó un desplome de la cobertura de vacunación a menos del 30% en 1995, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y un incremento en la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación (VPD); ese año se registraron unos 28 000 casos de sarampión, cuando el programa de rutina ofrecía seis vacunas. El rumor de brotes epidémicos, sumado al pánico atávico a las matanzas, motivó una demanda de protección. En ese contexto, se despliega una jornada de vacunación masiva sin precedentes en la comuna. Entre las once de la mañana y las tres de la tarde, Norma inmuniza a más de 1.500 personas. La población se agolpa a las puertas del predio en un flujo ininterrumpido, movida por el miedo a la muerte y al sufrimiento. Muchos vuelven a ponerse en la fila para vacunarse una y otra vez. El alcalde le solicita a Norma extender la campaña de vacunación a toda la población carcelaria. El penal amenaza con convertirse en un foco epidémico crítico debido al hacinamiento. La situación judicial de los prisioneros refleja la precariedad de un país devastado: sin un sistema judicial formal, la custodia y el juzgamiento dependen de la junta militar y del propio alcalde, lo que mantiene tras las rejas tanto a hombres acusados de participar en las matanzas del genocidio como a detenidos por delitos menores de subsistencia. Las cifras que Médicos Sin Fronteras documentó ese mismo año son escalofriantes: en todo el país, más de 55.000 personas estaban hacinadas en prisiones diseñadas para albergar a 12.000 reclusos. En Gitarama, una cárcel para 400 reclusos albergaba a 7.000, y cada día morían cuatro personas por desnutrición y enfermedades.

Trasladados al hospital en fila, los 200 prisioneros llegan maltratados y amarrados de pies y manos con pesadas cadenas y grilletes. Norma los vacuna uno por uno. Lejos de mostrar agresividad, los hombres –imposibilitados de mover los brazos por el peso del hierro– inclinan la cabeza y esquivan el contacto visual, abrumados por la vergüenza.

Luego de ocho meses de trabajo ininterrumpido en Muhororo, Norma da por concluida una tarea de reconstrucción profunda. Deja un hospital funcionando: la farmacia reordenada caja por caja, los protocolos de higiene y aislamiento puestos en marcha, la atención primaria restablecida y el personal local capacitado para sostener la dinámica diaria del centro sanitario. Con el hospital funcionando de manera autónoma y tras cumplir su misión en el tiempo indicado, la organización la reasigna junto a su equipo de colaboradores al hospital de Rwinkwavu, una instalación dotada de planta de oxígeno y salas quirúrgicas equipadas por la cooperación belga.

Rwinkwavu: la peste de meningitis, la toma del hospital y la evacuación

Durante el viaje a Rwinkwavu se podía ver el paisaje desolado de la provincia Oriental por la ventanilla de la camioneta. A lo largo de los caminos de tierra, los cadáveres yacían a los costados de la ruta y los pobladores caían atrapados por una ola fulminante de meningitis. A la distancia, entre las colinas de casas dispersas, el humo marca los puntos donde las familias creman los restos de sus seres queridos, intentando evitar la propagación de la peste.

—Veías una columna de humo y sabías que algo terrible estaba pasando en esa familia. Y pensaba, "Dios mío, si existe el infierno, este es el infierno".

De acuerdo con los boletines sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1995 y 1996, la región de los Grandes Lagos enfrentó la mayor epidemia de meningitis bacteriana del siglo XX en África subsahariana, un brote continental que dejó más de 250.000 contagios y 25.000 muertes. La cobertura de vacunación (que había caído por debajo del 30 %), el hacinamiento y el polvo de la época seca aceleraron la propagación de la Neisseria meningitidis.

A la guardia del centro sanitario llegan a diario niños ardiendo en fiebre y sacudidos por convulsiones, muchos de ellos con pequeñas incisiones sangrantes en la frente, la nuca, el vientre y las rodillas. Eso llama poderosamente la atención de Norma. Al preguntar de qué se tratan esas lesiones, los trabajadores locales le explican que esas heridas provienen del tratamiento con el que un curandero o brujo intenta curar a los enfermos. Abren la piel para permitir que salgan los malos espíritus.

Sin laboratorios para procesar cultivos, la urgencia exige aplicar un procedimiento de diagnóstico directo. Con la aprobación de Abel Pasqualini, Norma realiza punciones lumbares a los enfermos que ingresan con fiebres altas, convulsiones y rigidez de nuca. La extracción de un líquido cefalorraquídeo purulento, espeso y turbio —con el aspecto inconfundible del agua de arroz quemado— confirma el cuadro en el acto. Sin acceso a unidades de terapia intensiva, aplican un tratamiento de shock: la administración de 24 millones de unidades de penicilina combinadas con cloroquina por vía endotraqueal e intramedular, junto a un esquema de rehidratación intensiva. El protocolo reduce drásticamente la letalidad y Pasqualini sistematiza los datos del procedimiento para su elevación a las Naciones Unidas.

A diferencia del centro de Muhororo, el hospital de Rwinkwavu alberga una infraestructura estratégica: es el único de la región equipado con sistemas de oxígeno y capacidad quirúrgica, lo que lo convierte en un objetivo codiciado por las facciones armadas para la asistencia de sus heridos. Ante el masivo avance de milicias procedentes de los campos de refugiados en Zaire y el aumento de los riesgos, Abel Pasqualini ordenó mantener todo dispuesto para una evacuación de emergencia. Para garantizar una salida veloz en cuanto la situación se vuelva insostenible, envía dos camionetas como refuerzo. La orden es permanecer atentos para cargar en minutos los valiosos equipos de radiocomunicación, paneles solares y generadores, evitando a toda costa que un repliegue intempestivo los obligue a abandonarlos o a dejarlos en manos de los grupos armados.



Adam Jones

El equipo reside en una casona colonial. El patio de esa construcción es una fosa común que alberga más de 500 cadáveres del genocidio. Durante los seis meses de lluvias continuas, el agua remueve la tierra roja y descubre los restos, lo que obliga a solicitar topadoras a los Cascos Azules de la ONU para volver a taparlos. Norma se encierra en su habitación. Reforzó la puerta y tiene siete cerrojos. Por las noches, la atmósfera se enrarece: patrullas armadas rodean el predio e interrogan a los empleados ruandeses mientras los golpean para averiguar si la enfermera se encuentra sola. Los interrogan sobre los movimientos de la casa y las actividades de los musungus. En ocasiones, los militares pasan toda la noche rodeando la propiedad con sus motos en una abierta actitud intimidatoria. Al circular por los caminos, las tropas adoptan conductas provocativas con la población local, y Norma debe contener la reacción impulsiva de Igor y Constantín, los médicos ucranianos, para evitar un desenlace trágico. Una mañana, al arribar al centro sanitario para iniciar la jornada diaria, Norma encuentra el predio ocupado por un contingente armado que desmanteló los pabellones en un rápido operativo de requisa. Para equipar campamentos en los alrededores, los soldados retiraron los colchones, arrojando a los enfermos convalecientes y a los pacientes recién operados al suelo.

Norma camina recta hacia el oficial al mando. Abriéndose paso entre los fusiles y la tropa, confronta al comandante con la firmeza de su autoridad médica:

—¿Por qué no se me informó que iban a tomar el hospital? Me tiraron a los pacientes al piso. ¿No ve que son personas? Me los vuelven a poner en las camas inmediatamente. Si sus propios soldados caen heridos, bienvenidos sean y los vamos a atender, pero este lugar es para los enfermos. Acá faltan colchones y tienen que aparecer ahora mismo.

El comandante ordena identificar a los tres soldados responsables del despojo. Frente a todo el personal médico y las tropas formadas, el oficial dispone que los tres hombres sean azotados en el lugar para restaurar la disciplina de la tropa. Segundos después, los combatientes comienzan a acarrear los colchones de vuelta a los pabellones y a reubicar a los enfermos, mientras el comandante se presenta ante la enfermera para pedirle disculpas formales.

Esa misma tarde, cuando Norma regresa al hospital para asistir un parto de urgencia, se encuentra con un escenario transformado. El contingente militar permanece alineado a lo largo del pasillo central en perfecto orden de formación. A su paso, los mismos combatientes cuadran la postura y le rinden el saludo militar con la cabeza en alto. Norma avanza por el pasillo impresionada por esas señales de respeto, pero en ese mismo instante comprende la situación: la corrieron del hospital. El centro ya está bajo el control definitivo de las tropas. Al terminar con el parto, regresa a la casona e inicia de inmediato los preparativos para la evacuación.



La retirada se ejecuta bajo un protocolo de estricto disimulo para evitar que las tropas confisquen el equipamiento o retengan al personal. Durante la noche previa, en el interior de la casona, desmantelaron equipos y cargaron todo en las camionetas. Para que los pertrechos no caigan en manos del Ejército, regalan los muebles, la heladera y las herramientas a los empleados ruandeses. Antes de subir a los vehículos rompen sus remeras con las siglas de la organización y las dejan colgadas en la cerca de entrada.

A las diez de la mañana del día siguiente, las camionetas encienden sus motores. Norma instruye a los ucranianos sobre cómo actuar en los controles de carretera:

—Tranquilos. Los quiero todo el viaje con una sonrisa de oreja a oreja. Si preguntan, decimos que vamos a la capital a buscar insumos y que volvemos mañana.

Mientras dejaban Rwinkwavu sonaba la canción "You leave my heart". En los puestos de control reparten lo que queda: cigarrillos, alimentos y medicamentos.

Viajan los 120 kilómetros hasta Kigali. Días después, Norma vuela a España y luego a la Argentina. Llega a la casa de sus familiares en Miramar la tarde del 23 de diciembre de 1996, en vísperas de Nochebuena.

La violencia de los años siguientes se cobra la vida de varios de sus colaboradores locales: Kempes y Ardiles son asesinados e Innocent fallece al poco tiempo. Vaca permanece en Ruanda y adopta a siete niños huérfanos. Rafael emigra a Inglaterra, obtiene un doctorado en Teología y regresa a Kigali para fundar una ONG dedicada al refugio de mujeres jóvenes.

A la distancia, Norma sintetiza el sentido de esa misión con la misma precisión directa con la que operó en el terreno:

"Para mí Ruanda fue nacer como persona. A pesar de todo, fui feliz".

F\



Fotos del álbum personal de Norma

Apéndice: el desenlace del conflicto

El fin de la misión de Norma Sarrode coincidió con una reconfiguración política e internacional en la región. Tras consolidarse en el poder, el gobierno de Ruanda comenzó a restringir la presencia de las misiones extranjeras, dispuso la expulsión de decenas de organizaciones no gubernamentales y solicitó el retiro de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR), que concluyó formalmente en marzo de 1996. Sin la protección ni el respaldo logístico de la ONU, la creciente militarización de la infraestructura crítica –incluyendo las instalaciones sanitarias– y la pérdida de la tregua neutral en el terreno hicieron inviable la permanencia de los equipos humanitarios desplegados en el interior del país. Algunas misiones se replegaron, otras organizaciones mantuvieron operaciones activas del otro lado de la frontera.

Zaire estaba gobernado por Mobutu Sese Seko, un dictador que llevaba tres décadas en el poder y que brindaba amparo a las ex fuerzas ruandesas que operaban desde la frontera. Para neutralizar esa amenaza en su origen, el gobierno de Ruanda pactó una alianza con Laurent-Désiré Kabila, un histórico líder rebelde congoleño, armando y respaldando a sus tropas para derrocar al régimen. Esta alianza ejecutó una ofensiva conjunta que logró su objetivo en 1997: Mobutu fue depuesto y Kabila asumió la presidencia de la rebautizada República Democrática del Congo. Sin embargo, la alianza duró poco. Al año siguiente, cuando Kabila intentó romper la dependencia con sus antiguos patrocinadores y expulsar la presencia militar ruandesa de su territorio, Ruanda volvió a invadir el país vecino. Esa ruptura desató la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), un complejo conflicto regional que involucró a nueve naciones.

En julio de 2003 se instauró en Kinshasa el Gobierno de Transición de la RDC (bajo la fórmula "1+4": Joseph Kabila como presidente, acompañado por cuatro vicepresidentes representantes de los principales grupos rebeldes y la oposición). Con la retirada de todos los ejércitos extranjeros (Ruanda, Uganda, Zimbabue, Angola y Namibia) y la integración de las facciones en un gobierno provisional, la Segunda Guerra del Congo se dio por oficialmente terminada. Sin embargo, la frontera oriental del Congo continuó sumida en la inestabilidad y en una guerra de baja intensidad entre el gobierno de Kinshasa, las milicias hutus y las guerrillas respaldadas por Ruanda, una dinámica que persiste hasta el día de hoy.

En el plano interno, según los análisis de evaluación de Human Rights Watch, el Estado ruandés encaró el juzgamiento de los crímenes del genocidio a través de los tribunales comunitarios Gacaca. En términos identitarios, el Estado abolió la diferenciación entre hutus y tutsis en los documentos oficiales: eliminó esas categorías de la vida pública bajo la premisa de que todos los habitantes son, simplemente, ruandeses. Esta política fue acompañada por un orden urbano estricto y un acelerado desarrollo económico, lo que transformó a Ruanda en una de las naciones más estables de la región.

Esa transformación, no obstante, se consolidó bajo la figura de Paul Kagame mediante un modelo autocrático. La estabilidad y el crecimiento económico ruandés coexisten con la concentración del poder, la restricción de la oposición política, la censura a la prensa libre y la persecución a la disidencia, mientras las tensiones militares en la frontera con la República Democrática del Congo se mantienen hasta hoy.

F\



GOMA
ZAIRE

Julio de 1994.
Goma, Zaire (actual República Democrática del Congo). Tras el genocidio de Ruanda, cientos de miles de refugiados cruzaron la frontera y desbordaron los campamentos improvisados. El hacinamiento, la falta de agua potable y las epidemias de cólera y disentería provocaron decenas de miles de muertes, agravando la crisis humanitaria.

***Imagen generada o intervenida con IA con fines ilustrativos.**

POR DEBAJO DEL UMBRAL.
CONFLICTOS SILENCIOSOS QUE EROSIONAN POR GOTEO LA LIBERTAD DE ACCIÓN DEL ESTADO

PABLO A. **FARÍAS.** DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA (UNDEF)

Un Estado puede perder capacidad de decisión sin enfrentar una crisis abierta. Dependencias tecnológicas, presiones graduales y decisiones sectoriales pueden reducir silenciosamente sus alternativas. A partir de cinco casos internacionales, este ensayo examina cómo detectar esa erosión antes de que resulte irreversible.

Las pérdidas de capacidades nacionales no siempre se manifiestan mediante un acontecimiento disruptivo ni adquieren relevancia inmediata en la agenda pública. Pueden configurarse gradualmente a partir de decisiones sectoriales aisladas que, sin una apreciación anticipatoria adecuada, reducen progresivamente las opciones estratégicas del Estado.

Mediante un análisis conceptual y comparación indicativa de casos que evidencian patrones y regularidades, el ensayo propone, desde el prisma de la Seguridad Estratégica del Estado, reconocer tempranamente esas transformaciones y preservar la libertad de acción ante escenarios emergentes o de interés nacional.



1. Lo que existe antes de ser reconocido

Hay conflictos que se reconocen por los acontecimientos que los vuelven visibles y otros que sólo pueden comprenderse reconstruyendo una trayectoria. Los primeros presentan una ruptura: una crisis, una agresión, una modificación manifiesta del statu quo.

Los segundos se forman con cambios graduales, muchas veces razonables en su ámbito: una dependencia que se incrementa, una capacidad que se degrada, un proveedor que adquiere centralidad, una función que modifica su régimen de prestación. Ninguno constituye por sí solo un conflicto manifiesto; articulados en conjunto, pueden modificar la libertad de acción del Estado.

Ese espacio intermedio entre la normalidad y la ruptura es el que aquí se llama por debajo del umbral, expresión que alude al límite entre paz y conflicto, pero también al punto en que una dinámica no adquiere significación suficiente para entrar en la agenda pública, sensibilizar al sistema político o activar una evaluación estratégica.

McCombs y Shaw (1972) mostraron que la existencia de un asunto no determina su relevancia pública; Kingdon (1984) separó las condiciones existentes de los problemas que logran ingresar en la agenda decisoria. Sin trasladarlos mecánicamente al campo estratégico, permiten preguntar qué ocurre mientras un proceso existe y todavía no se lo reconoce como problema: las instituciones interpretan sectorialmente, las dependencias se profundizan y las alternativas disminuyen.

Así entendido, el ***umbral de relevancia estratégica*** constituye el punto en que un cambio comienza a ser interpretado institucionalmente por sus posibles efectos sobre intereses, capacidades o libertad de acción.

Puede considerarse alcanzado cuando, respecto de una función o espacio crítico, se verifica una variación sostenida en la frecuencia, duración, alcance o costo de una perturbación que exige coordinación interagencial, reasignación de recursos o tratamiento político-estratégico; apreciación que requiere una línea de base, indicadores trazables y evidencia verificable, y no presupone necesariamente una intención hostil.

Los sistemas políticos reaccionan mejor ante rupturas que ante pendientes. Economía observa un mercado; infraestructura, un servicio; ciencia y tecnología, una dependencia; inteligencia, señales ambiguas; Defensa, consecuencias sobre capacidades. Cada lectura puede ser correcta sin que el Estado interprete el efecto agregado.

Esa brecha entre lecturas sectoriales y efecto agregado da lugar a la noción de **conflictos silenciosos:** no porque se carezca de información, sino porque se trata de dinámicas que, aunque observables de manera aislada, evolucionan por debajo del umbral de problematización político-estratégica. Sin una apreciación anticipatoria integrada, sus efectos convergentes sobre las capacidades, los intereses y la libertad de acción del Estado pueden permanecer inadvertidos durante períodos prolongados.





Este proceso puede producir una erosión por goteo, entendida como la reducción acumulativa de alternativas viables derivada de transformaciones que, consideradas aisladamente, no suscitan una revisión estratégica suficiente. El goteo no reside en la intensidad de cada acontecimiento, sino en la persistencia de una trayectoria que estrecha progresivamente el margen de elección. Esa trayectoria puede alcanzar un umbral de reversibilidad, a partir del cual la recuperación deja de ser viable dentro de los tiempos disponibles. En términos operativos, ese punto indica el agotamiento del margen de adaptación estratégica.

La erosión por goteo es una categoría analítica propuesta en este ensayo y funciona como hipótesis de trabajo, no como doctrina establecida. Su identificación exige reconstruir qué opción se encontraba disponible, cuándo dejó de ser practicable y mediante qué mecanismo se produjo esa pérdida, con evidencia y no por inferencia residual.

Tres autores permiten situar analíticamente esta cuestión. Keohane y Nye (1977) distinguieron la sensibilidad, que mide los costos de una perturbación dentro de un marco de políticas dado, de la vulnerabilidad, que mide los costos que persisten después de evaluar alternativas de adaptación. Strange (1988) sostuvo que el poder incluye configurar el contexto en que otros eligen, y Farrell y Newman (2019), que ciertas posiciones nodales pueden convertirse en instrumentos de presión: una red constituida para el intercambio puede adquirir luego una significación coercitiva imprevista.

La consecuencia es incómoda: la vulnerabilidad puede preceder a la amenaza. Dependencia, vulnerabilidad, riesgo, amenaza y conflicto nombran cosas distintas, y Buzan, Wæver y de Wilde (1998) advirtieron sobre el costo de securitizar lo ordinario; el propósito aquí consiste en identificar cuándo un proceso sectorial empieza a comprometer la libertad de acción, entendida como la conservación de alternativas suficientes para seleccionar, sostener y modificar una decisión propia bajo restricciones inevitables con márgenes de maniobra acordes con las exigencias de escenarios emergentes o de interés nacional.

2. La transformación del Estado y la continuidad estratégica

Las administraciones simplifican procedimientos, incorporan actores privados y digitalizan funciones. Ello no implica pérdida de autonomía: estructuras flexibles pueden ampliar opciones estratégicas. La rigidez también debilita; conservar estructuras sin utilidad confunde herencia con capital.

La distinción entre estructura y función es central. Un puerto importa por la movilidad que permite; una red de telecomunicaciones, por su conectividad; una industria, por conocimientos cuya reconstrucción puede demandar años.

La continuidad estratégica consiste en mantener o reponer funciones críticas cuando fallan las condiciones ordinarias. Puede sostenerse mediante redundancia tecnológica, proveedores alternativos o acuerdos contractuales. No exige propiedad estatal ni regulación directa, sino conocer dependencias y disponer de mecanismos para recuperar la disponibilidad o el control requerido en plazos aceptables. Estos deben evaluarse mediante pruebas, contratos, inventarios, capacidades industriales y experiencia operacional, con revisiones periódicas según cada función crítica.

La reforma de defensa australiana de los años noventa ofrece un antecedente: el Force Structure Review, el Commercial Support Program y, desde 1997, el Defence Reform Program transfirieron actividades de apoyo no centrales al sector civil, preservando como cuestión estratégica la base nacional de apoyo y el sostenimiento de las Fuerzas. La eficiencia no se mide sólo por costos, sino también por capacidad logística, movilización y recuperación ante contingencias.

Surge entonces una variable habitualmente subordinada a la eficiencia: el tiempo. De ella deriva el margen de adaptación estratégica, relación entre el plazo disponible antes de que una opción pierda utilidad y el necesario para construir, activar o recuperar otra. Una capacidad reconstruible en cinco años no sirve ante una crisis inmediata de alcance nacional o regional.

Su evaluación requiere considerar criticidad de la función, sustitutos y reservas, tiempos de activación, conocimientos técnicos, costos de reemplazo y plazo máximo admisible. Un margen decreciente puede transformar una sensibilidad en vulnerabilidad estratégica.

Así, lo óptimo en condiciones normales puede resultar inadecuado ante disrupciones improbables pero graves. La redundancia parece superflua hasta perder la única alternativa; conservar capacidades sólo por tradición tampoco es prudente. Importa saber qué no conviene perder y cuánto costaría recuperarlo.

También debe distinguirse la desregulación funcional, que modifica quién provee una función o cómo se organiza, de la transformación estratégica, referida a la arquitectura organizacional y jurídico-normativa con que el Estado diseña, supervisa y preserva capacidades nacionales. Una reforma puede invocar la primera y alterar involuntariamente la segunda.

La OCDE (2014) señala que la gobernanza estratégica de riesgos admite diversos arreglos institucionales y cooperación público-privada. Lo decisivo es preservar la capacidad estatal de evaluar, controlar y restablecer funciones esenciales, independientemente del prestador.

En este marco, la Seguridad Estratégica del Estado ofrece una perspectiva transversal para examinar la continuidad de funciones críticas y la preservación de opciones. Ambas sostienen la libertad de acción: no como autosuficiencia, sino como capacidad de decidir y actuar bajo restricciones inevitables, con márgenes adecuados ante escenarios emergentes o de interés nacional.



3. Cinco trayectorias, cinco mecanismos

La literatura sobre zona gris (Mazarr, 2015; Echevarria, 2016; Green et al., 2017; Baqués, 2017) describe estrategias que persiguen objetivos políticos de manera incremental, ambigua y asimétrica, por debajo de los umbrales que activarían una respuesta convencional; Schelling (1966) llamó salami slicing a las intrusiones graduales.

Los tres primeros casos se examinan desde este marco. Sus datos no permiten probar, por sí solos, una intención deliberada, pero sí identificar patrones capaces de producir el efecto descripto.

Para el análisis de la continuidad estratégica, la existencia de un diseño deliberado de un actor hostil no es condición necesaria para diagnosticar una reducción de alternativas o del margen de adaptación.

Sin embargo, la atribución no es secundaria: cuando la evidencia permite establecerla, determina la naturaleza y proporcionalidad de la respuesta estatal, así como el marco jurídico aplicable. Por ello, una trayectoria deliberada y una vulnerabilidad no intencional pueden generar efectos convergentes sobre la libertad de acción, aunque demandan decisiones, instrumentos y responsabilidades institucionales diferentes.

Los cinco casos son ilustrativos de mecanismos y no representativos del universo de interés. Su finalidad es analizar esos procesos e ilustrar el diagnóstico, cuya utilidad deberá contrastarse en estudios posteriores.



Taiwán: normalización gradual de la presión

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que el 9 de septiembre de 2026 detectó dieciséis aeronaves militares chinas, once de las cuales cruzaron la línea media del Estrecho; el 5 de septiembre había informado veinte, doce con cruce (MND, 2026). Las cifras no permiten inferir intenciones; su interés reside en que actividades inicialmente excepcionales pueden volverse recurrentes y normalizarse.

En ese proceso la distinción entre rutina y cambio estratégico se torna menos visible y la práctica puede redefinir los umbrales de tolerancia, mientras quien responde debe sostener atención y recursos sin transformar cada episodio en crisis.

El caso sugiere que el seguimiento de los espacios marítimos y aeroespaciales no puede limitarse a episodios aislados: la continuidad del conocimiento situacional y de los medios de vigilancia permite distinguir lo recurrente de las modificaciones progresivas del entorno operacional.

Scarborough: consumación gradual

Según el Asia Maritime Transparency Initiative, la Guardia Costera de China acumuló 516 días-buque en torno al banco en 2024, 1.099 en 2025 y 933 durante el primer semestre de 2026, una cifra cercana al total registrado durante todo el año anterior. El promedio mensual ascendió de 90 días-buque en el primer semestre de 2025 a 156 en igual período de 2026.

Cada actividad puede presentarse como una operación ordinaria de guardia costera o de carácter científico; por sí sola, ninguna alcanza el umbral de un acto de fuerza.

Articuladas en el tiempo, modifican el control práctico del espacio sin que pueda identificarse un momento en el que el statu quo haya sido abiertamente alterado: el hecho consumado no radica en un episodio, sino en una trayectoria de presencia, y los instrumentos de guardia costera preservan una ambigüedad que eleva los costos de la respuesta (Elizondo, 2019). Presencia, acceso y conocimiento del espacio no se preservan mediante declaraciones de interés: se construyen acumulativamente y exigen medios sostenidos.



Campañas híbridas: fragmentación organizacional

En marzo de 2026, el Consejo de la Unión Europea aprobó conclusiones en las que condenó campañas híbridas persistentes atribuidas a la Federación de Rusia. El 13 de julio, la Alta Representante atribuyó al Centro 16 del FSB la conducción de grupos cibernéticos que, según el Consejo, infiltraron redes gubernamentales y sabotearon infraestructura crítica en varios Estados miembros (UE, 2026).

Aquí el umbral se define también por la disputa en torno a la atribución: la dificultad para establecer responsabilidades puede impedir una respuesta política coherente. La fragmentación institucional puede reproducir, dentro del Estado, los efectos que una acción hostil procura generar desde el exterior.

El problema plantea una exigencia institucional concreta: integrar indicios procedentes de distintas áreas y distinguir con precisión entre evidencia, atribución e incertidumbre.

Minerales críticos: ¿vulnerabilidad sin adversario?

El inventario de la OCDE de 2026 informa que las restricciones a la exportación de materias primas críticas se quintuplicaron entre 2009 y 2024 y que cerca del 16 % del comercio mundial estuvo sujeto a alguna durante 2022-2024, con porcentajes mayores para cobalto (67 %), manganeso (66 %), tierras raras (45 %) y grafito natural (47 %).

No hay intención identificable ni conflicto. Hay concentración y plazos de sustitución que pueden resultar incompatibles con la continuidad de funciones críticas. Se trata de una condición de vulnerabilidad estructural que podría convertirse en recurso de coerción si un actor con capacidad de control decidiera explotarla, como describen Farrell y Newman.

La Defensa debe reconocer qué insumos y conocimientos industriales sostienen sistemas críticos y anticipar sustitutos, reservas y acuerdos antes de que una contingencia convierta la dependencia en restricción o, eventualmente, en una vulnerabilidad

Gas europeo: acumulación y reversión

Según la Comisión Europea (2025), el gas ruso representaba el 45 % de las importaciones de gas de la Unión Europea en 2021, unos 150 bcm, y descendió al 19 % en 2024 y al 13 % en 2025. La dependencia se había configurado durante décadas mediante acuerdos y decisiones comerciales, y las interrupciones del tránsito por Ucrania en 2006 y 2009 ya habían revelado su fragilidad.

La crisis de 2022 no creó la vulnerabilidad, sino que expuso una trayectoria previa. La reversión fue posible porque existían sustitutos practicables, pero exigió más gas natural licuado, ampliar terminales y reducir la demanda en torno al 17 % entre agosto de 2022 y enero de 2025. Una alternativa comercialmente disponible no equivale a una opción estratégicamente activable: depende de infraestructura, contratos, financiamiento, tiempo y decisión política.

La movilidad y el sostenimiento de bases dependen de cadenas cuya fragilidad sólo se vuelve visible bajo presión; el caso europeo muestra que el momento para actuar es antes de la crisis, no durante ella.

Los cinco casos no deben fundirse en una categoría: muestran que la reducción de alternativas puede originarse en una acción deliberada, en una dinámica institucional o en una dependencia sin adversario identificable. Para la Argentina, el Atlántico Sur, la infraestructura crítica, la dimensión aeroespacial y las cadenas logísticas deben observarse desde una pregunta común: dónde una interrupción podría reducir alternativas futuras y cuánto demandaría recuperarlas.



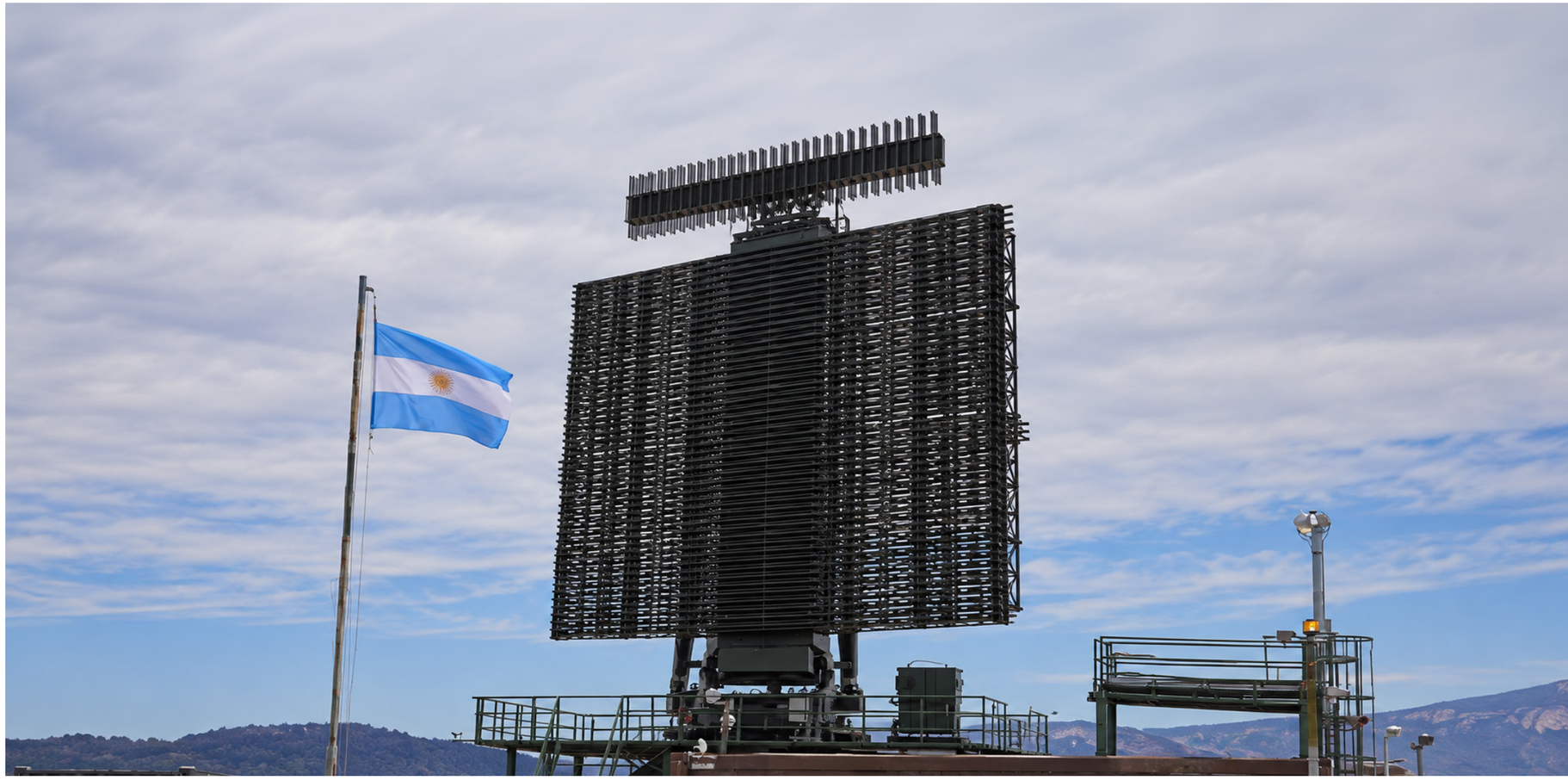
4. Defensa Nacional como ámbito articulador de la apreciación estratégica

La secuencia clásica actor, intención, capacidad y amenaza conserva vigencia, pero resulta insuficiente para reconocer procesos graduales cuyos efectos se acumulan antes de adquirir relevancia político-estratégica.

Cáceres (2023) recuerda que la doctrina argentina concibe el empleo del instrumento militar ante agresiones de origen estatal y militar, mientras que las amenazas no cinéticas y la zona gris tensionan la delimitación entre Defensa y Seguridad; Elizondo (2019) advierte que la Argentina puede resultar vulnerable a estrategias de zona gris por la percepción de ausencia de amenazas y la falta de un ámbito común donde los asuntos estratégicos se examinen de manera integral.

El abordaje interagencial excede el intercambio de información: permite integrar significados y apreciar efectos convergentes. Una falla de anticipación ocurre cuando existe información sectorial suficiente, pero no una apreciación capaz de advertir a tiempo lo que esos procesos producen en conjunto; en ello debe trabajar la Defensa Nacional desde su competencia.

La continuidad estratégica excede un ciclo de gobierno y debe concebirse como política de Estado, compatible con distintas visiones sobre el alcance de la intervención estatal. Eso no equivale a llenar la agenda de alertas ni a securitizar toda transformación sectorial, sino establecer criterios para distinguir entre cambios que amplían las opciones nacionales y aquellos que reducen capacidades cuya recuperación demandaría plazos incompatibles con una crisis.



Allí la academia de la Defensa Nacional puede aportar una pregunta que suele permanecer dispersa entre racionalidades sectoriales:

¿qué capacidades nacionales deben mantenerse disponibles, bajo qué condiciones y en qué temporalidades, para preservar la libertad de acción del Estado?

Formularla no restringe la eficiencia ni cuestiona la participación de actores diversos: exige determinar las condiciones, los sustitutos y los plazos necesarios para que las capacidades críticas permanezcan disponibles, puedan reemplazarse o se recuperen oportunamente.

Para ello, la academia puede contribuir al análisis comparado de trayectorias, al examen de dependencias y a la estimación de temporalidades; su función no es multiplicar advertencias, sino construir criterios para distinguir cuándo una transformación amplía las opciones del Estado y cuándo, gradualmente, las reduce.

La Seguridad Estratégica del Estado exige que las capacidades críticas no sólo existan, sino que permanezcan disponibles, sean sustituibles o puedan recuperarse dentro de los plazos que impongan los escenarios de interés nacional. Preservar la libertad de acción exige, en consecuencia, anticipar la erosión antes de que la pérdida de opciones se vuelva irreversible.

Esto plantea, como actividad permanente, determinar qué funciones no admiten interrupción, en qué plazos pueden recuperarse y cuándo la brecha entre el tiempo de recuperación y el tiempo disponible obliga a elevar el asunto al nivel Política de Estado.

Preservar la libertad de acción del Estado exige detectar a tiempo las dependencias y pérdidas graduales de capacidades, antes de que las alternativas desaparezcan.

F\



PUBLICACIONES **UNIVERSITARIAS**



La Universidad de la Defensa Nacional produce y reúne conocimiento sobre uno de los campos más complejos del presente: la defensa.

A través de sus revistas y publicaciones, circulan ideas, investigaciones y debates que atraviesan la estrategia, la historia, la doctrina, la tecnología y la conducción.

Cada publicación es una puerta de entrada a ese campo.

Explorá nuestras revistas:
Visión Conjunta · Fortín · Defensa Nacional · Casus Belli · RESGA · Boletín del Observatorio de Táctica Naval · Formando Cabrales · Revista de la Escuela de Guerra Naval

Leé. Investigá. Participá.

Accedé a todas las publicaciones de la Universidad de la Defensa Nacional escaneando el QR o ingresando a undef.edu.ar/bibliotecas

Universidad de la Defensa Nacional



STAFF

David Zeigner, dirección ejecutiva
Sebastián Zaccaría, dirección editorial
Luciano Zaldarriaga, coordinación editorial
Santiago Pedrero, asistencia de redacción
Gonzalo Restrepo Zanier, diseño

CONSEJO EDITORIAL

Julio César Spota
Hernán Isasmendi
Verónica Mulle
Daniel Esteban
Alberto Costamagno

revista.fortin@undef.edu.ar
Maipú 262, CABA

ISSN 3072-8827

F\

UNDEF libros

UNDEF